

DOCUMENTO

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE A TRAVÉS DE "LA SEMANA POLÍTICA" (SEGUNDA PARTE)

Miguel González Pino*

En el número anterior de *Estudios Públicos* se inició la publicación de este documento que contiene una selección de artículos de la sección "La Semana Política" del diario *El Mercurio*, escritos por quien fuera en esa época Subdirector y Director del mismo, don Arturo Fontaine Aldunate.

En esa primera parte se recogió el período que va desde 1965 a 1970, que corresponde a la época del gobierno de Eduardo Frei hasta la elección de Salvador Allende.

Esta segunda parte abarca el gobierno de Salvador Allende, desde enero de 1971 a septiembre de 1973. Para cerrar la línea de pensamiento que el articulista desarrolla a lo largo de este período se incluye también el editorial del 10 de septiembre de 1973.

Diversos temas y acontecimientos se abordan en estos artículos: la existencia de dos "vías revolucionarias" al interior del gobierno y la pugna entre ellas por imponerse; la penetración del marxismo en los partidos de clase media y su efecto disgregador; el surgimiento, paralelo al "modelo chileno" de marxismo, de un modelo chileno para detener al comunismo; la forma como se va estructurando el "área social" de la economía mediante las tomas y las expropiaciones, al margen de la discusión que sobre el tema

* Abogado y Periodista. Investigador del Centro de Estudios Públicos.

se realiza en el Parlamento, todo lo anterior dentro de un clima progresivo de deterioro de la institucionalidad.

Tal como en la primera parte, para mejor comprensión de los artículos,¹ al comienzo de cada uno se señalan detalles acerca de los hechos a que se refiere el comentarista, con indicación de la fuente donde puede encontrarse la información respectiva.

¹ Véase en la introducción a la primera parte la explicación sobre el "estilo mercurial" (*Estudios Públicos*, N° 45, pp. 365-369).

LA SEMANA POLÍTICA (1971-1973)

El poder social

(31 de enero de 1971)

Diversos hechos de actualidad son analizados en este comentario: el primero, la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional contra el Ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, por inobservancia de las leyes, ataques al Poder Judicial e indultos ilegales. El Partido Demócrata Cristiano acuerda la abstención (EM, 30 enero, pág. 22).

Se denuncia la compra de acciones de bancos particulares por parte de CORFO y el Banco del Estado, los que son pagados mediante bonos CAR del Banco Central (EM, 17 enero, pág. 9).

El Gobierno anuncia un proyecto de creación de "tribunales vecinales" (EM, 24 enero, pág. 25). En el campo sale a la luz pública el Movimiento Campesino Revolucionario, y existen 50 fundos ocupados ilegalmente en Cautín (EM, 24 enero, pág. 9). Grupos campesinos de Nuble piden la expropiación de 341 predios.

La Semana Política

EN EL PARLAMENTO

La rápida acción de la Unidad Popular dirigida a poner al país en la ruta del socialismo sigue encontrando obstáculos que no son más que consecuencias del difícil ensamble de la legalidad democrática con el marxismo-leninismo.

Debe reconocerse que ha sido bien elegida la estrategia de la Unidad Popular para introducir fórmulas revolucionarias dentro del sistema jurídico y económico tradicional. El señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce, se ha singularizado por su actitud de crítica

a la Corte Suprema y a los hábitos tradicionales del Poder Judicial. En su ademán de rebeldía se hizo objeto de una acusación constitucional, por haber contribuido al indulto de procesados ultraizquierdistas sin esperar la sentencia condenatoria y, sobre todo, por constituirse en una especie de acusador público del Poder Judicial y de sus miembros más representativos, actuaciones todas ellas que formalmente no contradicen al sistema jurídico, aunque en el fondo buscan deteriorarlo.

La táctica de hacer comprar las acciones bancarias por el Banco del Estado, como mandatario de la Cor-

poración de Fomento, a fin de retardar el debate legislativo e impedir que el Congreso, en uso de sus atribuciones, se pronunciara en forma expresa y oportuna sobre la utilidad pública de la respectiva expropiación, es una maniobra que distorsiona el ordenamiento legal.

El proyecto que introduce los tribunales populares bajo la denominación inocua de vecinales subvierte los principios básicos de nuestra legislación, autorizando que el Estado o sus representantes se inmiscuyan en zonas reservadas desde muy antiguo por el derecho de Occidente a la inviolable conciencia de la persona.

En la discusión del proyecto sobre la nacionalización de la gran minería del cobre, formulado en términos de reforma constitucional por los asesores jurídicos del Gobierno, pugnan dos concepciones profundamente divergentes. Una de ellas podría llamarse nacionalista y a ella adhieren los demócratacristianos de todos los matices y también los nacionales y radicales. Consiste en la tesis de que la gran minería del cobre, por sus especiales y decisivas características frente al conjunto de la economía chilena, debe pertenecer al Estado, previa justa indemnización a los propietarios expropiados. La otra concepción del asunto, defendida brillantemente por el senador Altamirano, se opone a la propiedad privada sobre todos los bienes de producción y está por la nacionalización del cobre, no tanto en virtud de una voluntad emancipadora de nuestra economía, sino más bien por la idea de que la colectivización de la riqueza productiva básica del país es el preludio y

el arquetipo de la propiedad socialista.

La nacionalización del cobre no sería entonces una conquista de mayores ingresos para el país, sino el ensayo de una tesis de propiedad social de los medios de producción que valdría lo mismo para las empresas extranjeras y para las chilenas, así como para la minería, la agricultura, la industria o el comercio.

La conducta del Ministerio del Interior frente a visibles atentados contra el orden público que se consuman no por los campesinos habitantes de los predios en litigio, sino por elementos ajenos a ellos y que proceden a ocuparlos con violencia en las cosas o en las personas, es otro de los rasgos de este momento difícil, en que las mentes chilenas pugnan por asimilar su respeto a la ley y su habitual confianza en el Poder Ejecutivo con ciertos hechos fuertemente reñidos con el sentir jurídico del país y hasta opuestos en forma drástica con la ley.

Parece justo entonces que el Partido Nacional haya propuesto una acusación constitucional contra el Ministro de Justicia, señor Cruz Ponce, aunque ella fracase por circunstancias políticas momentáneas, debido a que la Democracia Cristiana, si bien concuerda en que los ataques a la Corte Suprema y los indultos a procesados no se concilian con nuestro régimen de derecho, estima que la responsabilidad de las infracciones recae sobre el Poder Ejecutivo en conjunto.

Es también justo que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Nacional, por razones diversas, se hayan opuesto al mecanismo en

virtud del cual el Estado entra a comprar acciones bancarias de particulares a mayor precio que el de Bolsa, usando para ello el poder de emisión del Banco Central.

Los últimos tiempos no han sido adecuados para afianzar la fe en el Estado, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo presenta una reforma constitucional que niega valor a los convenios y contratos-leyes y que, con más razón, obliga a mirar con desconfianza a los simples derechos adquiridos. Quienes reciben ahora bonos CAR pueden hacer un buen negocio, a condición de que el Gobierno perseverare en otorgar a dichos bonos un valor real por encima de la desvalorización monetaria.

Los Partidos Demócrata Cristiano y Nacional se han pronunciado enérgicamente en contra del proyecto sobre tribunales vecinales o populares. De esta manera ellos custodian el régimen jurídico chileno. Una actitud similar observan otros sectores democráticos no marxistas, pues ellos sienten natural desconfianza hacia normas que pretenden colocar a los vecinos bajo la vigilancia de elementos que están destinados a fiscalizar su vida privada y a condenar actos, aunque ellos no sean constitutivos de delito o de infracción a las leyes.

En la discusión del proyecto de reforma constitucional el concepto nacionalista de que las riquezas minerales básicas han de pasar al Estado ha tenido primacía sobre el grave problema de la propiedad privada o de la propiedad socialista respecto de bienes de tanta importancia. Podría decirse que, en este caso, gracias a un hábil equívoco, los marxistas han votado junto con los

demócratas, aunque los conceptos, los motivos y las metas de unos y otros son profundamente diferentes.

La situación creada en el campo chileno, en que el esquema de la reforma rápida, drástica y masiva del ex funcionario demócratacristiano y actual Ministro de Agricultura de la Unidad Popular, señor Jacques Chonchol, está produciendo resultados dramáticos, excede del alineamiento político actual. Quienes conozcan la estructura de la provincia chilena comprenderán fácilmente que una reforma del tipo de la propuesta, a la cual se añaden ocupaciones ilegales de fundos, en forma caprichosa o sistemática, tiene un sentido desquiciador nunca visto en la historia del país.

EL PODER SOCIAL

Es digno de observarse que la pugna por el poder en Chile no se limita en este momento a la conquista de los municipios o a la toma veloz de posiciones en la Administración. La Unidad Popular, y específicamente el comunismo, no hacen misterio de que el poder para ellos no consiste en el simple control político sobre el Estado, sino en el dominio sobre la sociedad y sobre cada uno de los ciudadanos que la forman.

Junto con el apoderamiento de la economía del país, las fuerzas de extrema izquierda realizan profundos avances en el terreno social. Ellas captan gremios, sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos y otras organizaciones sociales semejantes, y rápidamente los hacen militar a su servicio. Ese avance se efectúa, desde luego, entre las instituciones del sector público, pero

también se extiende a las empresas privadas urbanas y rurales, a las poblaciones y demás núcleos susceptibles de dar a la izquierda el control absoluto de las masas. *Los* medios empleados son indistintamente el halago o la amenaza. Uno y otra van entregando el poder social a la izquierda marxista y singularmente al comunismo.

El ciudadano chileno, orgulloso de su democracia, se ha contentado siempre con observar pasivamente la marcha de los asuntos públicos a los cuales aporta el simple sufragio periódico. La Democracia Cristiana hizo un intento por romper esta pasividad e impulsar las organizaciones populares. Sin embargo, las grandes mayorías permanecen al margen de toda organización comunitaria y hoy observan inertes la forma como minorías comunistas promueven las huelgas y ocupaciones estratégicas para afianzar el control del partido más poderoso de la Unidad Popular.

La vida política se está dando en dos planos. Uno es el administrativo y parlamentario, en que el Gobierno realiza una política que aparenta encuadrarse en las formas legales y en que los partidos viven todavía entregados al juego de posiciones tradicionales. El otro plano es que el que tiene su mejor expresión en las provincias de Nuble y Cautín. Es el de las ocupaciones ilegales, el de la persecución de los opositores al régimen, el de la acción de los comandos armados a pretexto de preparar al pueblo para un supuesto enfrentamiento.

La presencia de estos dos planos permite que los funcionarios del Poder Ejecutivo tranquilicen a los

empresarios y propietarios modestos, en tanto que otros funcionarios de menor jerarquía y elementos partidarios del Gobierno participan en operaciones que siembran alarma y que significan el despojo de aquellos que se pretendía tranquilizar.

Esta duplicidad, muy propia por lo demás del período de consolidación del comunismo, hace también que el desempleo aumente como fruto natural de las incertidumbres y agobios a que están sometidas las empresas, mientras que las declaraciones oficiales suponen una actividad económica creciente que estaría sólo enturbiada por deliberados propósitos de los adversarios políticos y comienzan a oírse las denuncias contrarrevolucionarias del castrismo.

Los partidos democráticos hacen bien en recordar en el Parlamento y en la actividad política general que el Ejecutivo ha de mantenerse en los cauces constitucionales y legales. A tal fin obedece la acusación planteada por los nacionales contra el Ministro de Justicia y que los democratacristianos no apoyan, bajo el convencimiento de que la responsabilidad principal no es del acusado sino de todo el Gobierno. Es de desear, en todo caso, que, frente a una estrategia legislativa y administrativa tan eficaz como la de la Unidad Popular, los partidos democráticos encuentren manera de no dejarse aislar y anular.

Sin embargo, la acción en ese plano sería ineficaz si no se despertara la iniciativa de cada chileno en el nivel comunitario que le corresponde y en especial en la cooperación con los partidos democráticos en las elecciones de abril próximo. Dichas elecciones no son un plebis-

cito, pero deben dar la oportunidad para que la ciudadanía democrática se organice y surjan los líderes naturales capaces de defender la subsistencia de la libertad en cada núcleo social. Es posible que la lucha electoral sea muy difícil, porque la masa de los chilenos no sabe aún lo que significa el comunismo y éste se le presenta lleno de disfraces y de promesas. El partido más poderoso de la Unidad Popular no mostrará todo lo que es sino cuando los ciudadanos no tengan alternativa que los libre de él. Esa ha sido la experiencia mundial y está llevándose a cabo entre nosotros.

El congreso del Partido Socialista, al que acudió el Presidente

Allende, manifiesta en sus dos tendencias no tan sólo rivalidades personalistas, sino también dos estrategias para competir con el asombroso avance del comunismo. Más "blandos" o más "duros", los socialistas han ganado la Presidencia de la República, pero la fórmula de la Unidad Popular es manejada con gran acierto por los comunistas, que se han instalado en la maquinaria económica estatal y en puestos claves del Gobierno Interior. El congreso socialista de La Serena debería esclarecer el papel concreto que le corresponderá a dicha colectividad marxista dentro de la Unidad Popular y del Gobierno del Presidente Allende.

Los comunistas y el Presidente

(7 de marzo de 1971)

El 3 de marzo comienza en Santiago el Pleno del Partido Comunista, destacándose en el informe del evento los 3 objetivos básicos que pretenden cumplir los comunistas desde el Gobierno: nacionalización del cobre, estatización de los bancos y reforma agraria (EM, 4 marzo, pág. 19). El Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, anuncia la expropiación de 1.000 fundos (EM, 5 marzo, pág. 1). El Gobierno retira el proyecto de tribunales vecinales (EM, 5 marzo, pág. 19).

La Semana Política

LOS COMUNISTAS Y EL PRESIDENTE

La celebración del Pleno del Partido Comunista, eje de la combinación de Gobierno, realizada entre el miércoles y el viernes, es decir, treinta días antes de las elecciones de regidores, es el principal hecho político de la semana.

El informe estuvo a cargo del miembro del Partido Comunista señor Víctor Díaz.

Al estilo de los regímenes en que predomina ese partido, el informe fue una continua detracción de sus opositores y un encendido elogio del oficialismo. "Está en marcha la solución a fondo de todos los problemas de este país. Tenemos las condiciones para dar cumplimiento a los grandes anhelos de muchas generaciones de patriotas. Somos capaces de derrotar los intentos de los enemigos de volver atrás. Nuestro trabajo firme y resuelto por la unidad del pueblo está dando sus frutos", dice el señor Díaz.

En lo político, el informe censura una supuesta maniobra tendiente

a halagar al Presidente de la República, en lo que denota el explicable temor comunista de que el Jefe del Estado no acepte la totalidad de las exigencias y planteamientos del principal partido de la Unidad Popular.

No hay ni ha habido tales halagos, sino la afirmación, por una parte, de la autoridad presidencial establecida en la Constitución, y que ha hecho posible históricamente el avance democrático del país dentro de la ley, y por otra parte una interpretación del triunfo del Excmo. señor Allende que no es del agrado de los comunistas.

Esta interpretación señala que la victoria del Presidente Allende es de su persona, en el sentido de que para el pueblo él aparece a lo largo de muchas campañas como abanderado de los ciudadanos más modestos y como cabeza de corrientes renovadoras.

Más que una victoria del programa de la Unidad Popular, la jornada del 4 de septiembre fue un repudio a las otras alternativas y una

posibilidad entregada por el electorado a quien había permanecido desde los tiempos del Presidente Aguirre Cerda sin acceso a responsabilidades de Gobierno.

Parece indiscutible que el pueblo no votó masivamente en favor del programa de la Unidad Popular ni mucho menos dio su consentimiento a las formas en que tal programa se está aplicando. Los electores del Presidente Allende sabían que se proyectaba nacionalizar los bancos particulares, pero el mecanismo empleado, en virtud del cual se prescinde del Congreso para llevar el sistema del crédito al área social, no se anunció en la campaña. Igualmente nadie podía ignorar que debía avanzarse con rapidez en la reforma agraria, pero no se pensó que, a través de los interventores y otros apremios, se colocara a la agricultura en el estado en que actualmente se encuentra. Era evidente que venía la nacionalización del cobre, pero fue una sorpresa el desconocimiento de los contratos leyes y la fijación de condiciones de indemnización a las compañías extranjeras que pueden resultar no equitativas desde el punto de vista jurídico internacional.

Más indiscutible todavía es que el pueblo no votó democráticamente por el régimen comunista. Los campesinos creyeron que el Gobierno expropiaría las tierras para dárselas a ellos y no para formar extensas haciendas estatales. Los trabajadores en general están aún favorecidos por la política de reajustes, pero la desocupación y la escasez que se generan en el rápido desaliento de los empresarios privados tampoco han sido previstas por la

gran mayoría de los empleados y obreros.

No es efectivo que el electorado chileno haya votado en las urnas por un régimen marxista-leninista. Y ese error induce a engaño en Chile y en el extranjero. Si no hubiera sido por la personalidad del Presidente Allende, por sus largas luchas y por sus condiciones de arraigo al país, los comunistas no habrían logrado éxito.

Por lo demás el pueblo chileno no ha sufrido todavía al comunismo. Una votación consciente a favor o en contra de ese régimen podría darse en Checoslovaquia o en Polonia.

Si en esos países, restablecidas las informaciones y las elecciones libres, se preguntara a la ciudadanía si está de acuerdo o no en seguir bajo el comunismo y la respuesta fuera afirmativa, allí tendríamos una decisión verdadera, madura, meditada, adoptada con pleno conocimiento de lo que se trata.

Entre nosotros, los comunistas se niegan a que el pueblo conozca todas las características positivas y negativas del régimen que preconizan. Han hecho ellos una campaña larga en contra de la supuesta "desinformación" de la prensa profesional, pero en este país han dispuesto de material abundante a favor o en contra del mundo capitalista que proporciona esa misma prensa; han dispuesto además del libre acceso a la propaganda del mundo socialista y a la crítica que éste hace a sus adversarios. Sin embargo, con respecto al régimen que desean para Chile, y cuyos precedentes se encuentran en Europa Oriental, los comunistas rehuyen la información clara.

Un ejemplo entre tantos es lo que ocurre con la película cinematográfica "La Confesión", cuyo tema es de un comunista y cuyos directores y protagonistas principales (los mismos del filme "Z") son también de esa tendencia. Pues bien, no ha podido aún exhibirse en Chile. Esto indica no sólo que los comunistas temen dar a conocer al público cómo es su régimen, sino que además establecerían aquí un sistema más severo que las metas del comunismo francés o de la primavera de Praga.

No es entonces por un propósito de halago que puede afirmarse que los comunistas se parapetan tras el Presidente de la República y, aprovechando el prestigio y la habilidad política de éste, se preparan a aumentar sus votos en las próximas elecciones, evitando que el pueblo conozca el término del camino a que quieren conducirlo.

LOS COMUNISTAS Y LA UNIDAD POPULAR

Si el triunfo del Presidente Allende en la estrecha carrera del 4 de septiembre no puede identificarse lealmente a un triunfo electoral del marxismo-leninismo, por falta de conocimiento popular de lo que este régimen significa, así también la campaña de regidores se está dando por los partidos marxistas nuevamente parapetados en la figura del Presidente Allende.

A pesar de que hay sectores populares que se resienten con la inseguridad provocada por las tomas de viviendas o con la inquietud de las provincias agrícolas, así como con la cesantía, parece evidente que las medidas administrativas de efecto

inmediato, tomadas a cualquier costo, convencen a muchos y dan buenas perspectivas electorales a la Unidad Popular y, dentro de ella, a los comunistas.

Reajustar los sueldos y salarios, mantener estables los precios aunque hayan subido los costos, acen-tuar los gravámenes a que están sujetas las empresas, intervenir administrativamente fábricas y fundos, anunciar obras públicas atrayentes y adoptar siempre la línea de más fácil aceptación por las grandes mayorías, en tanto que se denuncian supuestas sediciones por parte de los opositores, es una política que no ha presentado grandes quebrantos y que impide ver lo que realmente sucede en el país. Un factor favorable en esa política ha sido el transcurso del verano, en que de una manera o de otra, amplios sectores se las arreglan para descansar y olvidar.

Es improbable que las empresas particulares hayan aumentado sus inversiones, pero el gran público ha contado con dinero y los bienes de consumo han estado al alcance de muchos.

Los efectos de la cesantía no alcanzan aún a pesar en gran escala sobre la población y por algún tiempo las importaciones atenderán las posibles dificultades que la crisis agraria pueda traer en ciertos abastecimientos fundamentales.

No tienen influencia sobre los técnicos marxistas los augurios de que las condiciones económicas tienden a deteriorarse, pues ello no se hará visible sino después de las elecciones de abril. Por lo demás, mientras el mercado del cobre presente buenas perspectivas para

nuestro comercio exterior, puede seguirse la política tradicional de atender con divisas a consumos que debieran financiarse con más producción interna.

El electorado irá a las urnas conociendo sólo la etapa en que el comunismo empieza a destruir a sus adversarios más fuertes. Es la época en que puede emplearse demagogia, exacerbarse el consumo y llevar una política fiscal generosa. La etapa dura, la de la construcción del socialismo, todavía no empieza. Cuando ella tenga lugar es presumible que los aliados de los partidos marxistas actuarán de comparsas o quedarán fuera de la ruta, como ha sido la experiencia tantas veces repetida.

La política actual de la Unidad Popular, o mejor de sus estrategias principales, es el aniquilamiento de los opositores, no mediante la "revolución de bolsillo", de que se habló despectivamente en el Pleno

Comunista, sino mediante la revolución en serio, dotada de características chilenas. No hacen falta en ella motivaciones elocuentes ni grandes violencias. Bastan las medidas económicas, la propaganda halagadora para el elector y la denigración o enjuiciamiento de los adversarios. Esas son las armas que los comunistas han empleado hasta ahora y cuyo uso habrá de intensificarse rápidamente.

Las próximas elecciones municipales son una tarea difícil para los partidos democráticos, porque, aunque constituyen una definición popular entre la libertad y la dictadura legal, los términos del dilema no aparecerán claros para muchos ciudadanos que, de conocerlos realmente, no vacilarían en repudiar al marxismo-leninismo, sin que ello implique restarle posibilidades políticas al Presidente Allende. Esa tarea difícil de los partidos democráticos exige unión y responsabilidad.

Batalla de la información

(18 de abril de 1971)

Las elecciones municipales realizadas el 4 de abril dieron los siguientes porcentajes de votación para los partidos, en orden decreciente: Demócrata Cristiano, 26,21%; Socialista, 22,89%; Democracia Radical, 3,91%. La abstención fue del 25%.

Diversos intelectuales, dirigentes políticos y un sacerdote italiano llegan a Chile invitados por periodistas de izquierda, en lo que se denominó la "Operación Verdad", destinada a mostrarles lo que está realizando el Gobierno de la Unidad Popular (EM, 17 abril, pág. 23). Culminan las jornadas realizadas por 80 sacerdotes, religiosas y laicos, con el tema "Colaboración de cristianos y marxistas en la construcción del socialismo".

La Semana Política

BATALLA DE LA INFORMACIÓN

Los partidos políticos analizan internamente los resultados de las elecciones del domingo 4. Establecido que la Unidad Popular no logró formar una clara mayoría frente a sus opositores, el balance se realiza ahora respecto de la distribución relativa de las fuerzas dentro de la combinación de Gobierno y en las tres tiendas de oposición.

La primacía socialista dentro de la Unidad Popular, la virtual congelación de los comunistas, el desastre del radicalismo oficial y la confirmada insignificancia de los demás integrantes del bloque de Gobierno son temas que dan para largos debates.

Asimismo, la posición demócratacristiana, diferenciada de los nacionales virtualmente en todo lo que no es la defensa de la institucionalidad democrática, es motivo de examen, pues los comunistas proyectan superar su congelación elec-

toral atrayendo hacia su línea a la Democracia Cristiana, el partido más importante del espectro político y que recibió su contingente de votos por parte de los ciudadanos que quieren cambios pero no comunismo ni otro tipo de dictadura colectivista.

El Partido Nacional conservó el 90 por ciento de su votación, pese a la derrota del candidato independiente presidencial, señor Alessandri, a quien muchos erróneamente creían identificado con la suerte de los nacionales. La actitud de abierta oposición deja a este partido con posibilidades de recoger los descontentos que provoque el Gobierno, en tanto que la caída de los reductos de la derecha tradicional lleva hoy a muchos ciudadanos a no asociar más a los nacionales con el conservadurismo económico.

La Democracia Radical tiene motivos para estar satisfecha de sus resultados y se siente alentada en su línea de oposición democrática con

arraigo firme en la tradición del radicalismo.

Tal como quedó el panorama político, es evidente que el Gobierno no podrá acudir al plebiscito para seguir su programa. Sus esfuerzos estarán pues dirigidos a aumentar por las vías administrativas el área social y a ganarse la opinión pública a través del éxito de sus medidas. La experiencia de estos meses le demuestra que la espectacularidad de los beneficios distribuidos a consumidores y trabajadores no basta para concitar seguro apoyo si del otro lado hay cesantía e inflación. También le ha demostrado la experiencia que la labor de los publicistas del Gobierno no es suficiente para ofrecer una imagen positiva de la labor oficial.

En este momento en que razones estacionales y otras derivadas de los arbitrios gubernativos arriesgan producir las primeras dificultades en los abastecimientos y precios, el dominio de las informaciones tiene singular importancia para los estratagemas de la Unidad Popular.

La agrupación disciplinada de los periodistas oficialistas en un organismo de penetración y resistencia es un intento de conseguir el dominio del campo informativo. Simultáneamente se desarrolla una campaña de injurias y falsedades en contra de los periodistas que no se pliegan a la línea del Gobierno. "Desconocer que hoy el llamado oficialismo y la causa popular son una misma cosa, es simplemente mentir", dice en su página editorial el vocero del Gobierno, el diario "La Nación". El vasto despliegue de la "Operación Verdad" es otra de las iniciativas destinadas a que impere

respecto de Chile una sola versión, precisamente la oficialista. Finalmente se van empleando argumentos espirituales y religiosos, análisis sociológicos y medidas administrativas y económicas que coinciden en el ataque a los medios informativos que no dependen financieramente del Gobierno.

La finalidad es explicable, pero no justificable. Los expertos del Gobierno han acometido simultáneamente reformas profundas en la agricultura, en la distribución de mercaderías, en el sistema bancario, en la relación entre precios y salarios, en la industria, en la minería, en los transportes y hasta en la actividad editorial. Todas esas reformas conducen a traspasar rápidamente al Estado el poder económico que aún permanecía en manos particulares, dejando a éstos sólo la pequeña o mediana actividad que no sean significativas para la dirección del proceso que lleva al socialismo.

El programa suscita críticas entre los afectados y al parecer trae desajustes de mucha consideración. Algunos de éstos fueron advertidos por el Presidente de la República a los periodistas del oficialismo, reunidos en asamblea. Dijo S. E. que hasta que el país sea dueño de la riqueza del cobre tendrá que afrontar extraordinarias dificultades y peligros; que, aunque no es el ánimo del Gobierno apropiarse de lo ajeno, "siempre se encontrará que las indemnizaciones que, después de estudios serios, podemos pagar serán exiguas y siempre se buscará la manera de decir que nosotros hemos roto el respeto internacional al derecho de los inversionistas", y que corresponde crear la imagen auténtica

en el exterior de que esta batalla nacionalizadora no tiene intención revanchista sino patriótica.

En la misma reunión el Excmo. señor Allende llamó a tomar conciencia de lo que significa la retirada de los técnicos de la industria del cobre, muchos de los cuales —como se sabe— son de nacionalidad chilena. Debido a este retiro "nos encontramos frente a dificultades técnicas que serán superadas, pero que son extraordinariamente difíciles de superar". A tales dificultades se une la falta de responsabilidad de ciertos gremios que insisten en reajustes de remuneraciones superiores a los límites convenidos con la CUT.

Manifestó también el Presidente que los sueldos y salarios reajustados frente a los precios congelados han producido una expansión de las compras, motivo por el cual se "están agotando los stocks", lo que hace necesario "impulsar el proceso productivo de tal manera que no nos encontremos de aquí a dos o tres meses con que no podemos surtir la demanda que el pueblo tiene derecho a que sea respondida".

"No podemos seguir tolerando, expresó el Jefe del Estado, el ausentismo de empleados y obreros a su trabajo, fenómeno que llega en algunas empresas a niveles increíbles".

La búsqueda del control de las informaciones por medios formalmente legalistas puede concebirse entonces como un esfuerzo orientado a que las autocríticas o reflexiones presidenciales lleguen a círculos seguros y que los efectos negativos de algunas medidas no se exhiban sin atenuantes al juicio de la opinión pública.

LA "OPERACIÓN VERDAD"

El Presidente Allende fue sin duda sincero con los periodistas oficialistas al exponerles sus inquietudes con respecto a la marcha de la industria del cobre, al riesgo de inflación, al ausentismo de los trabajadores y a las grandes dificultades que pudieran aguardar a su Gobierno.

El diario comunista "El Siglo" creyó más prudente dar la versión del discurso presidencial a los periodistas eliminando la parte que se refería a las dificultades económicas mencionadas.

La censura del diario comunista no fue comunicada a los periodistas que entregaron el texto oficial del discurso o éstos prefirieron dejar íntegro el documento. El hecho es que la alocución presidencial tuvo en la prensa chilena una versión expurgada por los comunistas y una versión fiel que publicaron otros diarios.

El incidente ha marcado el comienzo de la llamada "Operación Verdad", cuyo fin es precisamente mostrar que los adversarios de la Unidad Popular, y en especial de los partidos marxistas, no están presentando un cuadro verídico de lo que sucede en Chile.

Muchos aspectos positivos de la realidad nacional pueden señalar los periodistas oficiales al público chileno y extranjero, muchos aspectos favorables que son consecuencia de medidas de la Unidad Popular o que deriven de políticas anteriores a ella. Pero sería deseable que ninguno de ellos volviera en el porvenir a borrar las palabras del Presidente. En esta oportunidad ellas debieron haber sido destacadas en varios órganos

de prensa y otros medios informativos, pues el Jefe del Estado las pronunció para que los periodistas de la Unidad Popular lo ayudaran a desterrar el ausentismo de las faenas o los reclamos por aumentos de salarios demasiado ambiciosos. En vez de darle el verdadero relieve, el diario comunista suprime largos párrafos de la versión del discurso, con lo que deja en claro qué espíritu y qué estilo son los característicos del comunismo en el poder.

La incidencia es ilustrativa de lo que ocurriría si la información fuera controlada por organizaciones políticas de periodistas oficiales o si los medios informativos no pudieran mantenerse y progresar con otros recursos que los provenientes del Gobierno o manejados por éste.

Insistimos en que el diario "La Nación" afirma en su página editorial que desconocer que el llamado oficialismo y la causa popular son una misma cosa es simplemente mentir, criterio que obliga a meditar sobre los riesgos que para la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión pueden tener las amenazas que hoy se ciernen contra la información libre. Cuando el oficialismo y la causa popular se identifican obligatoriamente, pues afirmar lo contrario envuelve mentira o sedición, estamos en el plano de argumentos de todos los despotismos. El pueblo, las aspiraciones populares, la liberación popular, la causa popular pueden ser atendidas y servidas por el Gobierno, pero cuando se pretende que el oficialismo y el pueblo son la misma cosa quedan autorizadas la prohibición de la crítica y la censura de las informaciones.

Es útil que este problema público chileno se haya planteado mientras está en curso la "Operación Verdad". Quienes vienen del exterior a participar en ella encontrarán un régimen político de libertades públicas, pero es oportuno que se impongan de que no todos los que hoy ejercitan esas libertades creen realmente en los derechos de una oposición vigorosa o de una información sin mengua ni traba. Es útil además que sepan que el propio Presidente ha indicado las señales o grietas que, en lo económico, presenta la actual realidad chilena, por lo que será indispensable que vuelvan en una ocasión ulterior a conocer los recursos empleados por nuestro país para sobrepasar estas dificultades.

La "Operación Verdad" es el camino que ha encontrado el Gobierno para defender informativamente sus realizaciones. Los ciudadanos no comprometidos acompañarán ese esfuerzo siempre que diga toda la verdad de Chile y no tan sólo la de la Unidad Popular, es decir, siempre que el procedimiento puesto en práctica por "El Siglo" con un discurso presidencial no sea precedente para una continua operación de recorte de la realidad chilena. Si la Unidad Popular consigue el bienestar y la paz durables del pueblo en un clima de veracidad informativa sin reservas, el llamado experimento chileno tendrá derecho a entrar a la historia humana como una valiosa conquista, pero si los fracasos y las críticas se silencian en la cerrada identificación entre el oficialismo y la causa popular, Chile habrá repetido una de las tantas experiencias de esclavitud social que conoce esta época.

Odios importados

(20 de junio de 1971)

El 8 de junio de 1971 es ametrallado (cuando iba en su automóvil junto a una de sus hijas) el ex Ministro del Interior del Gobierno de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Zujovic. En un enfrentamiento con la policía mueren los integrantes de la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, Ronald y Arturo Rivera Calderón, señalados como autores materiales del asesinato. Ambos habían sido expulsados del MIR y antes habían asesinado a un carabinero.

Días más tarde, el 16 de junio, el jefe de la VOP, Heriberto Salazar, asalta el cuartel central de Investigaciones y luego de dar muerte a 3 detectives se suicida.

La Semana Política

PUGNA ENTRE DOS VIAS REVOLUCIONARIAS

Los dramáticos episodios que empezaron con el asesinato del ex Vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Zujovic, siguen preséntandose a encontradas reacciones.

El sentimiento de la mayoría del público es de horror ante la violencia desencadenada y de temor ante las posibles secuelas de lo ocurrido.

El punto de vista del Gobierno ha sido afrontar este brote de delincuencia política insinuando o afirmando que sus instigadores podrían ser de la derecha, pero, en realidad, no perdiendo de vista a los elementos de la ultraizquierda y actuando con celeridad y energía respecto al grupo de asesinos materiales del señor Pérez Zujovic.

Los partidos de la oposición han debido responder a los cargos que el Gobierno les formula e insistir en la necesidad de que se disuelvan los grupos armados ilegales cualquiera que sea su filiación y objetivos.

La línea oficial de los partidos de la Unidad Popular ha sido lamentar los crímenes registrados y atribuirlos a delincuentes habituales o sicópatas que obedecerían a posibles encargos de elementos de ultraderecha.

No obstante, empiezan a escucharse elogios públicos al valor de los asesinos y no disimuladas injurias a la memoria del señor Pérez Zujovic. Elementos estudiantiles y aun parlamentarios no han podido condenar esta semana lo que elogiaban no hace mucho como coraje revolucionario en los comandos que actúan bajo las siglas "VOP". El 17 de febrero de 1970 la revista de la ultraizquierda "Punto Final", dirigida por periodistas que hoy ocupan altas posiciones en el periodismo de la UP, rendía homenaje al fundador de la VOP, Ismael "Francisco" Villegas, muerto el 31 de enero de 1970, de un disparo que le hizo un carabinero herido por él a raíz de sorprenderse en un auto robado. "Punto Final" elogia a Villegas,

como "el primer revolucionario chileno que cae bajo las balas de la policía".

Estos extremistas pertenecían, sin duda alguna, a la izquierda, como lo demuestran diversos antecedentes, y, por cierto, han de haber encontrado contactos y apoyos en su calidad de revolucionarios. De otro modo no se explica que el Supremo Gobierno haya indultado en diciembre de 1970 a los siguientes "vopistas": Arturo Rivera Calderón, Edmundo Magaña Torres, Gabriel Carvajal Barrios, Leonardo Farfán Guerra, Raúl Enrique Estroz Cifuentes, René Gaspar Vargas Yáñez y Luis Orlando Moreno Flores. Varios de estos elementos han aparecido mezclados en los crímenes recientes, cuya investigación ha pasado ahora a la Justicia Militar.

No eran ellos delincuentes aislados o una banda de maleantes desconectada de otros grupos de ultraizquierda, aunque todo parece indicar que su propensión hacia el terrorismo era más acentuada que en otros sectores de su misma ideología.

La izquierda chilena presenta una composición doctrinaria muy matizada y no siempre definida netamente. Se sabe, por ejemplo, que la ultraizquierda se alimenta de comunistas disidentes, pero no parece haberse encontrado a ningún militante activo del comunismo en esos grupos, aunque no debiera descartarse la presencia de alguno allí con fines de seguridad y vigilancia. En cambio, es cierto que el MIR, de origen socialista extremo, es hoy claramente compatible, hasta en actuaciones oficiales y cargos públicos, con el Gobierno de la Unidad

Popular. El MIR ha debido cambiar de estrategia y suspender momentáneamente su propaganda en favor de la vía armada para no entorpecer al socialismo que hoy es pieza fuerte en el Gobierno.

A su vez, el MIR no es la VOP, pero militantes de ésta reciben elogios de "Punto Final" y hacen publicaciones en ella. Dicha revista los califica de revolucionarios.

Los hechos últimos, la composición multiforme de la izquierda marxista, expresiones del discurso de S. E. en la Plaza de la Constitución y otros datos indicarían que el país está en presencia de la exteriorización de una pugna entre las dos vías revolucionarias: la legal y la armada.

El único argumento que se había formulado por esferas políticas oficiales para cargar el asesinato del señor Pérez Zujovic a la derecha era que esta desgracia perjudicaba al Gobierno. Dicho argumento partía de la base falsa de que el único adversario del Gobierno está situado a la derecha del campo político. Pero no es así en la realidad. Además existe un enemigo mucho más eficaz y difícil de reducir, que es la izquierda revolucionaria inspirada en Ernesto "Che" Guevara y la revolución cubana. El problema dramático en que se encuentra hoy el Gobierno del Presidente Allende es el de moderar a la extrema izquierda, el de obtener que los grupos estudiantiles, campesinos, marginales y otros, amén de cuadros y militantes incorporados a la Unidad Popular y al Gobierno, acepten tolerar la experiencia de la legalidad.

Estos elementos han reconocido que mantienen un dispositivo mili-

tar y se ha afirmado que algunos de ellos ocupan responsabilidades en el Estado o forman parte de la guardia personal de S. E.

Tanto el Presidente Allende como sus opositores democráticos desearían que detrás de la VOP no existieran simpatías o lazos políticos más profundos, y que se tratara de una banda de perturbados cuya desaparición pone término a la violencia que ha estremecido al país estos días.

Los antecedentes señalados y la propia conducta de los miembros de la VOP y de sus acompañantes, caracterizada por un entrenamiento de guerrilla urbana eficiente y por una decisión combativa escasa en los delincuentes habituales, hacen temer que lo sucedido se relacione con las ocupaciones violentas de fundos y con los demás acontecimientos que marcan una disociación profunda entre las declaraciones del Gobierno y muchos de sus altos funcionarios, por una parte, y los hechos que protagonizan grupos extremistas apoyados a veces por personalidades oficiales.

Detrás de esta pugna latén las diferencias nunca definitivamente resueltas entre comunistas y socialistas. Si llegara a abrirse una brecha profunda entre el Gobierno de la Unidad Popular y el extremismo de izquierda, no sería fácil para los disciplinados comunistas mantener a algunos sectores socialistas y maoístas en el marco de la legalidad siquiera externa. Hasta puede pensarse que, llegado ese caso, surgirían razones aparentemente válidas para desechar la legalidad despectivamente calificada de "burguesa".

ODIOS IMPORTADOS

El drama que se abre con la cruel muerte del ex Ministro y Vicepresidente, don Edmundo Pérez Zujovic, consiste en la evidencia de que en nuestro país están actuando fuerzas espirituales y materiales que son ajenas a la idiosincrasia nacional y a nuestros valores permanentes.

El odio ha hecho su entrada triunfal en las ráfagas de metrallata disparadas por la VOP, pero se incubaba en sectores más amplios, destruyendo la base ética de nuestra democracia que es el respeto real por la persona, la conciencia de la igualdad esencial entre los hombres y la confianza de que los procedimientos legales conducen a la convivencia justa entre los ciudadanos.

No es efectivo que este odio se haya formado espontáneamente como efecto de la explotación del hombre por el hombre y de la prepotencia oligárquica e imperialista. Nadie podría negar postergaciones y menosprecio sufridos por los sectores modestos de su población, pero si se comparan las distintas naciones de tamaño y desarrollo similar al nuestro, el estado social del país figura con ventaja frente a muchos otros. Aun contando con los sufrimientos inmemoriales de la pobreza chilena, hay que decir que el odio no proviene de nuestra tierra. El chileno ha sentido hace largos años el llamado de la justicia, pero nunca se había armado para matar, para herir, para asaltar y para robar, movido simplemente por el odio. El crimen del general don René Schneider fue el primer relampagueo del odio, pero ya había gente entre-

nándose para la guerrilla urbana, ya se habían cometido asaltos y enfrentado con armas a la fuerza pública, todo ello por razones políticas, es decir, por odio, y no hay que olvidar que el che Guevara hizo del odio el elemento fundamental de la guerra de guerrillas.

El odio actual es una importación sorpresiva, una mercadería de contrabando. Aparece en los incontables hurtos, robos o simples desapariciones de explosivos, en los asaltos cuidadosamente preparados, en la experiencia en el manejo certero de las armas, en los robos de armas y, sobre todo, en una propaganda que, por algunos años, azuza las pasiones más infames, demuele honras y exalta el bandidaje.

La importación del odio no es una metáfora. Han llegado al país hombres que tuvieron experiencias en Cuba, que lograron preparación militar revolucionaria o ideológica para la movilización hacia la lucha armada. Chilenos y extranjeros han aprovechado nuestras libertades cívicas para establecer centros de operación desde donde se militariza el odio y para difundir con toda amplitud la doctrina y los métodos de la subversión.

El Presidente Allende había dicho siempre que la violencia revolucionaria era la respuesta a la violencia reaccionaria. El confiaba en inducir a la ultraizquierda a una conducta más solidaria con su Gobierno, que depusiera las antiguas beligerancias con la izquierda tradicional. Tenía en cierto modo razones para pensar así, desde que él mismo ha sido un visitante asiduo de Cuba y ha tenido buenos amigos entre los extremistas, sin faltar por

eso a su convicción de que en Chile la vía legal es la propicia para llegar al socialismo.

En estos días difíciles, aparte del ejercicio de la oposición política y de la libertad de opinión, los partidos que no pertenecen a la Unidad Popular no podrían ser acusados de cualquier cosa, menos de desencadenar la violencia. Muy por el contrario, desde distintos sectores surgen llamamientos para terminar la violencia, se pide la disolución de todos los grupos armados ilegales al régimen legalmente constituido.

La violencia revolucionaria que está insinuándose no es una respuesta a nada. Es extraña y hostil a Chile. Viene de Cuba, de Norcorea o de China. Es difícil precisar su origen, pero no es chilena. Está ejerciéndose para arrastrar al Gobierno de Allende hacia la dictadura del proletariado en sus modalidades sangrientas. Una vez en esa vía, nadie sabe qué puede sucederle al país.

Aún es tiempo de que los sectores democráticos, incluidos los que actúan dentro de la Unidad Popular, perciban el temible cuerpo extraño insertado en el proceso de cambios que preside el Excmo. señor Allende. Ese cuerpo extraño puede dañar partes vitales e irreparables de nuestro pueblo y conducirlo a los peores desgarramientos. Se diría que el discurso presidencial de la Plaza Constitución fue un intento de decirle al país que se apoyara en el Gobierno y que repudiara a este venenoso cuerpo extraño manifestado en la violencia extremista. Sin embargo, no están dadas las condiciones todavía para que el pueblo entienda que tiene enemigos aden-

tro y que no todos los que aplauden al Gobierno de la Unidad Popular están lealmente con él.

Preciso es confiar en la tradicional madurez política de Chile, espe-

rando que ella permita al país superar la etapa de los odios ajenos y encontrar la propia tarea nacional que es una senda de libertad, de paz y de dignidad.

Marxismo disgregador

(15 de agosto de 1971)

En el Congreso celebrado por el Partido Demócrata Cristiano en Las Vertientes se produce la renuncia a la colectividad de dirigentes juveniles y 8 parlamentarios, debido al rechazo de un voto político destinado a impedir cualquier entendimiento con partidos de derecha.

Renuncian el presidente de la Juventud DC, Luis Badilla; dos vicepresidentes y 3 consejeros, y los diputados Parra, Miguel, Maira, Videla, Jaramillo, Buzeta, Urrea y Concha, formando el Movimiento de Izquierda Cristiana (EM, 1 agosto). Se adhieren a este movimiento los dirigentes del MAPU Jacques Chonchol, Rafael A. Gumucio y Alberto Jerez (EM, 7 agosto).

En la Convención del Partido Radical se marginan 13 parlamentarios, entre ellos los senadores Baltra, Bossay, Juliet, Acuña y Aguirre Doolan (EM, 3 agosto, pág. 18). Se forma el Movimiento Radical Independiente de Izquierda (EM, 5 agosto, pág. 17).

El MIR desmiente en conferencia de prensa su vinculación al grupo que asesinó al agricultor Gilberto González en Rancagua. El día 14 muere uno de los líderes del MIR, Luciano Cruz, asfixiado con gas en su departamento (EM, 14 agosto, 1971).

La Semana Política

MARXISMO DISGREGADOR

La infiltración marxista en los partidos democráticos, que se ha denunciado insistentemente en los últimos años, aparece plenamente comprobada con los acontecimientos que determinaron en el curso de la primera quincena la división del Partido Radical y del Partido Demócrata Cristiano, junto con la generación del Movimiento de Izquierda Cristiana.

La XXV Convención del radicalismo reveló que en su seno había engrosado la comente deseosa de abandonar la doctrina y las tácticas democráticas para confundirse con las luchas del proletariado. Ya en la

Convención de 1969 se observó la incompatibilidad entre muchos radicales y la acción de sus dirigentes, especialmente los de la juventud y medios gremiales y burocráticos. El choque de los inconformes provocó la expulsión de dos senadores, tres diputados y numerosos dirigentes. El sector eliminado se organizó en el nuevo Partido Democracia Radical, cuyo líder y actual presidente, don Julio Duran, fue uno de los más declarados adversarios del sector pro marxista.

El encuadramiento de las fuerzas políticas que determinó la última elección presidencial llevó a los radicales presididos ya por una directiva izquierdista a formar parte

de la mesa redonda organizada por la Unidad Popular.

Paradojalmente, la admisión del radicalismo en la Unidad Popular se explicó por la posibilidad de que coexistieran colectividades políticas de distinta ideología. El electorado radical se enroló en ese movimiento "pluralista" en la conciencia de que todos los integrantes de él tenían posibilidad de nominar un precandidato en igualdad de condiciones, como aspirante a la Presidencia de la República. El desarrollo de aquella mesa redonda mostró desde el comienzo que la mejor posibilidad estaba de parte del candidato que apoyaran de consuno comunistas y socialistas. Este hecho no era ignorado por los dirigentes radicales que concurrieron a constituir la Unidad Popular, sosteniendo el nombre del senador Alberto Baltra como representante genuino de su ideología. El prestigio democrático del profesor Baltra contribuyó grandemente a hacer comprensible en Chile y en el exterior que la combinación que eligió Presidente de la República a Salvador Allende profesaba un pluralismo efectivo y daba seguridades de que el Gobierno de Unidad Popular no abandonaría el camino de la Constitución y de la ley para realizar su programa. Esta categoría política del radicalismo se vio valorizada con la asignación de tres Carteras ministeriales y numerosos cargos de alta categoría en la Administración del Presidente Allende.

En los diez meses que lleva la actual Administración se hicieron presentes dentro del partido algunos desacuerdos e inquietudes por la acentuación de la corriente radi-

cal pro marxista. Con frecuencia se escucharon declaraciones de senadores y diputados radicales que expresaban su desacuerdo con las actuaciones de la Unidad Popular, especialmente por la falta de garantías para el derecho de propiedad. Sus reclamos no alcanzaron eco en las directivas presididas por el diputado Carlos Morales, y la mayor audiencia para ellos la encontraron en La Moneda, recibiendo en más de una oportunidad garantías del Presidente de la República de que se pondría coto a los desmanes contra la propiedad y especialmente a las ocupaciones de predios agrícolas, sin distinción entre grandes, pequeñas y medianas explotaciones. También los parlamentarios radicales expresaron repetidas veces su inquietud por la forma en que se estaba organizando la XXV Convención, controlada en su gran mayoría por elementos de la alta burocracia del Gobierno de la Unidad Popular. Esas protestas, que dieron lugar a algunas rectificaciones de mera fórmula, correspondían al presentimiento de lo que iba a ocurrir en la asamblea. Ella se realizó de acuerdo con los designios de la directiva; fue presidida —para no dejar duda de su tendencia oficialista— por un Ministro de Estado y adoptó acuerdos que levantaron una ola de protestas en la convención y fuera de ella, terminando con el retiro de la sala de debates de la fracción parlamentaria radical más influyente. Los acuerdos aprobados dieron la espalda a los postulados radicales y los reemplazaron por enunciados abiertamente marxistas.

La resultante de este largo proceso de colonización del radicalismo

es que hoy existen dos colectividades de esa ideología que representan con seguridad la mayoría de su electorado y un número de parlamentarios muy superior al de la fracción que está en el Gobierno. Mientras esta última conserva dos senadores y ocho diputados, el Movimiento Radical Independiente cuenta con siete diputados y cinco senadores; si a ello se agrega que la Democracia Radical, separada anteriormente, tiene tres diputados y dos senadores, puede concluirse que la Unidad Popular ha logrado mantener a su lado a una minoría del radicalismo, ya no infiltrada con el pensamiento marxista, sino identificada con él.

En el otro extremo la Democracia Cristiana ha sufrido también dos desmembramientos en el curso de tres años, como consecuencia de que había dentro de ella un sector rebelde que alteró la unidad del partido durante la Administración Frei, apartando de sus filas a los senadores Jerez y Gumucio que, en compañía del líder de los disidentes, Jacques Chonchol, organizaron el MAPU. Esta fracción, que se mantuvo como movimiento, concurrió a la Convención de la Unidad Popular para completar un cuadro de aparente pluralismo.

La disciplina de la Democracia Cristiana se mantuvo después del apartamiento de los rebeldes, pero éstos dejaron en el interior de la colectividad un germen de separatismo que finalmente se amparó bajo la definición de "Izquierda Cristiana". La coyuntura para que este último movimiento manifestara su propósito-escisionista fue la elección extraordinaria de un diputado por

Valparaíso. Habiendo triunfado el candidato de la Democracia Cristiana con votos del Partido Nacional, se planteó en el seno del Congreso celebrado en Las Vertientes un voto destinado a que la Democracia Cristiana hiciera declaración pública de que no aceptaría en el futuro acciones comunes con ningún sector de la derecha. Esta proposición, muy extraña dentro del juego democrático en que se presentan situaciones que exigen un acuerdo mínimo entre partidos de distinta doctrina, no fue aceptada a discusión. Seguidamente, interpretando la negativa para tomar un acuerdo de esa especie como tendencia "derechizante", un grupo de ocho diputados renunció al partido para organizar un movimiento de Izquierda Cristiana, al cual adhirieron casi simultáneamente los senadores del MAPU Rafael Agustín Gumucio y Alberto Jerez, en compañía de su jefe político, el Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol.

El nuevo núcleo declaró que cooperaría con el Gobierno de la Unidad Popular. La decisión de los ex democratacristianos de abandonar posteriormente el MAPU y fusionarse con el grupo de la Izquierda Cristiana ha merecido diversas interpretaciones:

Una de ellas es que ello contribuiría a dar más cuerpo a este movimiento izquierdista, y la otra, que los cristianos no habían llegado a convivir realmente con los marxistas que dieron origen a la colectividad del señor Chonchol. Este último ha confirmado la tesis al declarar al diario "La Segunda" que "el MAPU no era un partido o un

movimiento que tuviera una presentación ideológica suficientemente atrayente y clara desde el punto de vista de la orientación de estos sectores cristianos. En la práctica y en los hechos, aun cuando no formalmente se definía como un nuevo partido de orientación marxista-leninista, lo cual a nuestro juicio no era necesario para Chile; por el contrario, creemos que es mucho más importante la constitución de un nuevo partido —no me gusta mucho el nombre de Izquierda Cristiana— de orientación ideológica y cultural cristiana o no cristiana para colaborar al lado de los partidos marxistas dentro del proceso de transformaciones de la sociedad chilena".

La reproducción de esta cita tiene valor documental para hacer un juicio acerca de la contradictoria e indeterminada doctrina de los ex demócratacristianos que formaron el MAPU y por analogía de quienes se reúnen actualmente bajo la etiqueta de "Izquierda Cristiana".

No obstante las vacilaciones y vaguedades que expresa uno de sus líderes más genuinos, la Unidad Popular está empeñada en darle consistencia al flamante movimiento, por la vía de la propaganda de sus medios informativos, porque de este modo disimulan la descapitalización que representa para la UP la pérdida de doce parlamentarios radicales, con un electorado mucho más amplio que el movimiento recién nacido a la vida política y, además, inducen a sectores poco interiorizados en estas actividades a creer que el bloque de Gobierno cuenta con un partido más, de gran proyección en los sectores católicos

del país y que además devolviera a la UP el pluralismo perdido por la marxistización del sector radical que permanece en el Gobierno.

EL COMUNISMO MONOLÍTICO

Todo este juego de apariencias no debe hacer perder de vista la realidad más importante: el comunismo ha logrado de una u otra manera afectar a dos partidos democráticos con la infiltración firme y sostenida de ellos, siempre desmentida, pero a la postre confirmada. Nada parecido afecta al comunismo que mantiene sobre sus adeptos una vigilancia escrupulosa y ejerce una disciplina que permite aplicar oportunas medidas de expulsión a quienes muestran desviaciones, sin pasar por los largos trámites de los sumarios y sentencias de tribunales supremos, que de eso sólo tienen el nombre.

Esta situación monolítica del comunismo es la que le sigue dando predominio dentro del Gobierno de la Unidad Popular. Nada comparable existe en el campo izquierdista, y la mejor prueba de lo que afirmamos la da el Partido Socialista en estos momentos, con fuertes debates y discrepancias sobre la orientación del Gobierno del señor Allende y también acerca de la aplicación del Programa de la Unidad Popular.

Entre las perturbaciones que afectan al socialismo, las más importantes provienen de la existencia en sus filas de lo que se ha llamado "la doble militancia", que consiste en que elementos que al mismo tiempo de estar inscritos en el parti-

do propagan la necesidad de utilizar la vía armada y la violencia para conseguir la conquista total del poder. En esa oposición están los integrantes del MIR, que sigue siendo, a pesar de todo, una extensión del socialismo oficial y que ha vuelto a aplicar los que parecían olvidados métodos terroristas.

El testimonio del diputado Pedro Jáuregui sobre la doble militancia en la zona de Osorno, que él representa, y donde elementos que se dicen socialistas impulsan actividades guerrilleras, es importante. La directiva socialista ha anunciado que expulsará al parlamentario denunciante, con lo que sólo consigue dar mayor aliento a los partidarios de la violencia como método político.

La directiva del MIR, en la cual figuran varios autores o cómplices de atentados terroristas y otros que gozan de libertad por los indultos que concedió este Gobierno al iniciar su período, ha desmentido su participación en el reciente asesinato del agricultor de Rancagua, desentendiéndose de las evidencias de culpabilidad que la policía y la justicia han acumulado. Y han ido más lejos en su actitud desaprensiva, contratando a los sectores que denuncian las actuaciones delictuales, a quienes se los acusa de estar propiciando una escalada represiva sobre el MIR y un distanciamiento de éste con la Unidad Popular. "Desde ya advertimos a los reaccionarios —expresaron el viernes último en conferencia de prensa— que los trabajadores no permitirán la represión sobre la izquierda revolucionaria, que el MIR no permitirá que el avance de los

trabajadores sea detenido y no se dejará reprimir".

Como se ve, estas palabras respiran confianza en que sus acciones no encuentren obstáculos y, además, la certeza de que uno de los partidos de la Unidad Popular está de por medio para impedir que se contrarresten las acciones de violencia que han venido repitiéndose en el último tiempo.

Otro hostigamiento experimenta el Partido Socialista, y él proviene también de una fracción que se separó hace algunos años de la directiva oficial y que cuenta por lo menos con un senador en ejercicio. La Unión Socialista Popular, que declaró su apoyo a la postulación de Allende, aunque sin incorporarse al bloque multipartidista, viene ejerciendo una repetida denuncia hacia los procedimientos transaccionales que estaría siguiendo la Unidad Popular. Las críticas están dirigidas especialmente a impulsar la reforma constitucional destinada a reemplazar el actual Congreso por una sola Cámara. Su decisión en este sentido es más explicable que la que existe en los partidos de la Unidad Popular, ya que la aventura de una reforma constitucional con disolución del Congreso no ocasionaría a la Unión Socialista Popular pérdida apreciable en el campo de la representación parlamentaria.

La acción indisciplinada del MIR y los llamamientos de la Unión Socialista Popular son dos factores que perturbaban especialmente al Gobierno, que no encuentra en su partido un respaldo sólido, como es el que le ofrece en cambio el Partido Comunista.

En conclusión, las fuerzas democráticas deben vivir en guardia para contrarrestar las infiltraciones provenientes de la Unidad Popular, y

esta última vivir en medio de las inquietudes que provienen del socialismo, el cual asume importantes responsabilidades gubernamentales.

Doble militancia

(10 de octubre de 1971)

El artículo se refiere a los exfuncionarios Nahum Castro y Gabriel Coll, y analiza la militancia de estos y otras personas tanto en partidos de Gobierno como en partidos de extrema izquierda.

Gabriel Coll fue el jefe de la Corporación de Reforma Agraria en Linares, destituido de su cargo por instigar las "tomas" ilegales de fundos y por portar armas en un vehículo fiscal. El caso de Nahum Castro lo detalla la crónica.

En la elección de directiva de la Federación Estudiantes Secundarios (FESES) triunfa el democratacristiano Guillermo Yungue. En el Colegio de Periodistas triunfa la candidato gremialista Paulina Marchant en elección complementaria.

La Semana Política

DOBLE MILITANCIA

La detención y encargatoria de reo del ex militante socialista y ex Director de Ferrocarriles, Nahum Castro, dejó muchos estupefactos dentro y fuera de la Unidad Popular.

En el caso no se asemeja al del jefe zonal de CORA en Linares, Gabriel Coll, pues este último ha sido sorprendido en actividades de apoyo a las guerrillas, en tanto que el jefe máximo de los Ferrocarriles del Estado hasta agosto último aparece mezclado en un grupo terrorista.

Ambos acontecimientos tienen en común el difícil problema que los socialistas llaman de doble militancia y que consistiría en que algunos de los miembros del PS reconocen también otras directivas y disciplinas políticas de acento más extremista.

Una de las dificultades del problema de la doble militancia consis-

te precisamente en que, en estricto sentido, no se da una duplicidad de conductas y actitudes, pues los sujetos que se encuentran en tal situación no hacen más que reforzar una línea política con la otra.

El ingeniero Nahum Castro tuvo, según se dice, un pasado ferroviario en Cuba, cuando trabajaba en un ferrocarril azucarero en el régimen casuista. A su paso por la jefatura máxima de los ferrocarriles chilenos demostró su celo marxista y su proselitismo intransigente. Como estimara que existía cierta inercia en el proceso chileno, al compararlo con sus experiencias cubanas, al parecer creyó necesario someterse a un autoatentado que en su momento sirvió para que los socialistas y la Unidad Popular en general pensarán que se trataba de un avance del terrorismo de derecha.

El caso del ingeniero Castro ha producido en la Unidad Popular dos clases de reacciones. Algunos han

empleado los mayores esfuerzos por ignorar el hecho, por hacerlo desaparecer, por presentar al afectado como un antiguo socialista en circunstancias de que su expulsión fue muy reciente. En esta posición hay que situar también a los que han denunciado nuevos hechos de violencia confiando en que las dimensiones de lo que se publica a este respecto hagan olvidar el caso Nahum Castro. Otro recurso frente a este comprometedor asunto ha sido echar a la broma al FAR y lanzar una cortina de ridículo sobre las actuaciones terroristas de que conocen los tribunales.

Es explicable este movimiento instintivo para evadir el asunto. El caso Nahum Castro puede considerarse extremo en su género pero son muchos, muchísimos, los militantes de la Unidad Popular que trabajan en la vía armada, ya sea participando en guerrilla o en acciones terroristas, ya sea preparándose para la eventualidad de la confrontación violenta. Lo incómodo del suceso que comentamos es que el terrorista sorprendido en esta oportunidad había sido recientemente uno de los altos funcionarios del régimen de la Unidad Popular y que, además, el público lo tenía por socialista hasta el momento de su detención, porque sólo después del arresto vino a saberse que el socialismo lo había expulsado de sus filas.

Los medios informativos oficialistas faltan a la más elemental sinceridad cuando describen el caso Nahum Castro como una simple figura delictiva y la condenan severamente por su carácter ilícito. Dicha insinceridad permite a muchos perseverar en la idea de que la vía vio-

lenta está excluida de la lucha política chilena, que las guerrillas y el terrorismo no forman parte de los métodos de la revolución marxista en nuestro país y que los elementos arrestados con las armas en la mano son poco menos que traidores a la Unidad Popular o hasta cómplices de la extrema derecha. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

El tema más interesante de la recopilación de artículos y discursos del secretario general del Partido Comunista, senador Luis Corvalán Lepe, publicados recientemente, es la prueba reiterada de que no existe diferencia sustancial alguna entre la vía armada y la vía no armada. Este concepto, tan importante en el marxismo-leninismo, es repetido por el secretario general comunista por lo menos desde 1961. En otras palabras, hace diez años que el comunismo chileno predica la vía pacífica advirtiendo al mismo tiempo que dicha vía es revolucionaria, que es expresión de la lucha de clases, que no excluye las rupturas de la legalidad ni repudia la violencia y que sólo prescinde de la guerra civil o de la sublevación total del pueblo en armas. El comunismo añade que la vía armada es más que una alternativa, pues en algún momento, sea como preparación o como realidad necesaria, deberá emprenderse por la clase proletaria.

"Hay también algunas personas que identifican la vía pacífica con los cauces legales o constitucionales, lo cual es completamente erróneo", dice el senador Corvalán. "Partidarios como somos de la vía pacífica —prosigue—, queremos al mismo tiempo que el movimiento obrero y popular rompa con el lastre

del legalismo y se guíe, antes que por las leyes y la Constitución dictadas por la burguesía, por sus propios intereses de clase, considerando la situación concreta de cada momento".

Este oportunismo antijurídico predicado hace más de diez años por los comunistas chilenos indica que no existe entre ellos el pluralismo de que hacen alarde en estos momentos. Por el contrario, avanzan inflexiblemente de acuerdo a las leyes de la revolución marxista-leninista y optan por la vía pacífica cuando se lo admiten sus adversarios y, en el caso opuesto, acuden a las armas.

Si los comunistas, considerados habitualmente como partidarios de las soluciones pacíficas y democráticas, revelan una completa desaprensión respecto a las normas legales y muestran a cada paso que la opción entre la vía pacífica y la vía armada tiene un simple carácter táctico y de oportunidad, no puede extrañar que los socialistas alojen bajo su techo a partidarios de las diversas tácticas. Aceptando que el terrorismo, la guerrilla organizada, la subversión sistemática, la labor sindical en cauces legales y la actividad partidista y parlamentaria son recursos que dependen de la oportunidad, no sería justo que se castigara a quienes en algún momento emplean la táctica extemporánea. A lo más podría alegarse una torpeza, un exceso de celo, una falta de sumisión a la disciplina de los superiores. En ningún caso caben la censura y la condenación definitivas frente a una falla temperamental o de criterio.

El problema de la doble militancia carece entonces de verdadera

significación. El marxismo-leninismo en lo que se refiere a principios, estrategia y objetivos es uno solo. Los homenajes que ha recibido el guerrillero che Guevara en estos días demuestran que la vía armada está presente en las huestes más disciplinadas del marxismo chileno. Nahum Castro como Gabriel Coll interpretan las enseñanzas y el contenido profundo de la colectividad que ahora les retira su apoyo. El que no hayan acertado en el método oportuno es casi una mala suerte, pero en ningún caso un gesto merecedor de repudio.

LA MARCA PLURALISTA

En el transcurso de un año de gobierno la Unidad Popular ha mostrado al país su verdadera composición. Las colectividades fuertes y determinantes en cuanto a los ministerios que controlan, a los objetivos políticos que logran y a la influencia electoral presente y futura son indudablemente los partidos marxista-leninistas, es decir, el Partido Comunista y el Partido Socialista. La filosofía y la acción del pequeño movimiento denominado MAPU se sitúa también dentro del marxismo-leninismo. Los otros movimientos, vale decir los socialdemócratas y el API, aparecen con muy escaso peso administrativo y electoral.

Se explica entonces la importancia de los radicales dentro de la Unidad Popular y la transcendencia que adquieren las divisiones internas en esa vieja tienda política. Fuera de socialistas y comunistas, sólo los radicales ostentan gravitación parlamentaria, la que en este momento

se inclina decisivamente hacia la fracción del Movimiento Radical Independiente de Izquierda que se agrupa tras los senadores Bossay y Baltra.

Pero más importante que el respaldo parlamentario que pudiera el Gobierno encontrar en los radicales, aporte nada despreciable por cierto, debe considerarse la marca de pluralismo democrático que ellos le brindan a la Unidad Popular. En efecto, sin los radicales la combinación política de Gobierno estaría formada por socialistas, comunistas y pequeños grupos carentes de verdadero peso en el país, por lo que entonces cabría afirmar en Chile o en el extranjero que el sello marxista-leninista es el único digno de tomarse en cuenta en el Gobierno del Presidente Allende. Por el contrario, la presencia radical autoriza al Canciller Almeyda para aseverar el carácter múltiple y abierto de la combinación de Gobierno y la misma participación de los radicales faculta para argumentar contra los que ven en la actual Administración una cerrada tendencia marxista-leninista.

A pesar del inapreciable valor de la colaboración radical, las Cartas obtenidas por este partido no son de las más influyentes en esta Administración. Tampoco se ve que el Presidente Allende o sus más destacados colaboradores atribuyan a los radicales un rol decisivo en las labores y responsabilidades de gobierno.

Sin embargo, bastó que las peculiaridades del CEN forzaran a un importante grupo de parlamentarios y militantes a retirarse del partido oficial para que este problema adquiriera todo el relieve que se me-

rece en las esferas del Gobierno y de la Unidad Popular.

Esas diferencias internas son muy difíciles de reconciliar pues tienen su fundamento precisamente en algo que atañe a la raíz del pluralismo que pretende la combinación de Gobierno. Los radicales del CEN han estado demasiado dispuestos a hacer causa común con el marxismo y a esforzarse por no destacar los distintivos doctrinarios del radicalismo, tal vez con el propósito de asegurar una influencia permanente aunque limitada de su partido en el Gobierno. Por su parte el Movimiento Radical Independiente de Izquierda, que está buscando firmas de afiliados para constituir legalmente un nuevo partido, entiende el pluralismo como una convivencia de concepciones diversas y no como un acatamiento pasivo de los demás a los dictados del poderoso y prepotente Partido Comunista.

El Presidente Allende desearía sin duda la unión de los radicales y entre ambas fracciones sus preferencias han de estar por el partido oficial que fue el que lo acompañó en la campaña presidencial y que constituyó con las otras fuerzas la Unidad Popular. Sin embargo, la habilidad política de S.E. no lo puede hacer olvidar los importantes votos parlamentarios de los radicales disidentes, votos que necesita para asegurar el tercio en el Congreso.

Los radicales independientes, por su parte, se sienten inclinados a apoyar con decisión a la Unidad Popular pero no se proponen volver con el oficialismo del CEN. Queda por conocerse, no obstante, la manera en que la vocación pluralista y democrática de estos radicales se

concilie con la destrucción de las bases mismas de la libertad política que va a resultar del control de los partidos marxistas sobre el crédito, los impuestos y la policía, en este momento, y más tarde, del monopolio de esos mismos partidos sobre la producción y venta de papel de diarios.

Aunque las consultas parciales de la opinión ciudadana, tales como la elección de los liceos de Santiago y del Colegio de Periodistas, reflejan

una clara línea de oposición y discrepancia con la Unidad Popular, es de temer que el poder económico y físico logrado por los partidos marxistas ahogue las posibilidades mismas de expresión pluralista de la ciudadanía. Por eso es cada día más evidente el peligro de las nacionalizaciones de actividades, al margen de la voluntad del Parlamento y siguiendo la mira de entregar todo el poder a los fieles del marxismo-leninismo.

Resguardo de la libertad

(24 de octubre de 1971)

La Unidad Popular propone fusionar las facultades de Economía y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, así como reagrupar diferentes escuelas. El proyecto es rechazado por la Contraloría (EM, 2 noviembre, pág. 1).

Se encuentran en discusión 2 proyectos que limitan las áreas de propiedad estatal, particular y mixta de los bienes de producción: uno de la Unidad Popular, que plantea estatizar toda empresa con capital superior a 14 millones de escudos, y otro de los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba, que establece mecanismos más controlados de expropiación y estatización (EM, noviembre, pág. 27).

Se producen 2 vacantes parlamentarias: O'Higgins y Colchagua, por fallecimiento del senador José Isla, que se encontraba en coma a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en febrero, y en Linares, por ausencia del país por más de un año del diputado nacional Carlos Avendaño.

La Semana Política

AREAS DE CONFLICTO

La desarticulación de las estructuras de la Universidad de Chile y el proyecto de las tres áreas de propiedad, que presentó el Gobierno al Congreso, constituyen dos avances de la Unidad Popular en materias diversas pero de similar trascendencia. Ellas son comparables a su vez con la iniciativa de estatizar el papel de diarios.

La crisis de la Universidad de Chile es un asunto académico, antes que nada. Pero, como el móvil principal de la crisis es la instrumentalización de lo universitario en beneficio de la ideología y de la praxis del marxismo, el tema se ha convertido en político. Su desarrollo es materia de comentario separado. Aquí basta decir que la desar-

ticulación de las estructuras académicas y, en especial, de los estudios jurídicos, tiene por mira debilitar las resistencias de la sociedad democrática y preparar la defensa intelectual del modelo de dictadura clasista que trata de imponerse en el país.

El otro flanco es el del proyecto de ley de las tres áreas de propiedad, cuyas normas implican el desaparecimiento del sector privado. Este quedará reducido, es cierto, a la pequeña empresa y a los restos náufragos de la actividad particular que hayan subsistido a los programas de expropiación masiva, pero las relaciones de dependencia que tendrá toda la actividad económica respecto del Gobierno y de sus funcionarios se traducirá en la práctica en un eclipse del sector privado propia-

mente tal. Si a esto añadimos que programáticamente la Unidad Popular repudia la economía de mercado y favorece el sistema de planificación central, tendremos que concluir que las líneas de la combinación de Gobierno tampoco se concilian en este aspecto con los postulados de la libre iniciativa.

Ha continuado en la semana el esfuerzo del Gobierno por llevar adelante los planes de estatización de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, proyecto que constituye una grave y evidente amenaza para la libertad de expresión. Al parecer han sido desoídos hasta ahora los sólidos argumentos de la Compañía que refutan las razones dadas para la estatización y tampoco ha prosperado la idea de que se consulte al personal de las distintas plantas en un plebiscito libre y secreto. Los partidos de la Unidad Popular han juzgado necesario incorporar Papeles y Cartones, la más importante industria privada, al sector público; lo resolvieron así durante la campaña presidencial, y en este instante el Ejecutivo —como se esperaba— asume el rol de ejecutor de los acuerdos partidistas que son la plataforma política del Gobierno.

Mirando lo ocurrido en la Universidad de Chile, el tratamiento que se está aplicando al sector privado de la economía, y los pasos recién dados en pos de la estatización de la industria del papel, resulta difícil no asociar un fenómeno a otro y no contemplar los tres juntos como partes de una vigorosa ofensiva tendiente a cambiar por completo la actual organización del país y modelar un sistema que aparece muy

distante de los hábitos y modalidades de la democracia chilena, y cada vez más próxima al marxismo clásico.

Estas tres medidas situadas en otras tantas áreas de conflicto suscitan discrepancias profundas y aun rebeldías de parte de vastos grupos ciudadanos. Cunde en las tres direcciones la impresión de que los partidos de la Unidad Popular están más ocupados de asegurar su propio poder que a respetar la opinión ciudadana. Si es cierto que el marxismo-leninismo aspira a una "dictadura democrática", pseudónimo de la dictadura del proletariado, esta prescindencia soberbia de los pensamientos y deseos de los sectores más directamente interesados en cada sector de la actividad es una muestra decidora de la manera como actuarían los partidos de la Unidad Popular de no existir una información amplia y alerta sobre los acontecimientos nacionales.

Cada día que pasa la ciudadanía toma una conciencia más clara de que el plan puesto en marcha por los partidos de la Unidad Popular va haciendo peligrar convicciones, empresas, carreras profesionales, expectativas y hasta el suministro de bienes y artículos de importancia para la vida corriente. A un año de vida del régimen, ninguna contrapropaganda tiene más eficacia que los hechos cotidianos para suscitar descontentos. La experiencia del tránsito al socialismo se hace aquí cuando nuestro país tiene tres veces la renta por cabeza que tenía el pueblo ruso en tiempos de Lenin y una distribución del ingreso ciertamente mucho más igualitaria que la que entonces se daba en Rusia. Este solo

antecedente sirve para mostrar que en nuestro país serán muchos los que sufran despojo, a fin de permitir un sistema que no está previsto para lograr la prosperidad sino apenas para sobrepasar la miseria. A una inmensa mayoría de chilenos les queda y les quedará la duda acerca de si los sectores de más bajos ingresos pueden ser mejorados con un sistema que no imponga tan severo y negativo rebajamiento a la porción más dinámica del pueblo, como es el régimen socialista marxista.

Los sectores que no adhieren incondicionalmente a la Unidad Popular divisan en la triple ofensiva que hemos reseñado y en otras manifestaciones un riesgo grave para las libertades públicas. Hay elementos de creencias tradicionales y hay también sujetos de espíritu progresista, existen hombres maduros y gente joven, todos los cuales coinciden en que la etapa cívica actual llama a cerrar filas en el servicio de la libertad, suspendiendo a tal efecto las diferencias, distinciones y reservas que son propias de un período político menos expuesto a una transformación social que, empezando en el plano económico, venga a rematar en una esclavitud colectivista del tipo de las que han sufrido Solshenitzyn, en la Unión Soviética, y Padilla, en Cuba.

RESGUARDO DE LA LIBERTAD

Bien se conocen las diferencias profundas entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, diferencias que son de doctrina, de formación, de temperamento y de posiciones frente a los hechos actuales. Otro tanto cabe decir de la

Democracia Radical, tan distante de los tradicionalismos o nacionalismos como del izquierdismo cristiano.

Frente a la Unidad Popular, sometida a veces a divisiones internas que se procuran sofocar, no se yerguen partidos opositores homogéneos en doctrina y en estrategia. Todo lo contrario. Se dan criterios singulares y particularizados. La tensión de las luchas actuales, que tienden naturalmente a polarizar las posiciones, no han sido obstáculo entre nosotros a la expresión de una rica diversidad de pareceres y actitudes en los partidos que no están en el Gobierno.

En los debates parlamentarios así como en la línea editorial de las publicaciones de las respectivas tiendas se advierten matices y hasta pronunciadas discrepancias, que han hecho pensar a veces que a la Unidad Popular le será fácil acentuar las desavenencias y obtener triunfos sobre las fuerzas contrarias divididas, así como ocurrió en la campaña presidencial de 1970.

La ciudadanía exige no obstante que las diferencias se sacrifiquen a la defensa de postulados esenciales como son los que se concretan en las libertades públicas chilenas, tales cuales han sido practicadas y defendidas a lo largo de nuestra historia.

Dos ocasiones que los partidos opositores tienen de exhibir ante el pueblo la forma práctica en que comprenden su deber de unión en esta hora, habrán de producirse en las próximas elecciones complementarias.

El lamentable fallecimiento del senador demócratacristiano don José Isla, fundador de la Falange Nació-

nal y de la Democracia Cristiana, fiel luchador por los ideales de su partido, y político que siempre mereció consideración destacada en todos los sectores a causa de las prendas morales que lo distinguían, dio lugar a una elocuente manifestación de pesar ciudadano. El senador desaparecido representaba a las provincias de O'Higgins y Colchagua, circunscripción en la que corresponderá llamar a una elección complementaria.

La inesperada vacancia de una diputación por Linares ha traído consigo la necesidad de otra elección complementaria en dicha provincia.

En ambos casos, la Unidad Popular será ganadora si las fuerzas opositoras se presentan desunidas o se elige a algún candidato común que pueda despertar resistencias insuperables en sectores cívicos de significación en las mencionadas provincias. Por el contrario, si la oposición da la lucha con una gran unidad por encima de diferencias que son subalternas, puede asegurarse un triunfo fácil en los dos eventos.

Debe recordarse que las vacantes que se trata de llenar pertenecieron a parlamentarios que no estaban con la Unidad Popular. Por consiguiente, lo lógico sería que sus sucesores fueran los candidatos situados en la oposición. El triunfo de ésta no innovaría en la composición de las mayorías parlamentarias, pero daría qué pensar el hecho de que el Gobierno, pese a estar en posesión de todos los resortes del poder y de la propaganda oficialista, no habría conseguido más que su votación tradicional.

Es de prever que la Unidad Popular movilizará el total de sus efectivos disponibles a fin de impedir que el país siga tomando nota de los fracasos electorales de la combinación de Gobierno.

La oposición debiera también actuar solidariamente unida, en términos de que democratacristianos, nacionales, demócratas radicales e independientes, expresen preferencias comunes en materia de candidatos y los designen a la brevedad posible y con los respaldos necesarios.

Dos victorias en las elecciones parlamentarias que se avecinan tendrían un significado hondamente alentador no tanto como rechazo al Gobierno sino como abierta censura al sectarismo de la Unidad Popular y a la tentativa de algunos de sus partidos de no dejar sitio alguno de influencia sin ser codiciado por dichos partidos.

Hasta este momento se cree que la unanimidad de la oposición respaldará en O'Higgins y Colchagua a cualquier candidato demócratacristiano que sea aceptado por los demás partidos. Debe esperarse entonces que la experiencia positiva de la elección de Valparaíso se repita en Rancagua y San Fernando.

En la Provincia de Linares sería legítimo que el candidato en las próximas elecciones militara en la tienda Nacional. Sin embargo el examen frío de la situación que es preciso hacer obliga a la resolución que asegure contingente parlamentario e influencia a la oposición.

Debe esperarse en todo caso que las candidaturas sean clara y definitivamente opositoras, pues lo natural es que la lucha eleccionaria se libre

en los verdaderos términos y que ninguna situación táctica menor oscurezca el llamamiento de los partidos de la oposición democrática a la lucha por las libertades públicas y por el bien común. Las colectivi-

dades políticas democráticas tienen que sentirse, más que nunca, urgidas a manifestar una voluntad concordante con el sentir actual de la ciudadanía y a conducirse con arreglo a éste.

"Control popular"

(7 de noviembre de 1971)

El Presidente Salvador Allende anuncia la creación de una "Cámara Unica", en discurso pronunciado al cumplir un año de gobierno (EM, 5 noviembre, pág. 1).

Se clausura la Radio Balmaceda, del Partido Demócrata Cristiano, y en su frecuencia aparece la radio Luis Emilio Recabarren, de la CUT (Central Única de Trabajadores). Luego se levanta la clausura y se le asigna otra frecuencia (EM, 5 noviembre, pág. 1).

La Semana Política**CÁMARA ÚNICA**

En el discurso pronunciado por el Presidente Allende en el Estadio Nacional, con motivo de cumplir su primer año de Gobierno, volvieron en general a repetirse conceptos, datos y cifras que el país conoce.

En el aspecto noticioso, la intervención presidencial tiene dos aportes, a saber: quedó confirmada pública y oficialmente la inminente visita del Premier cubano Fidel Castro y se anunció que el próximo martes 10 el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Cámara Única o Asamblea del Pueblo, que contempla el programa básico de la Unidad Popular.

El segundo anuncio del Presidente se hizo con las siguientes palabras: "Debemos fijarnos nuevos objetivos para el año 72. Transformar las instituciones ajustándolas a la nueva realidad social que estamos construyendo. Por eso, el martes 10 de la próxima semana entregaré al Congreso Nacional el proyecto que establece la Cámara Única para reemplazar al Senado y a la Cámara

de Diputados. Un Parlamento unicameral, adecuación del sistema a nuestra realidad política y social, más rapidez en la dictación de las leyes, simplicidad en los trámites. Se aprovechará el proyecto de Parlamento unicameral para corregir, en cuanto al Poder Legislativo, algunos de los inconvenientes y vacíos que presenta la Constitución vigente. El número de sus representantes y su distribución se adecuarán a la población actual del país. Se eliminarán las elecciones extraordinarias. Las elecciones de los miembros del Parlamento se realizarán conjuntamente con la Presidencia de la República. Se podrá disolver el Congreso en un período presidencial. Se establecerán incompatibilidades estrictas entre ser representantes del pueblo y tener actividades particulares que, muchas veces, son contrarias al interés nacional".

Y como para reforzar que la Cámara Única no es simple cambio de organización o de método en un Parlamento unicameral, sino una medida revolucionaria, el Presidente añadió: "Iremos a democratizar el

Parlamento y habrá una representación mayoritaria que debe reflejar la realidad social del país. Tenemos que avanzar en el año 72 en forma organizada, sobre la base del control popular, de la actividad de la administración, de las juntas de abastecimiento y precios".

Las expresiones presidenciales deben interpretarse de acuerdo al programa de la Unidad Popular, documento que define con bastante precisión el alcance de la Cámara Única.

"A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas, dice el programa, se construirá desde la base la nueva estructura del poder".

Esta movilización organizada de masas es, entre paréntesis, lo que pide el Subsecretario de Economía, señor Oscar Garretón, para presionar sobre el Congreso Nacional y conseguir el apoyo para el proyecto gubernativo de las tres áreas, que pone término al sector privado de la producción en el país.

"Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal", sigue diciendo el programa.

Se ilustra así el significado de las palabras presidenciales relativas a que la Cámara Única debe reflejar la nueva realidad social y que el país ha de avanzar organizadamente sobre la base del control popular.

El párrafo siguiente del programa es como sigue: "Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder".

He aquí una definición clara del estado totalitario establecido en nombre del pueblo.

Para quienes pudieran creer que esta Asamblea del Pueblo aludida en el programa no es otra cosa que la Cámara Única anunciada en el Estadio Nacional, hay que seguir leyendo:

"La Asamblea del Pueblo, continúa el programa de la Unidad Popular, será la 'Cámara Única' que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión".

"Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido".

El documento prescribe también que "todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo"; que los representantes populares "estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos"; y que "se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades", para quienes se desempeñen como gestores de intereses privados.

Siguen otros párrafos más en el capítulo del programa que se llama: "nuevo orden institucional: el Estado Popular". No faltarán quienes vean en este "Nuevo Orden" algunas reminiscencias de totalitarismos desaparecidos hace 25 años y en el "Estado Popular" la repetición de las singulares democracias surgidas en Europa al amparo de los tanques de Stalin: las democracias "populares".

Durante la campaña presidencial los comentarios y advertencias so-

bre el carácter totalitario de la Asamblea del Pueblo y de sus riesgos para la institucionalidad democrática chilena eran considerados por el marxismo como parte de la llamada campaña del terror. Después de un año, la persecución a la independencia del Poder Judicial, la prescindencia del Parlamento y aun las amenazas a sus corporaciones y a sus componentes, y las características señaladas por el Ejecutivo a la Asamblea del Pueblo o Cámara Única, así como los demás rasgos políticos que van acentuándose en el régimen, demuestran que la iniciativa que se enviará el martes merecía las críticas de fondo que se le formularon cuando era una simple aspiración programática de la combinación marxista.

CONTROL POPULAR

La formación de un área de propiedad pública al margen del Congreso, que el Ejecutivo busca ratificar ahora en el proyecto de cheque en blanco sobre las tres áreas de producción, y el envío próximo de la iniciativa sobre Asamblea del Pueblo, corresponden a un mismo criterio. Estas medidas y otras análogas reflejan una desinteligencia profunda entre Gobierno y Oposición acerca de las posibilidades legales y políticas del primero.

En concepto de la Unidad Popular la designación del Presidente Allende por el Congreso Pleno, después de que obtuviera un exigua mayoría relativa a causa de la división de las fuerzas no marxistas, es el respaldo legal que necesitaron los hombres de Gobierno para desencadenar un proceso revoluciona-

rio de corte marxista, que tiene formas legales en el centro del país, pero que tiende a desbordar la legalidad en varias provincias agrícolas del sur.

Según esta interpretación los demócratacristianos habrían entregado la nación a lo que ahora se llama el "control popular" y que, en el hecho, es el dominio de los sectores extremos del marxismo, exigiendo al Presidente unas garantías innecesarias y que ya estaban contempladas en el programa de la Unidad Popular.

La tesis implícita en la oposición es que una autoridad presidencial generada en el Congreso Pleno y que representaba un sector del electorado, tuvo por base un compromiso de respeto a la democracia, no en aspectos adjetivos y formales sino en lo que significa el mantenimiento del diálogo y del respeto mutuos entre los partidos y entre los poderes públicos.

Pero el mando efectivo lo tiene el Gobierno y está usándolo para transformar la institucionalidad tradicional por otra y para cambiar también el estilo de convivencia entre los chilenos. Así se explica que el Presidente Allende esté dispuesto a presentar una iniciativa constitucional que implica desconocer de raíz el valor del mismo Congreso que lo eligió para su alto cargo. Este Congreso que en noviembre de 1970 generó la autoridad de S.E no se ajusta en noviembre de 1971 a la realidad social del país y debe ser cambiado a fondo.

El "control popular" bajo cuyo signo se nos promete avanzar en 1972 no es otro que el predominio de las organizaciones marxistas so-

bre una ciudadanía desorganizada, sorprendida y amedrentada.

Ese mismo "control popular" vendría a ejercerse sobre los parlamentarios con mandato revocable y sobre los jueces cuya estabilidad dependería del beneplácito de la Asamblea del Pueblo.

El "control popular" se está ejerciendo ya sobre la distribución de alimentos y determinará en corto tiempo qué tipos de ciudadanos podrá contar con el abastecimiento necesario frente a la escasez actual y la previsible. No hay dictadura *más* eficaz e invisible que la que opera sobre el estómago. Tal vez el "control popular" en este terreno sea más peligroso todavía que en otros.

El monopolio gubernativo sobre la distribución de papel de diarios y el constante crecimiento de los medios periodísticos oficiales es también otra manera de asegurar el llamado "control popular", haciendo cada vez más difícil que la opinión pública conozca y juzgue con entera independencia la situación en que el país se encuentra y las causas de ella.

Las fuertes trabas puestas al tráfico de pasajeros y de equipaje, tanto para la salida de los chilenos al exterior como para el ingreso de turistas no oficiales, hace más eficaz el "control popular" sobre la población.

Los parlamentarios no marxistas están adquiriendo rápidamente conciencia de que la indispensable unión de la ciudadanía democrática está muy lejos de responder a la presunta defensa de monopolios, privile-

gios o imperialismos, pues de lo que se trata es de la defensa de la libertad más elemental.

En vano el marxismo multiplicará sus insultos y distorsionará en su propaganda las legítimas actitudes de oposición a sus avances. Será inútil que trate de convencer al país de que es normal que el territorio abunde en activistas extranjeros, de que la escasez de productos es de responsabilidad de los sabotadores, de que el plebiscito que pide la mayoría de la Universidad de Chile es una aspiración reaccionaria, de que la resistencia a las haciendas estatales y centros de reforma agraria es una actitud pequeño burguesa y que las operaciones guerrilleras del MIR deben definirse como simples tácticas inmaduras y equivocadas.

El Parlamento chileno se encuentra ahora frente a una de las mayores responsabilidades de su honrosa existencia. Es un instante en que todas las críticas a la institución parlamentaria se desvanecen porque se llega a la médula y a la razón de ser de aquélla, es decir, a la defensa de las libertades públicas, a los fueros irrenunciables de la persona humana. A través de un complejo proceso político y legislativo, en el cual la propaganda marxista no ahorrará ataques para los defensores de la democracia, se tramitarán los proyectos e iniciativas que definirán la suerte próxima del país. Las tres áreas y la Cámara Única revisten, en este aspecto, el carácter de grandes frentes de batalla.

El valor de la democracia

(19 de diciembre de 1971)

El primero de diciembre de 1971 se realiza la llamada "marcha de las cacerolas", en la que participaron mujeres de todos los sectores de oposición, siendo atacadas violentamente tanto por la fuerza pública como por grupos juveniles de Gobierno (EM, 2 diciembre, pág. 1).

El Gobierno decreta zona de emergencia en Santiago, asumiendo el cargo de Jefe de Zona el general Augusto Pinochet (EM, 3 diciembre, pág. 1).

Con un lleno total se realizó el 16 la concentración organizada por la Democracia Cristiana en el Estadio Nacional. El discurso de fondo estuvo a cargo de Renán Fuentealba (EM, 17 diciembre, pág. 1).

Se acercan elecciones complementarias. O'Higgins y Colchagua postulan al Senado Rafael Moreno y Héctor Olivares, por la oposición y gobierno, respectivamente; a la Cámara, por Linares, Sergio Diez y María Eliana Mery.

La Semana Política

DOS CARAS DE UN MODELO

La experiencia de gobierno de los comunistas que se realiza en nuestro país se ha llamado "modelo chileno", para indicar que en Chile los comunistas llegaron electoralmente al poder y que procuran consolidar su régimen dentro de la legalidad democrática.

Pero si existe un modelo chileno del avance y afianzamiento de los comunistas, está naciendo también un modelo chileno para detener al comunismo.

La cara comunista del modelo chileno es de éxito discutible. Fue democrática la llegada al poder de los elementos marxistas y, dentro de las zozobras de todos conocidas, las libertades ciudadanas subsisten. Este es el aspecto positivo del modelo.

Por el otro lado, la imagen de las ollas vacías define con la mayor elocuencia la crisis económica a que nos encaminamos rápidamente y que demuestra las fallas insalvables del modelo. Más aún, en vista de que la crisis traería el desprestigio del régimen, si subsisten las libertades ciudadanas, el Ministro de Economía, señor Pedro Vuskovic, y sus funcionarios han emprendido verdaderas operaciones de comandos para tomarse diariamente una empresa por la vía de intervenciones administrativas.

Del aniquilamiento del sector privado esperan los comunistas conseguir que el mayor número de empleos sea controlado por ellos y que el mismo control se ejerza sobre la distribución de aumentos y artículos esenciales, sobre el crédito, sobre el papel, sobre los anuncios de prensa

y radio y sobre cualquier otro elemento en que se apoye la libertad de discrepar con el régimen.

El modelo está fracasando, pues, a causa de la crisis económica y porque además sus propios inventores lo combaten al empujar hacia la dictadura sobre empleos, suministros e información.

A esto hay que añadir que el cansado visitante cubano desahució públicamente el modelo chileno y que la misma melodía tocaron con precipitación comunistas y socialistas.

Pero, sea como fuere, todavía corre por la prensa mundial el elogio del modelo chileno de tránsito hacia el socialismo, aunque carezca del mecanismo de resonancia que sólo los comunistas saben dar a sus consignas.

La propaganda estereotipada de la Unidad Popular situó a sus adversarios en la derecha y, con las energías que se tienen en las primeras etapas de una labor, empezaron los publicistas oficiales a destruir prestigios políticos tradicionales, a enlodar a los grandes empresarios y a presentar al Partido Nacional y al sector freísta de la Democracia Cristiana como representantes de grandes y oscuros intereses económicos.

El desfile de las cacerolas de Santiago, de Valparaíso y de Viña del Mar hizo caer una venda de los ojos al oficialismo y la alarma de sus personeros no conoció límites. Fueron sofocadas rápidamente las manifestaciones de este género y el secretario general del Partido Comunista anunció que no las admitiría en lo sucesivo, con lo que los derechos de reunión y de opinión

quedaron sujetos a la voluntad de dicho jefe de partido.

El visitante cubano diagnosticó que el caso era fascismo y, con la habitual sumisión que los chilenos tenemos hacia las ideas que nos traen los extranjeros, fascismo repitieron y repiten los publicistas oficiales.

Hasta que tuvieron lugar esos desfiles, amplios, multipartidarios y con un vasto pluralismo social, la Unidad Popular no entendía que la democracia chilena se estaba movilizándose en su base y que las sucesivas derrotas del marxismo en gremios y otros organismos sociales no eran el resultado de maniobras de partidos opositores sino la voluntad del pueblo mismo.

La acusación de fascistas se explica porque produciría risa suponer que los pobladores o los campesinos son hoy engañados por alguna oligarquía y que es ésta y no la voluntad ciudadana la que triunfa en las elecciones de vecinos y trabajadores. Tenían los marxistas que encontrarle un nombre a la resistencia de la democracia a consentir en su propia destrucción y han bautizado a esa resistencia como fascismo, aunque es indudable que la abrumadora mayoría del país se adhiere fervorosamente a la ley, al derecho y a la libertad.

Cuando el comunismo está en apuros insulta a sus adversarios tildándolos de fascistas. Cuando se siente más firme los llama oligarcas, momios o imperialistas. Pero reserva el nombre de fascismo a la oposición propiamente popular y multitudinaria, a la que comprende a todas las clases sociales y que demuestra el error profundo del esquema marxista-leninista.

No hay, pues, que extrañarse ni alarmarse por el nuevo apodo. Era lógico esperarlo. También a los comunistas que con Dubcek protagonizaron la Primavera de Praga se les acusó de haberse dejado inspirar por elementos nazis que inexplicablemente sobrevivían aún en Checoslovaquia.

Dentro de este modelo chileno de oposición al comunismo habría que situar la gran concentración organizada por la Democracia Cristiana en el Estadio Nacional. La mejor demostración de la contundencia del acto es la forma en que el oficialismo ha tratado de silenciarlo o de minimizarlo. Una vez más los publicistas oficiales se equivocan al creer además que las bases demócratacristianas se alarmarían porque al Estadio Nacional concurrieron algunos elementos independientes, nacionales, radicales y de otras agrupaciones.

La verdad es todo lo contrario: el modelo chileno de oposición al comunismo está creándose desde las bases e imponiéndose a las directivas de los partidos, cuyo deber es encauzar legal y democráticamente este sentido de unidad y resistencia pacífica a los avances del comunismo totalitario.

El discurso del senador Renán Fuentealba, presidente del PDC, reflejó bien dentro de los puntos de vista doctrinarios de su propio partido la situación en que el país se encuentra y la vocación democrática irrenunciable de los chilenos. Los ataques lanzados al discurso por el oficialismo demuestran que el senador dio en el blanco y que la concentración vino a reforzar la oposición democrática al marxismo.

EL VALOR DE LA DEMOCRACIA

Uno de los grandes méritos del régimen democrático, es decir, de aquel en que impera sin cortapisas la opinión pública, consiste en que un Gobierno no puede persistir indefinidamente en sus errores.

El otro mérito indiscutible del régimen democrático es que permite resolver sus propios conflictos sin quebrantarse y sin traicionarse a sí mismo.

Esas dos características faltan en el régimen totalitario. En ellos la opinión pública está amordazada y los gobernantes no pueden advertir sus errores. Por eso confunden la oposición con la sedición o la contrarrevolución. Esta misma rigidez los lleva a perpetuarse por el terror, como Stalin, o a ser derrocados imprevistamente, como Khrushchev, en un golpe de palacio.

En los totalitarismos la caldera se calienta hasta que estalla y ellos resuelven sus conflictos a través de grandes trastornos. Sólo la democracia sabe a tiempo el peligro y tiene válvulas para bajar las presiones.

Los sucesos de estos últimos días demuestran que hay inquietud y descontento público innegables. No sólo los gremios que podrían ser tildados de reaccionarios dan el triunfo a los opositores, sino que hay empresas en que los trabajadores resisten la estatización y las protestas son compartidas por estudiantes universitarios, por periodistas y por dueñas de casa, dando diversos motivos que coinciden en el fondo en la defensa de la libertad, en el descontento por la situación económica y política presente y en la desconfianza por el porvenir.

Diversas manifestaciones callejeras fueron los síntomas del descontento. La reunión del Area Privada mostró una elocuente uniformidad en los sectores productivos. El triunfo abrumador de los periodistas libres en el Consejo Nacional y en todos menos uno de los Consejos Regionales fue una respuesta a los empeños oficiales por controlar la información.

La concentración multitudinaria del Estadio Nacional, organizada por la Democracia Cristiana, indica que los partidos, movimientos y ciudadanos independientes pueden superar diferencias ante el imperativo de defender la libertad y la democracia que ellos sienten amenazadas.

Un serio error del oficialismo sería ver en todo esto un movimiento sedicioso o considerarlo como tal para los efectos tácticos. Es tan amplio el consenso ciudadano acerca de la situación real del país que nadie creería que la inquietud a que asistimos tenga agentes provocadores artificiales. Lo más contraproducente sería entonces aceptar los consejos de quienes quisieran embestir taurinamente contra la población, en vez de reconocer con humildad que los peores adversarios del régimen son los graves y reiterados desaciertos que cometen los personeros del Gobierno.

Tal vez el peor de esos desaciertos es haber creído que el programa de la Unidad Popular ha reemplazado a la Constitución Política de Chile y que, por tanto, debe cumplirse aun con atropello de las leyes y de la propia Constitución.

Todo programa electoral, y aun que el candidato que lo represente haya sido elegido por la mayoría

absoluta de sus conciudadanos, envuelve una simple proposición al país. Sus principios y sus medidas entran entonces al debate cívico y se concretan en leyes y en disposiciones administrativas.

La raíz de las incomprendiones entre el Gobierno y los partidos democráticos que han sido virtualmente empujados hacia líneas oppositoras cada vez más marcadas consiste precisamente en que los hombres de la UP no admiten discutir el programa sino que tratan de ejecutarlo empleando la ley a su favor, prescindiendo de ella, reprimiendo las manifestaciones de protesta, usando la propaganda oficial para denigrar a los que discrepan y, en fin, instaurando en el país un clima de tensión cuyos resultados económicos, sociales y políticos se están palpando por amigos y adversarios del Presidente Allende.

De no mediar este concepto verdaderamente totalitario del programa de la UP, los Ministros del Interior y de Economía, señores Tohá y Vuskovic, que se encuentran acusados constitucionalmente, habrían debido presentar sus renunciaciones apenas comprobaron las evidentes dificultades en que se encuentra el país por causa de su gestión.

Cualquiera que sea la suerte de esos procesos acusatorios, ellos son los signos anunciadores que tiene una democracia para impedir a tiempo excesivas presiones. En vez de gritar una y otra vez que viene el lobo de la sedición, bien valdría la pena que los publicistas oficiales pusieran el oído a lo que sucede y no se obstinaran en defender políticas probadamente equivocadas y ruinosas.

En las elecciones del 16 de enero próximo en O'Higgins y Colchagua y en Linares la opinión pública será llamada a pronunciarse a favor o en contra del Gobierno. La Unidad Popular llegará a esos comicios enteramente unida y con el concurso de los radicales del senador Bossay. Si los independientes, demócratacristianos, nacionales y radicales democráticos toman en

serio el avance del comunismo y del socialismo totalitarios no debieran titubear en presentarse también unidos en apoyo de los candidatos de la oposición, el demócratacristiano don Rafael Moreno y el nacional don Sergio Diez. Estos enfrentamientos cívicos son los verdaderos caminos que tiene la democracia para resolver sus conflictos.

Año tenso y dramático

(2 de enero de 1972)

El artículo analiza los principales acontecimientos políticos del año 1971, y se refiere además a la elección senatorial por O'Higgins y Colchagua y a la de diputado por Linares, programadas para el 16 de enero.

La Semana Política

AÑO TENSO Y DRAMÁTICO

Si se quiere revivir lo ocurrido en 1971, podría colocarse en primer plano la tragedia del asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic, la acción de los grupos armados ilegales y la sensación de inseguridad en que ha vivido el país. Pero también este es el año en que se nacionalizan el cobre de la gran minería, el salitre y el carbón, y en que se traspasan al Gobierno, por simple acto administrativo, las acciones de los bancos privados. En el orden institucional, el Ejecutivo ha propuesto la Cámara Única y serias limitaciones a la independencia del Poder Judicial. En el campo de la libertad de información, una asamblea de los llamados periodistas de izquierda ha servido de base para crear una central de propaganda oficial que dirige las campañas oficiales, en tanto que se propone el monopolio del papel de diarios como meta del Gobierno y las estaciones radiodifusoras son absorbidas u orientadas a través de la distribución de avisos estatales. Habría que registrar también la venida del gobernante cubano, que marcó una etapa en la estrategia y hasta en el lenguaje del marxismo chileno. Finalmente, cabría consignar las múltiples manifestaciones públicas, como las de los estudiantes y de las mujeres.

La política frente a los grupos armados ilegales, y la circunstancia de no haber respetado los derechos de reunión y de información son las causas principales de que el Ministro del Interior esté acusado constitucionalmente.

La política de conformación ilegal del área pública, de control creciente de las actividades particulares, de alto consumo de divisas y de elevadas emisiones monetarias, que impulsa el Ministro de Economía, son motivo de inquietud y de vaticinios poco halagadores sobre la estabilidad y el desarrollo del país.

Aunque no se han mostrado coincidencias doctrinarias y ni siquiera estratégicas entre el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional y la Democracia Radical, la conducta del Gobierno ha ido facilitando las coincidencias tácticas en un variado número de asuntos.

En la Unidad Popular el fuerte predominio del sector marxista y las diferencias entre los dos principales partidos, el Socialista y el Comunista, no trascienden al público por lo general, salvo que las postergaciones a uno u otro partido pequeño impulsen a los dirigentes de éstos a salvar su responsabilidad y a dejar traslucir lo que ocurre.

Pero este resumen, por cierto incompleto, del año 1971, no esclarece

ce por sí mismo el verdadero contenido de lo que ocurrió.

Para los marxistas, se han cumplido metas importantes, como son el brusco incremento del área social, aunque por medios discutibles y a espaldas del Congreso; la mayor velocidad y drasticidad conferidas a la reforma agraria y a la más aguda redistribución de rentas. Desde este punto de vista, el país habría avanzado en su tránsito hacia el socialismo, entendido éste como la completa colectivización de los medios de producción y la constitución del proletariado en clase única, a través del desaparecimiento de las demás clases.

La creciente oposición de los sectores democráticos a los postulados prácticos del programa de la Unidad Popular indicaría que los intentos de coartar las libertades públicas encuentran obstáculos en la ciudadanía y que la estrategia de introducir al país en el camino del comunismo, a través de la demagogia económica, estaría tropezando con vallas cada vez más difíciles de salvar.

Para quien pudiera observar este agitado panorama con la más completa e indiferente imparcialidad, tal vez advertiría que algo nuevo le ha ocurrido al país, algo que no aparece en los balances ni en los saldos a favor o en contra de la Unidad Popular. Ese imaginario observador llegaría a la conclusión de que el intenso politicismo generalizado ha contribuido al aflojamiento de un resorte vital. La lucha partidista, la necesidad de defender posiciones de lucha y de acción, parece concentrar todas las energías y desviarlas del trabajo creador.

La desmoralización que tiene lugar en las faenas, empezando por las grandes minas de cobre, es una de las formas que adopta este aflojamiento de las tensiones vitales. La presencia de controles políticos, la discriminación en favor del militante, la preferencia por el adoctrinamiento partidario por sobre el entrenamiento industrial, el temor de las persecuciones y los aumentos de costos en avances en la productividad son factores que determinan un peligroso desaliento.

La misma ligereza con que el Gobierno emite dinero se ha traducido en una facilidad excesiva para gastar los fondos públicos y para emplear todos los recursos posibles en la consecución de objetivos políticos. La sensatez burocrática chilena va perdiéndose por la llegada de nuevos criterios, según los cuales el fin partidista justifica los medios económicos y jurídicos empleados.

En un país condenado aparentemente a vegetar en el subconsumo, un aumento brusco de la capacidad de compra del público ha sido beneficioso, pero como esa capacidad se ha logrado mediante más dinero y con precios artificialmente bajos, amplios sectores ciudadanos han experimentado un transitorio bienestar que se debe a instrumentos políticos y por tanto ajenos al esfuerzo personal en el trabajo. No ha surgido pues de esta activación de la capacidad industrial, imposible de mantener por tiempo indefinido, sin grandes inversiones, un empuje económico durable y generalizado.

Los ataques a los empresarios y a los grupos medios en general han significado en algunos casos la retracción de la iniciativa de esos sec-

tores y en otros casos la colaboración energética al proceso productivo, pero sin ambiciones de invertir ni de planear otras empresas.

Es verdaderamente incalculable la pérdida que el país ha experimentado en su patrimonio de capacidades profesionales, técnicas y empresarias de alta calidad. Aunque los titulares de ellas no hayan emigrado del país y sigan prestando servicios a la economía nacional, el ritmo de su esfuerzo resulta por completo diferente.

El Gobierno se complace en pensar que el costo social de la marcha hacia el socialismo marxista no tiene significación alguna o la tiene muy escasa. Si esto se aprecia en vidas humanas, con ser ponderable por lo valioso de las existencias sacrificadas, no puede compararse al de otras revoluciones. En cambio, si pudieran medirse las pérdidas de disciplina, de organización, de capacidades, de productividad, de moralidad, habría de verse que el costo social impuesto hasta ahora por la Unidad Popular es oneroso y a veces muy difícil de soportar para el país.

La demagogia ha absorbido casi todo, desde la Universidad hasta la más modesta faena. Y tal absorción desnaturaliza los trabajos y servicios, y desmoraliza a los individuos, pues todo se vuelca a la lucha, a la propaganda, al forcejeo por el poder. Escaso tiempo queda entonces para el trabajo productivo o para la meditación creadora.

No se trata por cierto de rehuir la lucha ni de rechazar una posición política en que los hombres y mujeres están colocados por obra de las actuales circunstancias. Lo que im-

porta es consignar que la difícil situación del país está gastando reservas y energías muy valiosas, y que ese proceso de fatiga será pagado muy caro por todos los chilenos. El marxismo ha querido someter a nuestro país a este doloroso experimento, y sólo queda tomar nota de las actitudes que el paciente asume después de un año en el proceso.

REHABILITACIÓN NECESARIA

Si la politización ha actuado como toxina enervante de la capacidad productiva nacional, también ella ha servido para que el juicio político se extienda a diversos sectores que hasta ahora miraban con indiferencia el desenvolvimiento de nuestra democracia. Muchísimas personas creían que nuestras instituciones eran tan naturales e inamovibles como la cordillera de los Andes, y que no valía la pena hacer esfuerzo alguno para salvarlas. Otros creían que tales instituciones eran tan defectuosas que cualquier cambio en ellas sería favorable.

La violenta politización a que el marxismo ha sometido el país trajo un despertar de la mayoría democrática. Muchas indiferencias se han transformado en estados de alarma y de actividad. Los matices que tanto han servido para dividir a los chilenos tienden a perder importancia frente a riesgos de mayor tamaño. Ya las instituciones fundamentales vuelven a aparecer como defensoras del esencial valor de la libertad y, aunque sean susceptibles de críticas y de mejoramiento, muchos aprecian su rol insustituible. Más aún, los más avizores perciben que esta democracia y estas institucio-

nes han representado un gran trabajo a lo largo de las generaciones; que ellas no son naturales como los Andes, sino obras del hombre y necesitadas por tanto de su vigilancia y de su defensa.

A través de la lucha por la fuente de trabajo de cada cual, por el gremio profesional y sus prerrogativas y condiciones elementales de funcionamiento, las bases de la sociedad se movilizan en defensa de lo esencial de la democracia. Los estudiantes tienen conciencia de que sus universidades corren peligro en manos del marxismo. Las dueñas de casa y las mujeres en general aprecian verdaderamente la libertad y exigen una conducción del país que no arriesgue el bienestar y la paz de sus hogares.

El genuino perfil de la democracia va saliendo pues de estas dificultades, purificado por el esfuerzo y esclarecido por la sensación de peligro. Un nuevo respeto por las instituciones, sin negar reformas o remozamientos, se adivina en los ciudadanos amenazados por las inseguridades y expuestos a divisiones y lucha por el exclusivo mandato de los ideólogos del marxismo.

Este proceso de reconstrucción democrática ha de redundar también en una rehabilitación de las energías profundas, en un regreso a los deberes y a las tareas, en una paci-

ficación final de los espíritus que permita que los esfuerzos se aunen en la conquista de la dignidad del bien y de la grandeza del país.

Este proceso democrático que va expresándose en millares de pequeños y grandes plebiscitos tendrá otra manifestación concreta en las jornadas del 16 de enero. En O'Higgins y Colchagua se elige un senador, y en Linares se elige un diputado.

La ciudadanía de esas provincias no ignora que todas las miradas se dirigen hacia ellas, como antes se dirigieron a Valparaíso, donde triunfó el candidato democrático a diputado, doctor Marín, en una lucha que fue memorable como comienzo del proceso rehabilitador a que nos referimos.

En pocos días más debe darse esta lucha democrática en que la Unidad Popular va asociada con el MIR y otras fuerzas de la ultraizquierda, las cuales tal vez se presten para protagonizar escenas de violencia y de amedrentamiento. Frente a ellas se levantan el demócrata-cristiano don Rafael Moreno en O'Higgins y Colchagua, y el nacional don Sergio Diez en Linares. De la victoria de esos dos hombres depende que no se produzcan nuevos avances del marxismo y que nuestra democracia siga su curso evolutivo para bien de la libertad y de la justicia en Chile.

La UP pierde otra batalla

(23 de enero de 1972)

Los candidatos de la Unidad Popular son derrotados en las elecciones complementarias para elegir un senador por O'Higgins y Colchagua, donde triunfó el demócratacristiano Rafael Moreno, y un diputado por Linares, donde triunfó el nacional Sergio Diez.

El Ministro del Interior, José Tohá, afronta una acusación constitucional por la cual fue suspendido de su cargo. Al conocerse esta resolución, el Presidente Allende lo designó Ministro de Defensa (EM, 8 enero, pág. 1). Luego el 22 de enero el Ministro es destituido de su cargo, y ese mismo día presenta su renuncia (EM, 23 enero, pág. 25).

El Presidente Salvador Allende critica severamente al Congreso por cadena nacional de radioemisoras, lo que motiva una respuesta por parte del Presidente del Senado, Patricio Aylwin (EM, 25 enero, pág. 1).

La Semana Política

LA UP PIERDE OTRA BATALLA

El domingo los partidos de la Unidad Popular sufrieron una derrota clara, contundente, indiscutible.

En O'Higgins y Colchagua dieron la batalla con el mejor candidato que tenían, según opinión de los entendidos en la zona. La oposición presentó a Rafael Moreno, cuyas condiciones personales son óptimas, pero que no era de la región y que, por haberse desempeñado en la CORA en un período álgido de la reforma agraria, podía despertar resistencias por parte de los afectados.

El resultado es elocuente: Moreno: 77.614 votos y el 53,18 por ciento de los sufragios; Olivares, 68.338 votos y el 46,82 por ciento de los votos.

En la provincia de O'Higgins, donde era seguro que ganaría la Unidad Popular, la oposición ganó

con el 50,69 por ciento al candidato del Gobierno, que sólo obtuvo el 49,31 por ciento de los votos.

El candidato señor Moreno logró en Colchagua el 58,3 por ciento de la votación, mientras su contrincante oficialista tuvo que contentarse con el 41,70 por ciento de los sufragios.

Moreno superó a Olivares por más o menos 1.500 votos en O'Higgins y por 7.500 aproximadamente en Colchagua.

La derrota de la UP es entonces concluyente, y no cabe ninguna excusa verdaderamente válida para disminuir tal derrota.

El desastre de la Unidad Popular es todavía peor en la provincia de Linares.

Ahí el candidato señor Sergio Diez obtuvo el 58,63 por ciento de la votación contra un 41,37 por ciento de su contrincante, debiendo añadirse que la Unidad Popular perdió en la votación de varones y fue

literalmente arrasada en las mesas de mujeres. El candidato opositor obtuvo 29.990 votos sobre un total de 51.669, mientras que su adversario consiguió 21.165.

Estos datos obligan a la Unidad Popular a examinar descarnadamente su situación electoral y a no hacerse ilusiones en cuanto a la tendencia que las sucesivas consultas a la ciudadanía arrojan.

La nueva derrota del oficialismo ha despertado dos clases de reacciones que parecen igualmente negativas. Por una parte, quienes se consideran en el lado de los vencedores han efectuado manifestaciones de júbilo que cualquier observador imparcial consideraría exageradas. En el hecho, esta derrota de la Unidad Popular es significativa pero está muy lejos de poderse identificar con una victoria plena y final de los elementos democráticos.

Por otra parte, la Unidad Popular volviendo a incurrir en el exceso de simplificación, que es uno de sus inconvenientes en el poder, ha denunciado públicamente como factores de su derrota a las fallas de su máquina publicitaria y a las acciones delictuales del Mir.

Es claro que el periodismo oficial y la violencia mirista han resultado contraproducentes, pero no pueden negar ahora los partidos marxistas de la Unidad Popular que son ellos mismos los que alentaron el matonaje verbal y físico, en términos que la población no puede distinguir entre la injuria de los periodistas "francotiradores" y la de los políticos oficialistas, así como entre las ocupaciones ilegales o las agresiones a mano armada del Mir y de militantes de la Unidad Popular.

En todo caso, los comunistas y socialistas hacen un análisis más serio y a fondo de la situación, aunque tal vez los resultados de dicho estudio no salgan a la superficie, sino a través de los hechos futuros.

La situación es grave para el Gobierno por cuanto el resultado electoral vuelve a mostrar que su política no ha conquistado ni a los campesinos, ni a las mujeres, ni a las capas sociales medias. Esto significa que el grupo de chilenos más realista y pragmático, compuesto por las mujeres y los campesinos, se resiste a la aventura totalitaria a que lo invita el comunismo. A la vez, las capas medias también tienen los pies en la tierra y constituyen un factor dinámico en la vida nacional, por lo que su rechazo es un empobrecimiento muy serio de las posibilidades del marxismo en Chile.

Inútil sería achacar a ignorancia, falta de conciencia política o mezquino interés este repudio. Ello equivale a que los partidos marxistas le echaran la culpa al empedrado.

Cualquiera tiene derecho a pensar que la causa de este fracaso es la manifiesta incapacidad de la Unidad Popular. Incapacidad política pues ella choca con grupos y sectores que, según su esquema, deberían serle afines. Incapacidad administrativa, ya que está destruyendo la producción agrícola, minera e industrial del país y obstaculizando a un grado inverosímil el comercio externo e interno de Chile.

No se busquen, pues, complicadas causas del juicio adverso de la opinión pública. Vayase a los almacenes. Examinense las cifras. Háganse comparaciones.

En el orden político, la Unidad Popular se satisface pensando que cuenta con la "clase obrera", pero tal vez olvida que una gran parte de los obreros linda con las capas medias o está francamente allí, y que la mujer obrera, el campesino, el pequeño comerciante, el artesano, no son un compartimento separado de esa abstracta "clase obrera".

En el orden económico, la Unidad Popular se regocija porque han aumentado la producción y las ventas, olvidando que no se reponen ni amplían las máquinas productivas. Es como un automovilista que se alegrara de conducir su gastado vehículo a alta velocidad sin contar en el camino ni con repuestos, ni con bencina. La aceleración de hoy sólo hará más dramática la paralización futura.

Añádase que no es por capricho que el señor Ministro del Interior, don José Tohá, afronta las consecuencias de una acusación constitucional. El deterioro del orden público y de la seguridad de las personas son hechos evidentes para todo el país, así como también constan los riesgos que han amenazado a los medios de difusión.

ES IMPOSIBLE VOLVER ATRÁS

El fracaso político y económico de la Unidad Popular, en el modelo de la "vía chilena", no es motivo para entregarse sin más al alborozo opositor como si la salida de la situación nacional fuera fácil y alegre.

Los personeros marxistas se satisfacen pensando en las realizaciones apresuradas de estos meses de Gobierno, pero lo que ellos llaman

realizaciones no constituyen enriquecimientos del patrimonio del país, sino transferencias de bienes productivos de unos poseedores a otros y de unos administradores a otros. Con todo, el resultado concreto es que el país se ha transformado: otros son el ritmo, la organización y las expectativas de nuestra producción minera; otras las condiciones en que hay que afrontar la producción minera, y radicalmente distintas las posibilidades de dedicarse a la producción industrial.

En el mejor de los casos, nuestro país debe emprender una especie de reconstrucción de postguerra, destinada a rehabilitar con nuevas orientaciones las viejas estructuras demolidas para siempre.

Este cambio de horizonte impone también cambios en las mentalidades políticas, en las maneras de concebir el país y de actuar en la vida pública.

Muchos de los que hoy atacan encarnizadamente a la Unidad Popular parecen no acordarse de que este bloque político ha sido posible con el concurso de todo el país, que nuestro sistema legal permite virtualmente que se destruya la libertad y la economía y que, en fin, todo ha estado preparado para que lícitamente la República pasara a manos del comunismo internacional y del castrocomunismo.

Los opositores a la Unidad Popular tienen que reflexionar muy a fondo sobre sus propias responsabilidades políticas y tomar en cuenta que si no fuera por el empuje de las bases del país, del pueblo mismo, a muchos les habría sido difícil recuperarse.

Los comunistas están empeñados en ganar a toda costa a los demócratacristianos. Con ese objeto los halagan y por otra parte los denigran acusándolos de "contubernio". Esa palabra simboliza para ellos la unidad táctica de la oposición, que ha resultado exitosa y que quisieran desprestigiar haciendo creer que se trata de una actitud derechizante y claudicante de los demócratacristianos.

El juego es demasiado burdo para que impresione. En el hecho lo que ocurre es que la situación política ha cambiado tan profundamente que las referencias al pasado tienen poca validez. Ni la "derecha" es tal, ni los "cambios" tienen el sentido que pudo dárseles en la decena de 1960, ni la "izquierda", el "progresismo", la "democracia" poseen los significados imprecisos de entonces. Lógico es pues que se produzcan acercamientos transitorios y acuerdos específicos aconsejados por los nuevos hechos.

El empresario privado será en el futuro el pequeño empresario, el socio de cooperativa o el trabajador asociado a su empresa. El sector público habrá de ser forzosamente más poderoso que antes. La antigua derecha es ya imposible, pero tampoco puede regresarse a una mentalidad que distorsiona las estructuras de precios y que, por esa causa, impide absolutamente la elevación del nivel de vida de los campesinos, y el autoabastecimiento agropecuario de Chile frena las exportaciones y paraliza las iniciativas productoras. No tienen cabida las posiciones feudales, pero tampoco las demagogias fáciles. El aprecio por las libertades públicas ha aumentado con los ries-

gos y ha hecho entender que el peor enemigo de esas libertades es la anarquía.

Una experiencia valiosa de estos tiempos es la espontánea restauración del alto papel de la política en la sociedad. Por varias decenas muchos hombres de bien y dotados para el mando prefirieron los claustros universitarios, las tareas profesionales y técnicas o las empresas económicas antes que la sacrificada e ingrata labor política. Hoy, se aprecia un viraje en ese sentido.

El individualismo del pequeño agricultor o del comerciante se ha quebrado ante la urgencia de solidarizar. El profesor universitario distraído en su laboratorio comprendió tarde que debía cooperar con un cuadro de fuerzas que permitiera la subsistencia de la Universidad. El hombre de empresa, que creía servir a su país desde la producción, está entendiendo que ha dejado abandonado un campo decisivo para la propia economía. La mujer, el campesino, el artesano caen ahora en la cuenta de que el aseo de su calle, el derecho a la vida, el alimento para el hogar o la posibilidad del empleo dependen de posiciones políticas.

El progreso electoral de las colectividades democráticas no puede hacer olvidar que fuerzas antidemocráticas muy poderosas tienen en sus manos instrumentos de Gobierno y que las seguirán usando para debilitar el sustento y la influencia de la oposición.

En este panorama nacional distinto y bruscamente empobrecido, la lucha de los sectores democráticos exigirá nuevas actitudes morales, hombres nuevos, grupos socia-

les más amplios, ideas realistas y voluntades vigorosas. Los triunfos electorales de los partidos democráticos no son ni pueden ser una vuelta atrás, porque fue ese pretérito el que precisamente hizo posible la instauración legal del marxismo en Chile. Si nuestros políticos comprenden el impulso que surge desde la base de la democracia chilena, tendrían que hacerse cargo de que el país está

repudiando a la Unidad Popular, al comunismo y al pro comunismo, pero que no puede regresar ni al pasado lejano ni al pasado inmediato. Hay toda una obra de creación y de imaginación políticas que debe emprenderse mientras sigue el fragor de la presente lucha cívica.

Los triunfos del domingo deben ser motivo de reflexión y de rectificación para todos los sectores.

Poder comunista en el gabinete

(30 de enero de 1972)

El viernes 28 de enero el Presidente de la República dispuso cambios en su gabinete ministerial que son comentados en detalle en el artículo. Podemos agregar los nombres de algunos ministros que se mencionan sin aparecer individualizados: Ministro del Interior, Hernán del Canto, socialista; Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, comunista; Ministro de Obras Públicas, Pascual Barraza, comunista, y del Trabajo, José Oyarce, comunista (EM, 29 enero, pág. 1).

La Semana Política

RECOMPOSICIÓN DEL GABINETE

El Jefe del Estado expresó hace más o menos dos meses su voluntad de introducir innovaciones en el Gabinete. Así lo recordó en la ceremonia de juramento de los nuevos Ministros efectuada el viernes. A raíz de la derrota electoral sufrida por el Gobierno el domingo 16, el Presidente se reafirmó en su propósito. La renuncia de todos los Ministros se produjo el jueves 20, para dejar en libertad a S.E., según la frase de rigor en estos casos. Y sólo el viernes 28 pudo el Presidente llenar todos los cargos y presentar un Gabinete muy similar al que tenía antes de la crisis.

El régimen de la Unidad Popular se caracteriza internamente por las tensiones entre los grupos que aspiran a conservar y, si es posible, a expandir su cuota de poder. La difícil conciliación de las expectativas y de las posibilidades alargó la crisis más allá de lo habitual en un sistema en que los nombramientos son facultad privativa del Presidente.

Salió del Ministerio el pequeño movimiento conocido como API. El

Partido Radical cenista perdió la importante Cartera de Minería, conservó Educación y compensó su pérdida minera con Vivienda. En todo caso, Minería quedó en manos del otro radicalismo, el PIR, del senador Bossay, colectividad que se hizo cargo también de Justicia. El Partido Social Demócrata sigue contentándose con un Ministerio de Tierras que espera transformar por ley en un Ministerio del Mar. Las pequeñas colectividades ex democratacristianas del MAPU y de la IC permanecen también cada una con su Ministerio.

Es precaria la condición de los nombrados grupos por cuanto el Presidente los invitó a "una integración y unificación de sectores que tienen afinidad ideológica". En el caso de los dos segmentos radicales y de los socialdemócratas, la obligación de unirse tiene un plazo perentorio, después del cual S.E. decidirá sobre la suerte de los titulares de las cinco Carteras que representan a dichas fuerzas.

Los ex democratacristianos recibieron similar notificación, aunque sin plazo perentorio.

A la usanza de los Mandatarios anteriores a 1891, el Presidente Allende cree de su deber participar activamente en la formación y consolidación de los grupos políticos que lo acompañan en su tarea gubernativa.

Razones evidentes de prestigio imponían que la cuota de los socialistas se mantuviera igual a la que poseían antes del sismo político del domingo 16 de enero.

En el Gabinete anterior los socialistas tenían las Carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Vivienda. Además de la Secretaría General de Gobierno, que es más que todo una dependencia directa y personal del Presidente, cargo que conservan con el mismo titular.

Los socialistas pierden Vivienda, que era el único trozo de poder económico oficial que les dejaron los comunistas. Conservan Relaciones, instrumento importante pero sin incidencia en la política interna de masas. Reciben Defensa Nacional, Cartera que relaciona al sector Gobierno con las aspiraciones y necesidades institucionales de las Fuerzas Armadas, pero éstas son por esencia ajenas a la política y no valen en ellas la tarjeta de recomendación, el empeño o la presión partidista. La única Cartera de influencia para ellos es Interior, pero el fracaso del señor Tohá en dicho cargo los llevó a pensar en un "duro" para el puesto.

La desmedrada posición socialista impuso al Presidente dos situaciones difíciles.

El señor Tohá volvió a ser nombrado en Defensa Nacional. Allí seguirá encontrando la proverbial cortesía y disciplina de las Fuerzas Ar-

madas, y no se le hará sentir la ingrata circunstancia de que vuelva a superior jerárquico de ellas inmediatamente de destituido de sus funciones de Ministro del Interior. A pesar de que el juez competente estimó que no ha cometido delito penal, los graves hechos ocurridos en el terreno del orden público abonan la condena del Senado, Corporación que actuó por lo demás en uso de sus facultades constitucionales privativas.

Los problemas que este nombramiento traiga para las buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso compensan a los socialistas de algún modo la inferioridad de acción política con que quedan respecto de los comunistas. Para el ex Ministro del Interior tal vez no sea cómoda su nueva posición, pero su probada lealtad política al Presidente Allende y a su partido le dieron fuerzas para aceptarla.

El nombre "duro" para el Ministerio del Interior, designado por el Comité Central del Partido Socialista en una votación decidida por estrecho margen, es el señor Hernán del Canto, secretario general de la CUT, activo dirigente socialista en las organizaciones laborales y ex candidato de la Unidad Popular en la elección de Valparaíso, donde triunfó el doctor Osear Marín, representando a los opositores.

Al nuevo Ministro del Interior se le mira como seguidor de la corriente del secretario general socialista, senador Carlos Altamirano. Este lo impuso como candidato a diputado en Valparaíso y ahora lo ha propuesto a S.E. para el Ministerio del Interior, desde donde encabezará el

Gabinete, por ser el Ministro que está primero en el orden de precedencia. En razón de su cargo, subroga al Presidente de la República en caso de ausencia de éste, es el Secretario de Estado que se relaciona en forma directa con el Parlamento y que, por mandato de la ley, le corresponde "todo lo relativo al Gobierno político y local del territorio y el mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público".

Al recibir el juramento del Ministro Del Canto, S.E. expresó que tal vez a muchos les causará desazón, inquietud y ofuscación la circunstancia de que vaya a ese alto cargo un obrero. Sin embargo, la inmensa mayoría de nuestro país tiene sentido auténticamente democrático, no es clasista y no se preocupa por tanto de si un Ministro ha sido o no de un grupo social determinado. Lo que interesa es que los Ministros cumplan bien con su tarea, sean fieles a su juramento de respetar la Constitución y las leyes, sean honestos, generosos y eficaces. Como ha de suponerse que el Presidente eligió a un Ministro del Interior idóneo para el cargo, prescindiendo de su calidad social y de la imposición de un partido, la opinión pública no juzgará del pasado del señor Ministro, sino de su capacidad para actuar en nuestra democracia del presente.

PODER COMUNISTA EN EL GABINETE

El control comunista del Gobierno se ha afianzado en la recomposición del Gabinete, aunque ello no se advirtiera a primera vista.

Desde luego en Interior tienen como Subsecretario a un hábil abogado, enérgico, activo y buen conocedor de la máquina administrativa de Gobierno Interior y de los servicios de policía. No les interesa a los comunistas el aspecto formal en el Gobierno, sino el poder efectivo. Por eso tienen un abogado allí donde los problemas jurídicos, políticos y administrativos exigen hábito y preparación para ellos.

En el Ministerio de Economía mantienen al señor Vuskovic, cuya calidad de independiente no convence a nadie, que cumple con rigor los planes comunistas y que es hombre de toda la confianza del partido.

Ocupa la Cartera de Hacienda el Ministro Zorrilla, comunista antiguo y disciplinado, cuyas líneas de acción se determinan por el equipo que preside el señor Vuskovic.

El vital Ministerio de Obras Públicas se encuentra también en manos comunistas, instrumento clave para los problemas de la ocupación de mano de obra, de inversión fiscal y de penetración política en el territorio.

El Ministerio del Trabajo sigue en poder de los comunistas.

En Minería, el titular de la Cartera será un radical, pero en los servicios fundamentales dependientes de ese Ministerio y en las grandes minas del cobre el control comunista es casi completo.

En Agricultura, los comunistas cuentan con el vicepresidente de la CORA, pero es probable que, en el futuro, conservando al Ministro o sin él, reemplacen a otras autoridades y obtengan el manejo seguro de tan importante ramo.

En todos o casi todos los puestos importantes de la Administración los comunistas tienen en ellos o cerca de ellos a un militante seguro.

Esta descripción corresponde a lo que existía antes del viernes último y puede estimarse entonces que los comunistas no habrían avanzado en el control del Gobierno.

Hay, sin embargo, dos situaciones estratégicas que llevan a la conclusión contraria.

En primer término, ninguno de los cuatro Ministros comunistas (incluyendo al señor Vuskovic) se ha movido de su puesto. Es el único partido que consiguió esa inamovilidad, con las siguientes ventajas: el trabajo no se interrumpe, sigue aprovechándose la experiencia acumulada y los cambios de mandos medios que convenga efectuar se harán por los propios comunistas y de acuerdo a la misma experiencia hecha. Así, por ejemplo, los socialistas llevan un Ministro nuevo a Interior, en tanto que los comunistas tienen en esa misma Cartera un Subsecretario experimentado y siguen con Ministros que saben en detalle el manejo de Economía, de Hacienda, de Obras Públicas y de Trabajo.

Pero el mayor éxito comunista es haber logrado incorporar más radicales en el Ministerio. Nada le interesa tanto al comunismo como soldar las fracturas del radicalismo que apoya a la Unidad Popular. La pos-

tura de los radicales cenistas, a veces extrema y burdamente marxista-leninista, no sirve a la estrategia del comunismo. Este necesita evitar la desconfianza de la clase media y para tal objetivo le es útil la colectividad que preside el senador Bossay.

Con la incorporación del PIR, el Gobierno asegura el apoyo de cinco senadores y siete diputados, como lo señaló con satisfacción S.E. Es cierto que ese grupo parlamentario ha respaldado en todo al Gobierno, pero ahora se le compromete administrativamente contando con él como si no hubiese división en el radicalismo que sigue al oficialismo. Este es otro factor que coopera a la unión de radicales y afines, a que aspiran los comunistas y que anhela con vehemencia el Presidente de la República.

La ventaja para los comunistas es tanto mayor cuanto que el ingreso de un radical más se hizo con movidas y sacrificios de otros partidos y sin costo alguno para ellos, que eran los interesados en la operación.

La nómina de Ministros del nuevo Gabinete no incluye novedades apreciables, pero el forcejeo y las firmes posiciones del Partido Comunista hacen pensar que éste ha resuelto imponer su línea con más energía esperando que sus sólidos militantes salven al régimen de la amenaza de impopularidad y de fracaso.

Pactos electorales

(20 de febrero de 1972)

El Mercurio publicó el 3 de febrero (págs. 1 - 8) en forma exclusiva el informe del Partido Comunista que se comenta en este artículo.

Del informe del Partido Comunista se destacan su crítica a las actuaciones del MIR, su afirmación de que la no unión de las candidaturas de Radomiro Tomic y de Jorge Alessandri el año 70 fue fruto de la acción política comunista, y su llamado a neutralizar a la Democracia Cristiana, ganándose a su base social.

El artículo también se refiere al discurso pronunciado por Salvador Allende en Concepción el día 7 (EM, 8 febrero, pág. 1), en el que éste propicia una lista única de la Unidad Popular para las elecciones parlamentarias de 1973.

La Semana Política

PACTOS ELECTORALES

Los efectos de la derrota de O'Higgins, Colchagua y Linares siguen pesando sobre los partidos de la Unidad Popular. Como se desprende del informe comunista que publicó como primicia nuestro diario el día 3 de febrero y que reprodujo "El Siglo" seis días después, el bloque de Gobierno tuvo un serio deterioro electoral atribuido en el informe a "graves errores de conducción política".

Uno de los expedientes para rectificar esa errónea conducción política ha sido, a juicio de los comunistas, el partido único. Así lo deja entrever el informe confidencial que llamaron después "guión", donde aparecen aceptando condicionalmente la idea, como si les fuera impuesta por otros.

El momento del pánico era oportuno para insinuar en el aire la idea de un alero común para cobijar a todos los bandos del oficialismo.

Los radicales del PER y otros grupos influyeron sin duda en que la redacción definitiva del informe de El Arrayán no contemplara ninguna fórmula electoral de tipo cooperativo. Sin embargo, el Presidente Allende se refirió en su discurso del lunes 7 de febrero a que la Unidad Popular en las próximas elecciones debería "como unidad del pueblo presentar una lista única, la lista del Frente Democrático de la Unidad. Las palabras presidenciales fueron lo bastante amplias como para comprender desde la mera lista única hasta un partido político único ya bautizado de "frente democrático" por S.E.

La iniciativa del Partido Único tropieza con la estructura real de la combinación gobiernista, compuesta de un sector marxista mayoritario y de un sector de pequeños grupos no marxistas, cuya representación más clara reside en el PER o Partido de Izquierda Radical.

La posición de esta última colectividad, expresada por el senador don

Luis Bossay, es de franca resistencia al Partido Único. No puede ser de otro modo, por lo demás, desde que el sector no marxista dentro de la Unidad Popular no desea plegar sus banderas propias y aspira a tener en el bloque oficial un papel más decisivo que el de patente democrática de una empresa capitaneada por comunistas y socialistas. El Partido Único no tiene cabida en la Unidad Popular, ya que su presencia envuelve la absorción de los sectores que se sienten legítimos intérpretes de las capas sociales medias y que tienen esperanzas de que su convicción socialista democrática prevalezca sobre los pensamientos maquiavélicos revelados en el "guión" comunista y sobre el severo fanatismo del ala extrema socialista.

Mientras para los grupos democráticos el Partido Único es la absorción, dicha iniciativa envuelve un pesado compromiso para la fracción que domina el Partido Socialista. Aparte de que su Secretario General, senador Altamirano, no queda bien colocado en el informe confidencial o "guión" comunista y que, en consecuencia, pueda ver difícil su futuro de militante en el Partido Único, esta última colectividad, concebida primariamente con miras electorales parlamentarias, no satisface la ideología de los socialistas. Al respecto, el Secretario General, senador Altamirano, entregó una declaración pública en que expresa: "Sin negarnos al estudio de la formación de un Partido Único o cualquiera otra solución que permita evitar la dispersión de las fuerzas electorales afines, creemos que son las masas en lucha y la profundización del proceso de cambios lo que

permitirá establecer el verdadero camino de la unidad revolucionaria".

El Partido Único deja entonces de ser una iniciativa que los comunistas puedan lograr sin lucha. Dicho Partido Único es imposible por el momento, ya que la Unidad Popular no es propiamente una unidad de principios y de metas.

Pero si lo que se persigue es sólo conseguir más parlamentarios de Gobierno con menos votos, resulta fácil que los partidos y los dirigentes se empeñen en conciliar diferencias en pos de ese objetivo pragmático y de antigua cepa electorera.

No se hable entonces de unidad revolucionaria y ni siquiera de unidad "popular" sino de los artilugios de una miñona política, llegada al Poder Ejecutivo como tal minoría y resuelta a transformarse por cualquier medio en la dueña exclusiva de todo el Poder.

Los partidos opositores están enfrentados a esta segunda alternativa, es decir, a que mediante pactos electorales detrás de la puerta, el bloque de la Unidad Popular sea unidad para las elecciones y campo de la discordia en la disputa por el Poder y en el Gobierno del país.

Resulta casi un sarcasmo que los que condenaron con los peores epítetos el "contubernio" entre demócratacristianos, nacionales y demócratarradicales, no teman impulsar públicamente pactos o alianzas entre partidos que confiesen sus hondas diferencias políticas e ideológicas. ¿Habría o no contubernio entre los socialistas cuasi-miristas y los radicales del PIR, si fueran en listas únicas de candidatos? ¿Habría o no contubernio si marchan juntos los partidarios de dinamizar la lucha

social y los que confían en un socialismo de conciliación de clases? ¿Habría o no contubernio en la alianza entre revolucionarios impacientes y moderados calculadores?

Una contradicción tan profunda, justificada en apariencias con la idea de "evitar la dispersión de las fuerzas electorales afines", será juzgada severamente por la ciudadanía que verá en ella sólo la alianza de posiciones presupuestarias influyentes. Presentarse así al electorado sería uno más de los "graves errores de conducción política", que preocupan a los autores del "guión" comunista.

Los opositores habrán de mirar con entera objetividad este problema. El propósito básico de los demócratacristianos, nacionales y demócratarricales es defender el sistema institucional democrático e impedir cualquier tentativa de monopolización totalitaria del poder. Ese objetivo es claro y superior a cualquier otro. Es la defensa de la libertad de los chilenos para elegir, para trabajar y para vivir. La coincidencia en ese postulado fundamental no admite ser confundida con alianzas para aprovechar fuerzas "afines" que se temen, se celan y divergen profundamente entre sí, como es el caso de varios partidos de la mal llamada Unidad Popular.

Todo medio lícito para defender en común la convivencia democrática debe ser empleado entonces, si los partidos democráticos quieren evitar que una aplanadora marxista sin escrúpulos jurídicos ni políticos las convierta en minoría parlamentaria, pese a que en conjunto son ostensiblemente mayoría en la calle y en el territorio nacional.

AMENAZA A LA CLASE MEDIA

Hacen bien los partidos democráticos en prevenir cualquier sorpresa para las elecciones parlamentarias generales, desde que tales partidos tienen razonables expectativas de buen éxito en esa jornada o en cualquier otra confrontación ciudadana, pues continúan los "graves errores de conducción política" de la Unidad Popular que denuncia el confidencial "guión" comunista.

Sin embargo ha quedado ya demostrado por los hechos que el bloque marxista de la Unidad Popular carece de convicción democrática efectiva y que su mira es la conquista de todo el Poder a través de la desunión y consiguiente debilitamiento de sus adversarios o de cualquier otra táctica semejante.

Uno de los medios más eficaces para la anhelada conquista de todo el Poder es el empleo político de las gigantescas herramientas de influencia económica que se encuentran a disposición del Gobierno y que, no por casualidad, están en manos de diestros militantes del Partido Comunista.

La virtual destrucción de zonas agrícolas enteras, que se retrotraen económicamente a épocas pretéritas con grave perjuicio para el país, pero en las cuales se borró el poder de la clase empresarial agrícola de pequeños, medianos y grandes propietarios; el desaparecimiento de la banca privada; el control estatal y partidista de una amplia zona de industrias y empresas que no responde a motivos económicos, comprensibles sino a muy comprensibles móviles de aniquilamiento político de ciertos sectores sociales, son algu-

nos de los síntomas del proceso que vive el país.

Este proceso consiste en la puesta en marcha de una estrategia económica que mira a la destrucción de la clase media chilena. Mucho se habla —siguiendo a Fidel Castro— de la necesidad de requerir el apoyo de las capas medias, pero en el hecho, como lo dice el "guión" confidencial comunista, la táctica consiste en ir aislando paulatinamente al "enemigo principal" y van quedando en ese papel primero los latifundistas, después las grandes compañías extranjeras, luego los accionistas de compañías chilenas tildadas de monopolios, más adelante los propietarios de automóviles, los agricultores medianos y pequeños, los habitantes de viviendas no mínimas, etc., para terminar con los dueños de citronetas usadas, los choferes de taxis, los artesanos con taller individual y todo el comercio y cualquier actividad lucrativa de magnitudes pequeñas.

El "enemigo principal" consiste para los comunistas en una serie sucesiva de grupos medios que ellos se proponen ir aislando y destruyendo paulatinamente. Si se examina la historia del empobrecimiento de varios sectores productivos de nuestro país y del cierre lento pero constante de posibilidades para muchos trabajadores que vivían de su propia iniciativa, forzoso es convenir que el Gobierno de la Unidad Popular está provocando con más rapidez que la prevista el derrumbe de las capas medias chilenas, a fin de entronizar la igualdad de todos en la pobreza.

El llamativo poeta clérigo nicaragüense Ernesto Cardenal dijo por

televisión que en Cuba todos son pobres, lo que a él le parecía tan laudable que lo recalca como mérito del régimen casuista.

Se diría que los marxistas hacen suyo el propósito del clérigo Cardenal. Con tenacidad luchan por la conquista de la pobreza para todos los chilenos. Emisiones monetarias sin precedentes están destruyendo los ahorros líquidos. La revolución agraria aniquila las inversiones del campo chileno. Las requisiciones, intervenciones, ventas forzadas de títulos y ocupaciones ilegales frustran el resultado del trabajo y ahorro de las industrias. La minería tiende a desaparecer como actividad particular. Y lo que subsiste todavía como riqueza privada es objeto de medidas tributarias expoliadoras, de alzas de costos insalvables, de castigo en los precios, así como de diferentes arbitrios adicionales para cercenar y destruir el ahorro.

Si sigue aplicándose la estrategia Cardenal, en Chile seremos todos pobres como en Cuba, pero habremos perdido también nuestra libertad.

El grave problema que se presenta a nuestra democracia es determinar si los golpes severos, continuos, desalentadores y aniquiladores que está sufriendo cualquier actividad independiente del Estado, van a permitir por un tiempo razonable la resistencia democrática a la dictadura marxista, resistencia que supone espíritu crítico libre de temores y voluntad de sostener partidos y medios de difusión no subvencionados por el Fisco.

Las capas sociales medias están comprendiendo que son ellas el verdadero "enemigo principal" de la

Unidad Popular y es urgente que esta comprensión se eleve a conciencia política antes de que la gue-

rra relámpago de tipo económico fulmine toda oposición eficaz al marxismo.

Poder y mayorías

(19 de marzo de 1972)

Tres plenos políticos se comentan en esta oportunidad: el de los socialistas, en Algarrobo; el de los comunistas en el Sindicato Hirmas, en Santiago, y el de los demócratacristianos en Cartagena (EM, 19 marzo, pág. 31).

Se habla de un documento político del Partido Socialista publicado por la revista PEC y reproducido por El Mercurio el 12 y 13 de marzo. En éste se concluye que es inevitable la etapa de la "dictadura del proletariado" en el tránsito al socialismo.

Los contactos iniciados entre la Democracia Cristiana y el Gobierno son suspendidos a raíz del comienzo de las requisiciones de industrias, con la ayuda de la fuerza pública (EM, 8 marzo, pág. 15).

La Semana Política

PODER Y MAYORÍAS

Se verifican en estos días dos Plenos marxistas (los de los partidos Comunista y Socialista) y el Consejo Plenario de la Democracia Cristiana, reuniones todas en que las colectividades respectivas analizarán la situación política del momento y las estrategias que emplearán en lo sucesivo.

Una profunda divergencia separa a los plenos marxistas del Consejo Demócrata Cristiano.

En efecto, mientras los demócratacristianos ponen el acento en lograr o afianzar mayorías, suponiendo que ellas se identifican con el logro del Poder, los marxistas aspiran al Poder sin preocuparles demasiado la conquista de las mayorías.

Esta divergencia es la que marca los constantes errores de algunos sectores democráticos cuando creen posible la conciliación siquiera parcial de sus puntos de vista con los de los partidos marxistas.

En una democracia normal, el Poder y la mayoría se identifican en el largo plazo, pues las elecciones entregan el Poder a las mayorías. En un Estado revolucionario puede ocurrir a la inversa, que el Poder resida en la minoría y que subyugue a las mayorías.

Un ejemplo ilustra esta aseveración. La mayoría de los pasajeros de un avión secuestrado y la totalidad de la tripulación quisieran continuar su itinerario previsto, pero una pareja de secuestradores encañonando al piloto e inmovilizando al resto de los ocupantes de la nave es capaz de conducirla hacia donde la inmensa mayoría no quiere. En este caso, el Poder está de parte de los secuestradores y nada puede la mayoría contra ellos. Y ello ocurre porque la presencia de la pareja armada es un hecho revolucionario dentro del avión.

Los socialistas han sido bien claros al afirmar que su propósito es la totalidad del poder. Con ese fin

emplean los recursos financieros y administrativos del Estado. Con estos mecanismos el Gobierno puede socavar la estructura actual de producción del país y preparar las condiciones para el derrumbe del Estado y de su aparato represivo, a fin de instalar el auténtico Poder Popular, que se expresa en la dictadura del proletariado y llega en su etapa final a la sociedad comunista.

Los miristas tienen el mismo esquema y su diferencia con los partidos tradicionales está en que desde ya usan las armas para promover la insurrección, aunque sus actos encuentren alguna tímida censura de los partidos de la Unidad Popular.

Los comunistas tampoco están lejos de esa estrategia, y su publicitada autocrítica del Pleno es sólo un ardid para tratar de ponerse a la cabeza del descontento popular creciente, sin perjuicio de que sean ellos los principales generadores de la inflación, las alzas, la escasez y el deterioro de los servicios públicos. Mientras los comunistas se quejan, otros hacen el sucio trabajo de demolición del sistema, pero sabe el glorioso partido que en último término sus nombres son los que se quedan con el negocio. No son los guerrilleros de Sierra Maestra los que dominan en Cuba, sino los comunistas que fueron cómplices de Batista, como lo acreditan las mismas páginas de "El Siglo" y la cordial recepción que ese diario le tributó al antecesor de Castro cuando estuvo en Chile.

La táctica marxista es la de los secuestradores de aviones. Con el cañón de la pistola puesto en la sien del piloto, poco importa que las señoras se lamenten y que los caballe-

ros eleven sus protestas. Este símil es aplicable a la situación del país, por cuanto los partidos marxistas están conquistando el Poder efectivo y rehuyendo al mismo tiempo que se denuncie que ellos son una clara minoría. Mientras la mayoría ciudadana vacile en convertirse en Poder y no logre que un plebiscito denuncie el carácter minoritario del marxismo, las tácticas de los partidos serán poco más que los gemidos de los pasajeros secuestrados.

El error de los políticos tradicionales de creer que en este instante las solas mayorías dan poder efectivo y que el desprestigio económico o el descontento popular son un obstáculo insalvable para el bloque marxista permite que la quiebra moral y material de la República continúe y que los encargados de producir dicha quiebra se reúnan para discutir los términos en que seguirán su tarea.

Ese error, que pudo ser un acierto en la política chilena de antes del 4 de septiembre de 1970, ha permitido que se confíe en el deterioro de la política del Ministro de Economía, el cual, mientras provoca inflación y escasez, va desarticulando el sistema económico y realizando una labor de agitación que le da un puesto de líder en el bloque marxista. Está empeñado el Ministro en "destruir la base de sustentación de la burguesía y el imperialismo y de los latifundistas", como dijo en el Pleno socialista de Algarrobo, y, aunque sus medidas provoquen grandes aflicciones, el marxismo sabrá vestir las con su idioma de combate mientras que controla en forma efectiva los recursos económicos y administrativos necesarios

para sofocar la voluntad de las mayorías nacionales.

En el mismo planteamiento tradicional ha surgido la posibilidad de una solución al conflicto suscitado por la Reforma Constitucional de las tres áreas. El efecto de las conversaciones ha sido, desde luego, desinflar la presión de los partidos opositores en favor de un plebiscito y conseguir que otros temas se coloquen en primer plano, sacando al Gobierno de la Unidad Popular de la incómoda posición de negarse a un plebiscito. Si las conversaciones fructifican habrá una solución jurídica y constitucional del corte acostumbrado en Chile. Pero si fracasan la ciudadanía habrá de convencerse de que el bloque marxista ha situado de veras las cosas en el plano revolucionario, al estilo del secuestrador que encañona al piloto del avión. Y, en este plano, o la mayoría nacional logra convertirse en Poder o dejará muy pronto de expresarse, por haber perdido su base de sustentación económica y la eficacia de sus decisiones a través del Parlamento y de las leyes.

LA TAREA DEL MOMENTO

En apoyo de la política del Ministro de Economía señor Vuskovic, es decir, en respaldo de las estatizaciones de empresas y contra la Reforma Constitucional y el plebiscito, la Unidad Popular está movilizándose en Santiago a piquetes de obreros y estudiantes con banderas, mores y gritos.

Esta movilización táctica, que emana generalmente de las dependencias del propio Ministerio de Economía o de las empresas some-

tidas a intervención o requisición por dicho Ministerio, sustituye a la movilización auténtica de las masas.

Sin embargo, sería un error menospreciar estas manifestaciones. Ellas se desarrollan desde luego con la debida sintonización. Ocurren todos los días a las mismas horas y las columnas se encuentran o, a veces, dan la impresión de aumentar su número con la argucia de circular repetidamente por las mismas calles. Muchos ciudadanos sacuden los hombros e ironizan acerca del pequeño número de manifestantes. En el hecho, los piquetes de la Unidad Popular entrenan a su gente a desafiar a sus adversarios y a dominar la calle.

Debe anotarse además que unos de los gritos que se oyen con frecuencia desde hace algunos meses es: "La tarea del momento, disolver el Parlamento". Esta consigna es una de las que se lanzan contra el Congreso y los partidos opositores, lo que constituye un delito penado expresamente por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La ciudadanía asiste con molestia pero pasivamente al hecho paradojal de que los partidos de Gobierno organizan manifestaciones callejeras subversivas contra el orden republicano. A su vez la fuerza pública evita con celo que tengan lugar incidentes físicos.

Continuamente se discute en qué consiste la legalidad y la constitucionalidad de las conductas del Gobierno o de las fuerzas opositoras, pero la Unidad Popular prepara teóricamente y ejecuta en la práctica la labor de demolición moral de la República, de vejamen a sus pode-

res constitucionales, de injuria al honor de las personas e instituciones y de quebrantamiento del orden público.

El habitante santiaguino no se ha percatado de que el clima de violencia y odio que se vive en la capital es apenas un reflejo de lo que ocurre en algunas provincias. Sobre todo en el sur del país, las tomas de viviendas y predios rústicos se traducen en enfrentamientos continuos. Para nadie es ya un misterio que en las provincias agrarias actúa un verdadero "ejército de liberación" en ciernes, pero montado sobre núcleos campesinos del MIR y del MCR, que realizan múltiples operaciones de pequeña escala.

Los periodistas del aparato publicitario del Gobierno se regocijan de que suba de punto la lucha de clases y de que todas las actividades de la nación estén entrando a un proceso de virulencia política. Esos publicistas olvidan que el Gobierno tiene la responsabilidad del orden público y parecen colocarse en uno de los bandos de la lucha fratricida contemplada en los documentos políticos-doctrinarios que se han dado a conocer.

Antecedentes, todavía fragmentarios, parecen indicar que esa lucha fratricida ha empezado a desarrollarse poco a poco en las zonas campesinas. En muchos lugares reina el terror, se impone el robo, y las órdenes judiciales no pueden cumplirse. Las "tomas" y "retomas" son otras tantas operaciones de esta virtual guerra, que nadie se atreve a designar por su nombre, pero que está situando a los chilenos ante la terrible presencia de un enemigo resuelto a hacer imposible la paz y a

explotar el odio en todos los planos.

Los mandos de la Unidad Popular contienen todavía el desenlace previsto en el documento político socialista publicado en estas columnas y cuyos conceptos debate el Pleno de Algarrobo.

Pero como el propósito del marxismo no es ganar la mayoría de las opiniones sino el poder efectivo sobre los chilenos, los estrategos comunistas y socialistas dilatarán el enfrentamiento calculado por todo el tiempo que les sea posible, aun con riesgo de desprestigio. En el intervalo seguirán acumulando poder a través de las tomas de empresas y fundos, a través del control sobre la calle y a través de la publicidad demagógica o el chantaje.

Cuando el arrinconamiento de los chilenos libres sea un hecho en diversos lugares del territorio, habrá llegado para los marxistas el instante de desencadenar el choque "inevitable" (según ellos), que decida por las armas quién se queda con el Poder en Chile. Como ellos esperarán el momento de máxima debilidad de los sectores democráticos, les asisten pocas dudas acerca de su victoria final. Por eso mismo las mayorías democráticas tienen que convertirse en Poder, haciendo respetar las decisiones del Parlamento y presionando para que el conflicto constitucional de poderes se resuelva por un plebiscito. De lo contrario, la minoría se impondrá definitivamente.

El análisis que realizan tres importantes partidos políticos sobre la difícil situación nacional debe arrojar luz sobre el curso de los acontecimientos.

Marchó la democracia

(16 de abril de 1972)

El 12 de abril la oposición al Gobierno de la Unidad Popular realiza una marcha por Avenida Matta y Grecia en Santiago, al término de la cual se escuchó a dos oradores: Patricio Aylwin, presidente del Senado, y Eliana Vázquez, dirigente de pobladores del Partido Nacional (EM, 13 abril).

El Partido Izquierda Radical se retira del Gobierno y las razones las explica el senador Luis Bossay en un discurso (EM, 15 abril, pág. 24).

El Mercurio publica un documento en que señala la estrategia que seguirá el Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, para apoderarse de empresas privadas a fin de traspasarlas al Estado (EM, 7 - 8 abril). El MAPU reconoce la validez del documento, pero señala que no es oficial.

Como un ejemplo de esta estrategia se plantea que para apoderarse de COPEC (Compañía de Petróleos de Chile) se va a desarrollar una política de restricción de sus precios, afin de llevarla a una crisis económica. Algo similar se planea para GASCO (Compañía de Consumidores de Gas de Santiago).

La Semana Política

MARCHO LA DEMOCRACIA

Por fin, después de dos negativas de la Intendencia de Santiago, la ciudadanía democrática de la capital pudo realizar su marcha.

¿Cuántos marcharon? El Subsecretario Vergara estimó el número de manifestantes en 23 mil, luego subió la cifra a 180 mil y más tarde la redujo a 80 mil. La reacción oscilante del vocero del Gobierno es una de las mejores pruebas de que la manifestación fue enorme. La otra prueba es la sorpresa de los mismos organizadores, que no esperaban un acto cívico de esa magnitud.

No interesa en verdad el cálculo exacto de los que marcharon sino el hecho de que la marcha del miércoles 12 de abril es la manifestación pública más numerosa que registra

la historia de Chile. Contra esta realidad, nada han valido los esfuerzos por apagarla.

¿Cuál era la característica de la reunión? Un clima de entusiasmo y de alegría poco frecuente en las manifestaciones políticas. La alegría corresponde a una especie de liberación del temor y al sentimiento de que la mayoría del país no aceptará dejarse avasallar por la dictadura. El entusiasmo es consecuencia de que nadie llegó a rastras a la concentración, nadie fue presionado u obligado a ir, todos los allí presentes llegaron por su propia voluntad.

Habría que añadir algo todavía. La marcha fue un típico acto de masas, una manifestación de la muchedumbre, una expresión de las bases, que por eso mismo trasciende a los partidos como tales y sobre

todo a sus dirigentes. Estos últimos han interpretado con sagacidad a esas bases al encauzarlas hacia la marcha y al hacer todos los esfuerzos por superar cualquier diferencia entre directivas, pues tales diferencias no son ya entendidas por las masas. Estas actúan en forma instintiva para defender la democracia y la libertad, sin que escuchen distinguos.

Es evidente que la traducción de este movimiento de masas al plano político se hace y se hará a través de los partidos, pero en el instante en que valores esenciales de la convivencia chilena están amenazados, automáticamente, los hombres y mujeres ven sobrepasadas sus propias concepciones para quedarse en esa esencia nacional en peligro.

La intervención del presidente del Senado, Patricio Aylwin, dio la medida del carácter ampliamente representativo de la concentración, al tiempo que le quitó los tintes partidistas. Fue el jefe del Poder Legislativo la cabeza de uno de los Poderes Constitucionales, el que se dirigió al país desde la ferviente tribuna popular de la Avenida Grecia. Esto significa que el Congreso Nacional ha debido tomar en sus manos la bandera de la defensa de las libertades públicas, dando así cumplimiento a la misión histórica de la institución parlamentaria.

"La democracia supone y exige —dijo el senador Aylwin— la aceptación leal de que los adversarios del Gobierno tienen los mismos derechos políticos de quienes lo detentan".

Este principio de la igualdad real ante la ley es la clave de los desacuerdos entre la Unidad Popular y

los opositores, y es también el fondo de los motivos de la marcha democrática del miércoles. Hizo bien, pues, el presidente del Senado en recalcar el punto.

El senador Aylwin mencionó "la impunidad con que actúa y se organizan y proliferan los grupos armados"; la evidencia de esta acción extremista en el caso de la camioneta chocada en Curimón, cuyos ocupantes exhibieron credenciales de la misma Presidencia de la República; el contraste entre la querrela del Gobierno contra el rector de la Universidad de Chile por supuesto asalto a La Moneda y los frecuentes asaltos y ocupaciones de bienes públicos frente a los cuales el Gobierno permanece pasivo; el episodio del desembarco de misteriosas cajas de un avión cubano en presencia del Ministro del Interior y del Director del Servicio de Investigaciones; la distancia que media entre las seguridades legalistas otorgadas por el Presidente de la República en materia de reforma agraria y la dramática anarquía reinante en vastas zonas del campo chileno; la torcida práctica de las "intervenciones" y "requisiciones" para estatizar de hecho las empresas y el veto tendiente a suprimir la reforma constitucional concebida para regularizar las tres áreas económicas, supresión que se extendería incluso a disposiciones aceptadas por los propios parlamentarios de la Unidad Popular; "el empleo permanente, sistemático y odioso de la Televisión Nacional como cátedra de concientización ideológica y política", así como los obstáculos puestos para extender a provincias el Canal 13; el intento de la Unidad Popular de apoderarse de

los medios de difusión del país o de hacer imposible el funcionamiento de los que no están en su poder, intento en que se destaca la sumisión a control gubernativo, a través de la intervención del diario "La Mañana", de Talca; la denuncia de la campaña de injurias y denuestos, así como de presiones de toda índole que sufren los órganos de difusión que logran mantener su independencia; el afán de estatizar la Papelera con el propósito inequívoco de controlar la prensa y demás medios de publicidad escrita; el establecimiento de un monopolio estatal en materia de distribución de productos, a pretexto de combatir los monopolios; el atropello al derecho de reunión en diversas oportunidades.

El presidente del Senado recorrió todos estos hechos preguntando al Presidente de la República acerca de cómo concilia él sus reiteradas declaraciones de apego a la legalidad con estos casos concretos de desprecio a la ley y a la democracia que se están advirtiendo en el régimen.

La multitud era demasiado numerosa para seguir el hilo de los razonamientos del senador Aylwin, pero el orador fue largamente interrumpido por las entusiastas manifestaciones de repudio a la Unidad Popular y a sus personeros. Ese coro de la muchedumbre era más elocuente para subrayar los conceptos del jurista y senador señor Aylwin que la fatigosa acogida que tienen a menudo los prolongados discursos de ciertos demagogos. Ese coro multitudinario, que era en el fondo una manifestación de fe democrática y de protesta contra los atropellos,

disgustó al oficialismo. Al instante los comunistas se quejaron del odio que, según ellos, reflejaba este acto de masas. Los teóricos y prácticos de la lucha de clases no tienen autoridad para condenar el odio. Por eso los comunistas no son los llamados a tirar la primera piedra en cuanto al odio y al resentimiento. Pero además no cabe confundir el odio con la repulsa viril a la mentira, a la injusticia y a la denegación de las libertades. Con la consigna de atacar el odio, los comunistas —que son maestros en la materia— pretenden condenar y perseguir todo intento de oposición clara y categórica. Pero ese juego no lo sigue ya la ciudadanía. Esta parece cansada de masticar en silencio la indignación que le producen los estragos que causa al país una minoría extremista que es menor aún que la votación del Presidente Allende en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970.

LA REPLICA OFICIAL

La Unidad Popular hizo esfuerzos por disminuir la significación de la marcha democrática, pero los ecos de ésta quedaron sonando en el país y en el exterior. La respuesta elegida para contrapesar esos ecos consiste en una marcha marxista, cuidadosamente organizada por el Partido Comunista. Esa marcha tendrá carácter oficial. Es el apoyo al Gobierno por parte de los funcionarios públicos adictos, de los trabajadores de las empresas estatales e intervenidas, de los sindicatos y poblaciones sometidas a la vigilancia de los comunistas y socialistas, de los campesinos que controlan los

funcionarios de CORA o que agita el Mir y otros grupos que forman la gran reserva para manifestaciones marxistas en Chile y en cualquier otro país socialista.

El orador único de la marcha oficial será, según lo anunciado, el propio Presidente de la República, lo que confirma el sello gobiernista y oficial del acto que se proyecta.

Pero tal vez la marcha oficial no sea más que el prólogo y la justificación de nuevas medidas extremistas por parte del Gobierno.

El importante discurso del presidente del PIR, senador Luis Bossay, pronunciado en el torrente noticioso de estos días y por tanto no advertido tal vez como merece, lleva a la sombría conclusión de que la ruptura del Presidente Allende con la Izquierda Radical deja al Jefe del Estado y por tanto a la República misma en manos de la minoría extremista que quiere hacer de este país una segunda Cuba, vale decir un segundo fracaso social resonante en América latina.

El retiro del PIR y la imposición de los vetos "duros" a la reforma constitucional de las tres áreas preparan el conflicto que los hombres del PIR precisamente querían evitar.

La llamada "estrategia Vuskovic" recibe de este modo todo el respaldo. Los antecedentes que "El Mercurio" dio sobre ella resultaron inobjetables, al punto de que el secretario del MAPU ha tenido sólo que lamentar que los diéramos incompletos. El resto de los papeles tiene muy escaso interés para los lectores, pues se trata de descripciones de empresas que no añaden nada a lo que el público ya conoce, esto es el empleo de los conflictos labo-

rales y de la asfixia económica para forzar a los empresarios a entregarse al Gobierno. Esos hechos no han sido rectificadas ni podrían serlo. Por lo demás, se conocen por la opinión pública en la práctica y los papeles de los funcionarios mapucistas no vienen más que a confirmar el carácter deliberado de lo que podría parecer una aberración aislada y ocasional.

Pues bien, mientras el Ejecutivo y el Congreso polemizan, mientras los partidos políticos imaginan alguna línea de conducta que atenúe las graves amenazas que se ciernen sobre el país, los funcionarios mapucistas, comunistas y socialistas trabajan en una zona bien delimitada; ellos persiguen apoderarse de las 91 empresas en el plazo más breve posible y por todos los medios a su alcance. Una vez quebrado el frente industrial, piensan que los medios informativos independientes que se costean en todo o parte con la publicidad deben también caer vencidos. Sin grandes actividades económicas independientes y con medios de publicidad controlados por los marxistas en forma exclusiva, el plebiscito que ahora pide la oposición sería una completa farsa. La opinión pública no podría ser informada de los términos de la consulta popular y el manejo de los escrutinios quedaría en las manos del señor Subsecretario del Interior.

La respuesta del oficialismo a la marcha democrática puede ser entonces mucho más de fondo que una competencia deportiva entre desfilantes o que una polémica entre oradores altamente colocados. La multitud que se movilizó espontánea-

mente para expresar su fe en la libertad y en la democracia habrá de mantener esa fe muy en alto cuando vaya a realizarse la rápida embestida contra las 91 empresas. En muy poco tiempo más todo el campo chileno habrá sido reformado, la minería ya está por entero bajo la batuta de funcionarios de la Unidad Popular, las industrias de alguna importancia se encuentran en la mira

del extremismo o ya han caído, las estaciones de radio corren grave peligro, los diarios penden de la cuerda que significa la proyectada estatización de Papeles y Cartones. En fin, la opinión democrática debe saber que la minoría gobernante dispone de poder para sofocar a la mayoría y que ello exige vigilancia y solidaridad profunda en el sector democrático.

El grave desquiciamiento

(21 de mayo de 1972)

El artículo analiza algunos graves hechos ocurridos en los últimos días, comenzando por la muerte del estudiante mirista Hernán Caamaño en Concepción, a raíz de enfrentamientos con la policía (EM, 16 mayo, pág. 1). El Intendente de Concepción se niega a entregar a un detenido que es requerido por un juez (EM, 18 mayo, pág. 1). Se producen tomas de terrenos en los alrededores de Santiago (EM, 18 mayo, pág. 21). Los tribunales procesan al Director de Industria y Comercio (DIRINCO) por desacato a la Corte Suprema (EM, 19 mayo, pág. 1) y éste es suspendido de sus funciones por la Contraloría (EM, 20 mayo, pág. 30).

La Semana Política

EL GRAVE DESQUICIAMIENTO

Al cumplirse otro aniversario de las glorias de Iquique resulta casi imposible imaginar la altura de las ambiciones patrióticas y de los desprendimientos cívicos de 1879, si miramos a nuestra triste realidad de hoy.

Esta fecha patria sorprende al país respirando un ambiente de mediocridad moral, de tumultos y de salteos, atmósfera que pone en peligro todos los valores de la convivencia nacional. Como sobre éstos se fundan la independencia y la soberanía nacional, podría darse la cruel paradoja de que la llamada segunda independencia de Chile se tomara en un colonialismo y en una servidumbre sin precedentes en nuestra historia. Y ello, porque un país soberano es inconcebible sin una moral básica en la esfera política y civil.

En vano el Secretario General del Partido Comunista, senador Luis Corvalán Lepe, denuncia la "esca-

lada de enfrentamientos suicidas" que, a su juicio, se evidenció en el choque de los miristas con la fuerza pública en Concepción, de resultados del cual falleció el militante de Espartaco, Eladio Caamaño.

El Partido Comunista ha predicado durante cincuenta años la guerra social entre los chilenos. No puede extrañarse entonces de que ahora los jóvenes utopistas saquen las consecuencias lógicas de la utopía marxista-leninista. La búsqueda del enfrentamiento está en la raíz de la doctrina que proclama la lucha inevitable entre las clases y la victoria final de un proletariado combatiente. La posición de la ultraizquierda consiste sencillamente en tomar en serio aquellas ideas y pugnar con impaciencia por su aplicación inmediata.

¿Qué ofrece el Partido Comunista a esos jóvenes? Nada. Lo único que les dice es que tengan paciencia y que admitan que esa agresividad revolucionaria debe emplearse no cuando quiera el MIR, sino cuando

lo decida el Comité Central del Partido Comunista.

¿Puede evitarse la violencia extremista invocando sólo razones tácticas, es decir, aceptando que el único aspecto negativo de los asaltos de la ultraizquierda es su inoportunidad? Evidentemente que no, pues tal actitud oportunista en el hecho da validez a los juicios teóricos del MIR y confirma el sentimiento de la ultraizquierda de que las desavenencias tácticas corresponden a grados diversos de coraje revolucionario.

¿Qué autoridad tienen los impulsores de OLAS, los defensores de la subversión armada continental y los admiradores sin reservas del régimen de Fidel Castro para contener ahora a los estudiantes, campesinos y pobladores que han tomado las mismas banderas revolucionarias de quienes en estos momentos los censuran?

La disolución de los valores morales en que se funda la convivencia de los chilenos está provocada por todo un esquema de sectarismo y de guerra interna que alienta, quíeralo o no, los peores desmanes y las degradaciones más lamentables.

Los marxistas chilenos parecen ignorar que la única verdadera receta que muestran como factor de desarrollo los países comunistas que exhiben buenas cifras de crecimiento consiste en el trabajo intensivo y metódico. En esos casos el socialismo ha sido una fórmula para organizar y movilizar el trabajo a costa de ilimitadas postergaciones del bienestar de las masas.

Nuestro marxismo, que aplaude los trabajos voluntarios, pero que no es capaz de alentar los trabajos

contratados y obligatorios, es el responsable de este angostamiento de las posibilidades nacionales, de este escenario de riñas y juergas en que se está convirtiendo el país.

Una ideología que divide y opone a unos chilenos contra otros resulta incapaz de generar un gran esfuerzo colectivo y de implantar una moral nacional dignificadora. De ahí que, en vez de superar antiguas limitaciones y estrecheces, a medida que corre el tiempo vamos cayendo en los mismos vicios tradicionales agravados en términos que jamás pudieron imaginarse antes. La flojera, la desorganización, la irresponsabilidad y el desorden mental están haciendo presa del país, aunque se recubran con una capa de retórica revolucionaria que sólo oculta la asombrosa mediocridad del sistema y de sus dirigentes.

El clima de tumultos y salteos se ve también alentado por las continuas y flagrantes violaciones de la ley que se cometen en altos niveles de la Administración. Se denuncian tráfico ilegal y contrabandos de armas, hurtos de material de guerra, actividades administrativas ilícitas, adquisiciones discriminatorias de valores bursátiles con fondos del Estado, denegación de auxilio a los particulares, atropellos a las personas y a los bienes y otros delitos, sin que se advierta en el régimen una reacción ejemplarizadora que ponga atajo a los graves desórdenes.

Lejos de que se provoque esa reacción ejemplarizadora vemos que altos funcionarios no prestan acatamiento a las resoluciones judiciales y prescinden del valor estrictamente obligatorio que las mismas tienen para los encargados de cumplirlas.

Tanto los Tribunales de Justicia como la Contraloría General de la República encuentran graves obstáculos para cumplir su misión, pues con frecuencia alarmante los funcionarios de todas las jerarquías muestran desprecio por la autoridad del Poder Judicial y del organismo contralor.

Ni los genuinos servidores públicos pueden sentirse alentados a permanecer en el marco legal ni los particulares han de verse contenidos en sus desbordes si el ambiente general es de prescindencia del valor real de la ley y si la solidaridad, el patriotismo, la decencia y el trabajo han perdido eficacia frente a las rencillas, asaltos y apropiaciones de lo ajeno.

El grave desquiciamiento a que asistimos es sobre todo moral. Mientras este fatal proceso continúe serán inútiles las protestas de independencia y de soberanía, pues las posibilidades de estos atributos de la nacionalidad se deterioran en la misma medida en que se envilece la convivencia cívica. Por este camino muchos pueblos han llegado a ser botín de otros más integrados y fuertes.

LABOR DEL CONGRESO NACIONAL

La enorme magnitud de los trabajos legislativos, consistentes en el despacho de una masa de asuntos de importancia desigual, puede ser uno de los factores para que la labor fiscalizadora que la Constitución encomienda a la Cámara adolezca de ciertas dificultades.

Sólo así se explica que las gravísimas denuncias de todo género que llegan al conocimiento público no

se traduzcan en acuerdos parlamentarios encaminados a sancionar aquellas irregularidades. A pesar del esfuerzo de algunos miembros del Parlamento, se diría que los equipos parlamentarios de los partidos democráticos están quedando superados por la velocidad del proceso de deterioro de nuestra convivencia democrática.

No pocos políticos piensan que el desprestigio que acarrea al Gobierno la demolición moral y económica que llevan a cabo sus técnicos y partidos debiera traducirse en las elecciones parlamentarias de 1973 en un aumento del caudal de votos para las fuerzas opositoras. Tal vez esta consideración induzca a muchos a adoptar una actitud de espera de los acontecimientos con la idea de que el propio peso de éstos se tomará en favor de los sectores democráticos sin mayor sacrificio para los últimos.

Sin embargo, frente a los reiterados desacatos de que viene siendo víctima el Poder Judicial y ante los desobedecimientos de las instrucciones de la Contraloría, cabe una acción fiscalizadora de la Cámara. Con mucho mayor motivo, corresponde ella frente a la creciente proliferación de la violencia en los sectores rurales y al desarrollo del extremismo de ultraizquierda, cuyas acciones van amenazando poco a poco la vida normal del país.

Una gestión de los diputados democratacristianos frente al Comandante en Jefe del Ejército, general don Carlos Prats, tuvo por objeto imponer oficialmente a dicha alta autoridad de las preocupaciones de esos parlamentarios por el clima de violencias, amenazas, internaciones

ilegales de armas y otros atropellos a la seguridad y tranquilidad públicas que se están cometiendo. El general Prats se limitó a dar a la reunión su verdadero carácter, escuchando sin comentarios la exposición de los diputados.

Entretanto ha perdido actualidad pero no gravedad la internación ilegal de bultos de un avión cubano, y vuelve a ponerse en el tapete la investigación de los sucesos de Curimón. Son estas actuaciones parlamentarias en que se desarrolla una labor fiscalizadora prevista por la Constitución las que más pueden contribuir a frenar la avalancha de ilegalidades.

Entre las ilegalidades más graves figura la constitución de una vastísima área de propiedad estatal sin que la ley autorice las expropiaciones o nacionalizaciones respectivas.

Este punto tiene la mayor trascendencia política, económica y social. Si persevera el vacío jurídico en que nos encontramos habrá que reconocer que el modelo democrático y legalista de la revolución chilena es sólo de palabra, puesto que la obra socializadora más importantes del régimen, aparte de la nacionalización de las grandes compañías cupreras, como es la transferencia de empresas al área social, se habría realizado al margen de la ley y de la democracia, a espaldas del Parlamento y a iniciativa de un equipo de tecnócratas.

Un largo debate político y parlamentario ha tenido lugar a propósito de la reforma constitucional de las tres áreas, aprobadas por el Congreso, con el fin de regular jurídicamente esta reestructuración de la

propiedad sobre los bienes productivos.

Ese debate llegó hasta una dramática formulación de observaciones presidenciales a la reforma que aprobó el Congreso Pleno, pues esos vetos coincidieron con la salida del PIR del Gobierno, con la violenta reacción del Presidente Allende por ese retiro y con el momento en que el régimen comenzó a extremar sus medidas perdiendo su adhesión al espíritu y aun a la letra de la ley.

Están pendientes del pronunciamiento del Senado las observaciones presidenciales a una reforma constitucional decisiva para el país. Urge que se acelere una definición en esta materia y que el Parlamento no siga permitiendo que el Ejecutivo instaure de hecho un sistema por completo opuesto a la reforma aprobada por la mayoría, valiéndose de la tardanza de las ramas legislativas en resolver el asunto.

Siempre es posible que el recargo de trabajo del Senado y de la Cámara dilate la atención de asuntos que el Gobierno no sólo no activa sino que naturalmente carece de todo interés en activar. De ahí es que los partidos políticos y sus comités en el Congreso serán los encargados de impedir que las dilaciones favorezcan la destrucción irrecuperable de grandes sectores de la economía.

Acuerdos muy anteriores del Partido Demócrata Cristiano y, por cierto, la voluntad de los propios interesados, determinaron la renuncia de los senadores don Patricio Aylwin y don Ricardo Ferrando a la Presidencia y Vicepresidencia del Senado, respectivamente. Aunque el

relevo por otra directiva democratacristiana en la Corporación no tiene significado político, la ciudadanía lamentará el alejamiento del Presidente Aylwin, quien supo de-

fender con decisión, desde su alto cargo, las libertades públicas y la dignidad del Parlamento, esperando que sus sucesores prosigan en la misma indispensable conducta.

Funcionamiento del sistema institucional

(9 de julio de 1972)

Por 80 votos a favor, y con el retiro de los diputados de la Unidad Popular, la Cámara de Diputados suspende de sus funciones al Ministro del Interior Hernán del Canto (EM, 6 julio, pág. 1).

Durante 15 días la directiva de la Democracia Cristiana conversa con el Gobierno acerca del problema de los vetos a la reforma constitucional sobre las 3 áreas de la economía. Las conversaciones fracasan, según la Democracia Cristiana, por la intransigencia del Gobierno en materia de estatización de bancos y de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, a pesar de que se habían logrado algunos puntos de acuerdo (EM, 1 julio, pág. 1).

A raíz del rechazo por parte de los senadores de oposición a los vetos del Ejecutivo al proyecto de delimitación de las 3 áreas económicas, el Gobierno emitió una declaración en que acusa a la oposición de trasgredir la Constitución, indicando que no se llamará a plebiscito y que se promulgará el texto propuesto por el Ejecutivo (EM, 7 julio, pág. 1).

La Semana Política

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

El Ministro del Interior, don Hernán del Canto, quedó suspendido de sus funciones a raíz de que la Cámara de Diputados dio lugar a la acusación constitucional en su contra.

La lluvia, la nieve y el frío apagaron los ecos callejeros de este acontecimiento, lo que demuestra no sólo que es difícil mover a los partidarios de un Gobierno en el segundo año de su período, sino también que la ciudadanía tiende a acatar las decisiones que los poderes públicos adoptan en la esfera de su competencia.

Una protesta contra la decisión de la Cámara podrá tener sentido

como gesto de simpatía partidaria, pero el grueso de la opinión pública seguirá a la expectativa de este proceso político y seguramente se conformará con sus resultados.

Lo que decimos ilustra sobre la atmósfera general reinante en el país en lo que atañe a sus rumbos políticos. Se diría que una inmensa mayoría no participa del tremendismo de ciertos círculos y que espera la solución a las dificultades actuales del desenvolvimiento de los mecanismos democráticos.

La directiva democratacristiana creyó del caso entrar en conversaciones con el Gobierno a propósito de los vetos a la reforma constitucional de las tres áreas, movida por la buena intención de evitar enfrentamientos cívicos que pudieran ser

lamentables. El desarrollo posterior de los acontecimientos hizo fracasar los posibles acuerdos y los senadores demócratacristianos acaban de rechazar, junto con el resto de la oposición, la gran mayoría de las observaciones presidenciales a la reforma.

La Unidad Popular se esmera en subrayar la gravedad del eventual conflicto y supone las más condenables intenciones a los demócratacristianos, nacionales, radicales de izquierda y demócrata radicales.

Sin embargo, los sucesos políticos transcurren en el plano legal. Los bloques de Gobierno y de oposición se han constituido en una federación y en una confederación, respectivamente. Los trabajos electorales en Coquimbo continúan con regularidad. Los partidos se preparan ya para afrontar en los términos más ventajosos las elecciones parlamentarias generales del año próximo. En fin, la democracia chilena ha mostrado ser más durable que sus enemigos y la inclinación a resolver los conflictos por las vías constitucionales es más fuerte que la violencia de las confrontaciones ideológicas y políticas.

La vocación jurídica del país puede también hacerse presente en el desenlace de las dificultades que acarree la reforma constitucional de las tres áreas.

Dentro del propósito de magnificación del eventual conflicto, el Gobierno ha declarado que, con la postura de la oposición en cuanto a los vetos "se busca un desplazamiento del centro del poder político del Estado desde el Presidente de la República al Congreso Nacional, por efecto de la tesis de que en la trami-

tación de la reforma constitucional la simple mayoría en ejercicio del Congreso puede imponer su criterio sobre el del Primer Mandatario". Agrega la declaración un segundo cargo al decir también que "se busca cerrar el camino a la legalidad del proceso revolucionario de la Unidad Popular derogando facultades actuales e impidiendo el establecimiento de una nueva legalidad más adecuada a la dinámica del proceso político chileno".

Y, descendiendo a escudriñar intenciones, el documento oficial expresa que "lo anterior es la resultante de la desembozada defensa de los intereses y privilegios de los monopolios y de la derecha".

No parece verdadera la aseveración de que la tesis de la oposición convierte al Congreso en centro del poder político, arrebatándoselo al Presidente. Lo que ocurre es que, como el Ejecutivo puede acudir al plebiscito, no juega aquí el mecanismo de la insistencia y no le basta al Presidente un tercio del Congreso para imponerle su voluntad sin más trámite. Rechazadas las observaciones presidenciales por el Congreso, debe el plebiscito resolver el difereando. La tesis de la oposición hace entonces del pueblo el centro del poder político y coincide, al menos formalmente, con lo que proclama el Gobierno llamado popular o del pueblo.

No queda claro el porqué se cerraría el camino de la legalidad por el hecho de que el Congreso, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, apruebe normas nuevas, derogue las que existían o modifique en parte el alcance de las mismas. La legalidad a que se refiere la

Unidad Popular parece ser tan sólo la que a ella le conviene, o sea la congelación de los poderes actuales del Ejecutivo y la aprobación de la "nueva legalidad" necesaria para que rija su esquema de socialismo. Pero nuestro sistema jurídico es más amplio que ese concepto partidista y no se cierra, sino que se abre en el debate parlamentario y en el juego normal de la función legislativa y constituyente. La legalidad no puede ser un traje de medida para la Unidad Popular, sino un conjunto de normas reguladoras de la conducta ciudadana entera y que incluya por cierto la regulación de las iniciativas y proyectos del equipo gobernante.

Tampoco resulta fácil explicar por qué los democratacristianos, halagados hasta la saciedad por el oficialismo mientras estaban en conversaciones con el Gobierno, pasan ahora a identificarse con la desembozada defensa de los intereses y privilegios de los monopolios y de la derecha. Tal vez la única explicación de eso es que los marxistas pasan sin solución de continuidad de la alabanza a la diatriba, según que la actitud que juzgan sea favorable o contraria a sus propios intereses y privilegios.

Ni desplazamientos trascendentales del poder político ni cierre del camino de la legalidad ni defensa desembozada de privilegios se encuentran entre las características reales de la tramitación del proyecto constitucional de las tres áreas.

Como el propio Gobierno lo afirma al término de su exposición oficial, "resta esperar que el normal funcionamiento del sistema institucional resuelva el conflicto planteado". Este normal funcionamiento de

las instituciones ha hecho hasta ahora fracasar los intentos extremistas de ruptura de la legalidad, así como los augurios de irremediables enfrentamientos. El sistema institucional debe seguir funcionando y en él se halla la salida a los conflictos o divergencias.

La definición clara y consecuente de las líneas de Gobierno y de la oposición, expresada con todos los recursos legales de que cada sector dispone, no debe llevar a ninguna guerra sino, cuando más, a momentos difíciles que la patriótica serenidad y la conducción responsable de los partidos habrán de sortear con buen éxito.

LA FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El encauzamiento de las diferencias ciudadanas en el sistema institucional trae aparejada necesariamente la debida valorización de los partidos políticos.

Esas colectividades han pasado por etapas de prestigio y de descrédito, de acuerdo a la aptitud de sus dirigentes para interpretar los grandes anhelos de la opinión pública. En las circunstancias actuales, el anhelo mayoritario es que los partidos democráticos unan sus fuerzas a fin de impedir el derrumbe nacional que provoca el empeño por imponer la receta marxista-leninista. La miñona oficial también anhela realizar un supremo esfuerzo por traducir en hechos la consigna de la Unidad Popular.

La formación del Partido Federado de la Unidad Popular y de la Confederación Democrática reflejan con fidelidad el deseo público de

que se definan las respectivas posiciones en sus términos más claros y esenciales, dándose la lucha para que el país opte entre el marxismo y la democracia a través de los procesos electorales correspondientes.

Frente a esta realidad, los partidos tienen un rol de la más alta significación y han mostrado que son capaces de abordarla responsablemente. Es natural entonces que en los enfrentamientos electorales tengan la iniciativa y concentren las adhesiones.

La jornada que está librándose en Coquimbo es una de las que protagonizan esencialmente los partidos políticos. Con los obstáculos propios de una lucha en que la oposición lleva la desventaja de las cifras electorales anteriores, todo parece indicar que el deterioro político del Gobierno y el rebrote del radicalismo en una batalla contra la candidatura comunista deben traducir un resultado satisfactorio para la opinión democrática, a pesar de la intervención oficialista.

En el instante en que se refuerzan los partidos conviene destacar la importante labor de los gremios y de la demás organizaciones sociales de base, tales como sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, cooperativas, colegios profesionales y otras entidades representativas de la comunidad.

Los mencionados organismos no sólo cumplen funciones valiosas al servicio de los fines que agrupan a sus respectivos miembros y asociados, sino que han tenido y tienen un papel muy especial en el afianzamiento de nuestra democracia. En efecto, los vastos sectores gremialistas que actúan en las más diver-

sas actividades han dado batallas decisivas, juntos muchas veces a los partidos democráticos, para defender sus fuente de trabajo, la subsistencia de una empresa, la independencia y dignidad de una profesión o la autonomía de una tarea cultural. En dicha defensa han resistido inevitablemente el avance del marxismo, presentando a menudo un tipo de lucha que los partidos difícilmente podrían realizar en ese campo específico.

Forzoso es reconocer que sin la acción de campesinos, operarios industriales, empleados, profesionales y otros elementos gremialistas, el reencuentro de los partidos políticos con la opinión pública habría tardado más o presentado inconvenientes serios. Los gremios y las otras entidades de base sufrieron desde el primer momento la embestida marxista y han sabido enfrentarla con admirable decisión. Una vez realizada esa tarea, muchos sectores estaban preparados —dentro y fuera de los partidos— para luchar por la unidad de las fuerzas políticas democráticas y para establecer una solidaridad que trascendiera los viejos deslindes partidistas.

Pero la labor de los gremios es forzosamente limitada al nivel en que su acción transcurre. Ellos representan en forma genuina la comunidad nacional en cuanto es una sociedad y se compone a su vez de numerosas sociedades humanas. Ahora bien, la vasta red de agrupaciones y relaciones que esa comunidad comporta permite la eficaz defensa social contra las intromisiones despóticas de los gobiernos o contra incursiones e influencias foráneas, pero no puede llenar las tareas de

los poderes constitucionales. En un régimen de libertad, de opinión pública y de elecciones, los partidos políticos democráticos son irremplazables. Y ni los gremios o gremialistas han de transformarse en partidos ni estos últimos tratar de dominar, atacar o influir a los gremios.

La unidad democrática exige no sólo la asociación amplia de partidos, sino la comprensión del papel

que respectivamente desempeñan las colectividades políticas y las demás respetables entidades que forman la realidad social chilena. La legalización de los dos bloques de partidos y los diversos signos de que la política sigue desenvolviéndose en el cauce constitucional representan un llamado a fortificar cada vez más la acción solidaria entre militantes de partidos y ciudadanos independientes.

La doctrina del Ejército

(24 de septiembre de 1972)

El artículo comenta la petición de retiro del general Alfredo Canales Márquez, solicitada por el Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González.

El general Canales se desempeñaba como Director de Instrucción del Ejército, y se dijo que se le solicitaba la renuncia "por convenir al interés institucional" (EM, 22 septiembre, pág. 1).

El general Canales señala que la petición se debe a una conversación sostenida con el contralmirante Horacio Justiniano en la que manifestó su inquietud por la situación del país (EM, 23 septiembre, pág. 1).

La Semana Política

LA DOCTRINA DEL EJERCITO

Un escueto comunicado del Ejército informó oficialmente que el Comandante en Jefe, general don Carlos Prat González, pidió al Gobierno el retiro del general de brigada don Alfredo Canales Márquez, "por convenir al interés institucional".

La medida tuvo inevitable trascendencia política tanto porque se la vinculaba a las especulaciones en torno a un Plan Septiembre, denunciado por el Gobierno, como porque esta decisión no está dentro del mecanismo eliminatorio normal de los institutos armados. Además, el separar a un general diciendo que ello conviene al "interés institucional" implica dejar al afectado en una situación pública controvertible.

El general Canales, por su parte, sintiéndose autorizado para explicar a sus conciudadanos y a sus compañeros de armas las causas de su separación del Ejército, y obrando en defensa de su honor militar, formuló declaraciones públicas severas.

Explicó el general que se había pedido su retiro teniendo sólo a la vista una relación escrita del señor almirante don Horacio Justiniano, que le fue remitida al general Prats por el Comandante en Jefe de la Armada, almirante don Raúl Montero Cornejo, relación que daba cuenta de una conversación sostenida por el general Canales con el almirante Justiniano en que el primero había manifestado opiniones políticas. El general rechazó en forma terminante los cargos y el procedimiento que se emplearon para su retiro.

Cualquiera que sea el juicio definitivo que el país se forme de esta incidencia militar, debe lamentarse desde luego que ella se hubiera prestado de algún modo para hacer surgir resquemores o sospechas entre dos ramas de la Defensa Nacional.

A no dudarlo, hay en los partidos marxistas que gobiernan la intención próxima o remota de cambiar al Ejército profesional y a las demás instituciones armadas de la República por otra que esté en consonancia con los principios de la revolu-

ción marxista-leninista y que históricamente ha sido uno de los pasos fundamentales para consolidar todos los regímenes comunistas del mundo. No puede pretender Chile ser una excepción en esta materia, si, como dicen los comunistas, el proceso chileno está sometido como los demás a las leyes generales del socialismo.

Nuestras Fuerzas Armadas tienen pues enemigos muy poderosos, y cualquier tentativa de desunirlas o de abrir paso a incomprensiones entre ellas favorece a tales enemigos.

La introducción de posibles malas interpretaciones en los mandos medios de alguna rama castrense respecto de otras, o el empleo de medidas para alejar progresivamente de las filas a los jefes y oficiales que se mantienen en la verdadera doctrina de nuestra Defensa Nacional serían recursos extraordinariamente perjudiciales para los institutos armados y para la propia seguridad del país.

Corresponde, sin duda, a la superioridad del Ejército calificar las elevadas razones que le han dado motivo para provocar el retiro del general Canales, pero la opinión pública está cierta de que tal determinación obedece a la llamada doctrina del Ejército, expuesta públicamente ante la ciudadanía, en su tiempo, por el general Schneider y, con ocasión de las Fiestas Patrias, en forma reiterada por el general Prats.

No debe llamar la atención que este tema profesional castrense adquiera jerarquía política. Ello se debe a que la revolución que desenvuelve el Gobierno del Presidente Allende toca puntos esenciales para

la vida de la República y, en estos instantes, parece estar poniendo en juego nada menos que el criterio constitucionalista que ha de imperar en nuestros hombres de armas.

Un problema de esta especie rebasa el marco de las instituciones a las cuales afecta.

El principio constitucional que rige la conducta de las Fuerzas Armadas es que ellas son esencialmente obedientes y que no pueden deliberar. Esto significa que deben cumplir con fidelidad las instrucciones de sus superiores jerárquicos en la esfera en que éstos son competentes y que no pueden intervenir en el juego de la política contingente.

Mientras las acciones de un Gobierno han quedado libres de todo reproche de inconstitucionalidad, la obediencia y la prescindencia profesional de la política no presentan problemas ni en la teoría ni en la práctica para los institutos armados. Las dificultades nacen cuando hay riesgos de que la Constitución quede sobrepasada, ya sea por acciones individuales del gobernante, ya sea por la virulencia de un proceso revolucionario que tiende precisamente a destruir el orden actual.

Rige en este segundo caso la doctrina constitucionalista de obediencia y no deliberación del Ejército y con mayor vigor que nunca, a condición de que no se confunda la verdadera doctrina del Ejército con la falta de personalidad en el mando y con la sumisión indiscriminada a las posibles arbitrariedades que provengan del Gobierno.

La doctrina del Ejército exige lealtad a la Constitución y al país, más que a hombres, a regímenes o a gobiernos. Estos últimos pasan, en

tanto que las instituciones armadas están al servicio de valores permanentes. Por hondos que sean los cambios en la sociedad y en las propias instituciones castrenses, conforme a las exigencias de los tiempos, regirá siempre la defensa de la patria, concebida como una totalidad, instalada sobre un territorio, constituida en nación y dueña de un destino que cumplir en el concierto de los pueblos.

Según esto, no corresponde a un concepto constitucional y profesional del Ejército aquella política que emplee los llamados resquicios legales o los ardises reglamentarios para transformar a la institución en otra cosa que lo que ella es y debe ser en concepto de la Constitución Política del Estado y de las demás leyes y principios fundamentales de la República.

Así como no puede ser válida una interpretación de la norma constitucional que destruya a la Constitución misma, tampoco puede ser válida una interpretación de la doctrina del Ejército que haga posible la destrucción de éste.

Los principios constitucionales que gobiernan la conducta leal del Ejército parten del supuesto evidente de que tales principios exigen la existencia misma del Ejército, de modo tal que jamás podrán interpretarse en forma que contraríen a la misión específica, a la naturaleza jerárquica y disciplinada o a la unidad fundamental de la institución.

Y lo que decimos del Ejército parece aplicable a la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, así como a las tres ramas de la Defensa Nacional consideradas como un dispo-

sitivo de seguridad integrado y verdaderamente funcional.

Forzoso es llegar entonces a la conclusión de que cualquier medida conducente a transformar en órganos políticos a las instituciones que la Carta Fundamental describe como "esencialmente profesionales" o que, aspirando a una supuesta democratización, desnaturalice su carácter de "jerarquizadas", de "disciplinadas" y de "obedientes" es contraria a la auténtica doctrina Schneider que tanto ha proclamado el actual Gobierno.

No basta entonces que las Fuerzas Armadas se limiten a no deliberar, esto es, a no intervenir en política contingente, sino que es preciso que su espíritu de lealtad a la Constitución no sea utilizado para que se mantengan inertes mientras se violan los demás principios de la Carta Fundamental relativos a la naturaleza de tales fuerzas, a su misión y a su eficacia defensiva.

PAPEL ACTUAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Durante muchos años estas columnas insisten en la necesidad de que las Fuerzas Armadas, así como otros institutos y servicios que satisfacen necesidades permanentes y esenciales del Estado, tuvieran el trato que corresponde a su alta jerarquía. En concreto, la seguridad nacional, la administración de justicia y el magisterio parecen dignos de especial trato para el buen desempeño de las respectivas funciones y para que puedan constituirse en expectativas atrayentes para la juventud.

Por desgracia, el interés de los Gobiernos por sus propios progra-

mas económicos o sociales postergó muchas veces las aspiraciones legítimas de los servicios e institutos básicos del Estado.

En lo que concierne a las Fuerzas Armadas, justo es reconocer que este Gobierno adoptó una política de mayor atención hacia las más urgentes necesidades de aquellas instituciones.

Lo cierto es que este nuevo trato a las ramas castrenses del Estado ha permitido que los hombres de armas recuperen poco a poco la posición que antes tenían en la sociedad chilena, superando así un estado de relativa postergación que fue posible merced a que nunca se esclareció hasta dónde llegaba la obediencia constitucional de las Fuerzas Armadas y hasta dónde la paciencia para soportar con heroísmo riesgos graves de paulatino deterioro profesional por falta de medios indispensables.

La expectación suscitada por el retiro forzoso del general Canales no habría tenido lugar si los militares se mantuvieran en el antiguo plano relegado. Por el contrario, es la importancia adquirida por las Fuerzas Armadas lo que da singular relieve a la referida decisión del Comandante en Jefe del Ejército.

Mientras las Fuerzas Armadas se mantengan como "instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes", como lo establece la Constitución, su papel será cada vez más prestigioso y decisivo en la convivencia chilena.

No son los militares, los marinos y los aviadores quienes han ambicionado o impuesto ese nuevo papel. Son más bien los hechos la causa determinante de dicha situación.

Tanto el Gobierno como los opositores rodean a las Fuerzas Armadas de creciente consideración. Día a día se abren nuevas oportunidades para que los miembros de aquellas reciban más estrechos contactos con la organización productiva estratégica del país y logren un conocimiento más acabado de los problemas políticos, sociales y económicos que se relacionan directa o indirectamente con el gran tema de la seguridad nacional. Mientras las condiciones de nuestra economía no sigan el curso de una inflación galopante y de una crisis grave de divisas, que hoy caracterizan al país, las necesidades de equipo e instalaciones así como las rentas del personal pueden ser atendidas en forma correspondiente a la alta misión de las Fuerzas Armadas.

Este proceso de verdadera reivindicación del papel de las Fuerzas Armadas es saludable para el país y beneficioso profesionalmente para dichas instituciones. Si las ramas de la Defensa Nacional conservan su integridad, su naturaleza, su unidad y su función específicamente castrense e intactos los caracteres que la Constitución y las leyes les fijan, podrá llegar el caso en que sean ellas el único o acaso el único ejemplo de intachable constitucionalidad mientras un fermento corrosivo continúe debilitando las bases chilenas.

Triunfo gremial

(5 de noviembre de 1972)

El artículo comenta el paro de actividades a lo largo de todo el país efectuado por gremios de transportistas de carga y pasajeros, bancos, estudiantes y profesores, y diversos colegios profesionales tales como médicos, abogados, dentistas, ingenieros, etcétera.

Los partidos de oposición agrupados en la Confederación Democrática hicieron llegar al Gobierno el llamado "Pliego de Chile", con peticiones condensadas en 30 puntos, que se refieren al respeto a los derechos gremiales, libertad de información y expresión, corrección de arbitrariedad, término de la violencia y normalización de la situación política del país.

El 2 de noviembre el Presidente Salvador Allende procedió a designar un nuevo gabinete ministerial, con la participación del Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, como Ministro del Interior; del contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas; el general del aire Claudio Sepúlveda en Minería, y civiles en los restantes ministerios (EM, 3 noviembre, pág. 1).

La Semana Política

TRIUNFO GREMIAL

El segundo aniversario del régimen se cumplió el viernes. El país llegó a esa fecha extenuado por una política económica de falencia nacional y después de sufrir la prolongada paralización de las actividades de gremios y profesionales vitales.

Los orígenes del paro gremial fueron en sustancia los mismos que han dado base a la oposición en el plano político. Los camioneros pararon sobre todo frente a la amenaza de que se estatizara su actividad de transportistas. La resistencia

contra las estatizaciones múltiples e incontrolables, el cansancio con las promesas no cumplidas, el interés por mantener los canales de la libre expresión ciudadana, la defensa de la dignidad de las profesiones y de la labor productiva, la protesta contra el atropello y el deseo de encuadrar la acción gubernativa en la legalidad fueron los móviles gremiales que condujeron a la virtual paralización del país.

El Gobierno se encontró con una petición concentrada y conjunta en el llamado Pliego de Chile, que no ha sido más que el fruto de la tenaz negativa de la Unidad Popular a oír

las expresiones del sentimiento genuino de quienes trabajan y producen.

Se ha querido desprestigiar las peticiones de los gremios tildándolas de políticas. Tendrían tal carácter las que miran a obtener que el Ejecutivo haga uso de sus facultades constitucionales y legales en un sentido determinado.

Aparte de que todo el que pide algo a las autoridades coloca a éstas en situación de usar de sus prerrogativas en un sentido favorable o desfavorable al peticionario, es oportuno advertir que el país ha llegado a un nivel tal que la distinción entre lo político y lo gremial carece de verdadero sentido práctico. En efecto, la magnitud del poder del Gobierno sobre los particulares, el número de decisiones que está concentrado en la autoridad central, la necesidad de autorizaciones o de liberaciones para desenvolver cualquier actividad hacen que hoy día las aspiraciones económicas de los gremios se satisfagan tan sólo a través de decretos administrativos o de mandatos legales.

Precisamente lo nuevo del conflicto gremial que se desarrolló en estas últimas tres semanas es que las organizaciones gremiales se enfrentaron al Ejecutivo, pues sólo la autoridad suprema estaba en condiciones de dar satisfacción a las necesidades de esos trabajadores. Ahora bien, esa autoridad no podía negociar sólo concesiones materiales sino que, por la naturaleza de este régimen, iba a elevarse el con-

flicto al plano de la libertad de trabajo, de la libertad de expresión, del respeto a los profesionales y a otros aspectos que de ordinario no forman parte de un conflicto laboral.

La distinción entre lo político y lo gremial ha perdido significado por obra del propio régimen de la Unidad Popular, que ha politizado todas las actividades y que ha convertido al Gobierno en un gran patrón.

Tan evidente es que la distinción entre conflicto político y conflicto gremial ha perdido relieve, que este generalizado y gravísimo conflicto gremial de más de tres semanas empezó a encontrar vías de arreglo con una previa solución política, con un cambio de Gabinete y con la inclusión en él de Ministros que son a la vez jefes de las Fuerzas Armadas.

Sería inexacto decir que los gremios forzaron la solución ministerial lograda por el Presidente de la República. Más justo es considerar que la reacción dura de los gremios ha sido consecuencia de la nefasta política de tierra arrasada que pretendió desarrollar la Unidad Popular. Esa política es la que obligó literalmente a colegios profesionales, a organizaciones de productores y de comerciantes, a dueños de camiones, a empleados diversos, a campesinos, a gente de clase media modesta, a resistir con severidad las imposiciones de un gobierno cuyas ineptias quedaron demasiado a la vista. Son esas ineptias las que provocaron la crisis y condujeron al político realista que es el señor

Allende a la única fórmula que le permitía poner en marcha el país: el patriótico y desinteresado apoyo militar.

Por largos días los personeros de la Unidad Popular se entretuvieron pensando que el paro era puramente de empresarios y patrones, y negándose a aceptar que provincias enteras quedaran inmovilizadas por orden de los gremios. Sin embargo la suspensión de actividades de los médicos, ingenieros, camioneros, comerciantes detallistas, empleados bancarios, dentistas, farmacéuticos, tuvo un efecto tanto o más drástico que un paro tradicional de obreros. Es cierto que las fábricas no pararon, o porque estaban estatizadas y sus trabajadores no pudieron afrontar las represalias que han sufrido los empleados y profesionales, o porque sus dueños han temido que la adhesión al paro traiga en seguida la requisición y la intervención del gobierno, como sucedió en más de una empresa.

Con esfuerzo los militantes más disciplinados de la Unidad Popular lograron salvar las apariencias y evitaron que el público tuviera la verdadera impresión de las magnitudes del paro. Para este efecto sirvió al gobierno la cadena radial obligatoria. Fue un éxito de la Unidad Popular que se mantuvieran en Santiago más condiciones exteriores de normalidad que en provincias, sobre todo asegurando locomoción colectiva y otros servicios.

Pero el triunfo gremialista ha sido evidente al provocar este proce-

so de paralización que, en algunos instantes, parecía dividir al país en bandos irreconciliables pero que, gracias a la fórmula ministerial lograda, podría desembocar en un apaciguamiento o, al menos, en una tregua política que facilitara la realización normal de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973. Es lamentable que haya sido necesario este altísimo costo económico y social —que el país pagará por mucho tiempo— para conseguir una mayor comprensión del gobierno hacia los gremios y para que las autoridades procuren el consenso ciudadano en algunas metas esenciales de bien común.

LA PRESENCIA MILITAR

Aunque todos concuerdan en la composición heterogénea del Gabinete que preside el general de división don Carlos Prats González, en que participan personeros socialistas extremos, de tendencia casuista y comunistas, la ciudadanía recibió con innegable sensación de alivio la nueva fórmula ministerial.

La heterogeneidad del Ministerio se explica por cuanto hasta el jueves último imperaba el "cuoteo" en la distribución de cargos de la Unidad Popular, y el peso de las fuerzas políticas que acompañan al Presidente Allende le permite seguir participando en las responsabilidades de gobierno.

Lo importante es que los jefes militares no han llegado al gobierno

de la nación a cumplir un papel decorativo. Conscientes de la representación que invisten, los Ministros del Interior, de Obras Públicas y de Minería cumplen un deber patriótico "para restablecer la paz social y la concordia entre los chilenos", según lo expresó con toda claridad el nuevo Jefe del Gabinete, general don Carlos Prats González.

No será fácil la tarea pacificadora y ordenadora de estos Ministros, mientras ciertos "desconformados cerebrales" (como los llamaría el historiador Encina) sigan tratando de hacer prevalecer sus esquemas calcados de la discutible experiencia cubana.

En esa tarea los Ministros militares contarán sin duda con el capital de confianza que les otorga la gran masa de los chilenos que sólo desean tranquilidad, orden, posibilidades de trabajar sin ser hostilizados y término de los sectarismos, de las persecuciones y de las discriminaciones arbitrarias.

El límite de esa confianza estará en la capacidad de resistencia de la población a los desaciertos económicos del gobierno de la Unidad Popular, que han conducido a la escasez y a la inflación presentes.

Llama la atención que no hay en los Ministros del sector económico cambios proporcionados a los que ocurrieron en el sector político. Es de temer entonces que la inflación no logre ser detenida, que no cesen los extremismos perturbadores en lo que atañe a requisar y estatizar empresas y que insista en un abasteci-

miento artificial de la población a través de organismos estatales de distribución y de las JAP, desperdiciando la capacidad instalada y la competencia profesional del comercio establecido.

En todo caso, es evidente que el problema fundamental es de naturaleza política y se refiere al orden público, a las decisiones de gobierno interior, a la contención de los agitadores que revisten apariencias de altos funcionarios, a la prevención y eliminación de los grupos armados ilegales y al control de la tenencia de armas.

La primera tarea y la más urgente corresponde al Ministerio del Interior, desde donde se ha realizado hasta ahora en forma insensible gran parte del fomento de odios, divisiones y persecuciones entre los chilenos. No es de extrañar que los paros más solidarios y totales hayan tenido lugar en las provincias, particularmente en aquellas en que la tarea morbosa de los agitadores ha envenenado el alma de la población y provocado la resistencia de los que quieren liberarse de la pesadilla marxista.

El acento del actual Gabinete está puesto en los aspectos políticos, pero un técnico con altos estudios, como el contralmirante don Ismael Huerta, no dejará de apreciar la verdadera situación fiscal y económica desde el importante Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, el prestigioso general de brigada aérea don Claudio Sepúlveda, en el Ministerio a su cargo, no dejará de advertir el triste

estado en que se encuentra la minería, las pérdidas que arrojan las empresas que antes fueron florecientes y las dificultades de todo género con que tropieza nuestra principal industria de exportación.

De este modo, aunque los representantes de las Fuerzas Armadas no tendrán en sus manos las herramientas para rectificar a fondo la situación económica, pueden disponer de elementos de juicio a fin de impedir que nuevos y más graves desastros pongan en peligro la gestión pacificadora que ellos se han propuesto.

La conducta de las fuerzas de Gobierno y de las de oposición, así como el tino de los Ministros militares, permitirán que el país salga del atolladero en que se encontraba. A los sectores sinceramente democráticos de todas las tendencias les interesa concitar el más amplio apoyo al nuevo Gabinete a fin de que produzca realmente una tregua

social, sea posible una campaña electoral pacífica y con libre expresión de todas las tendencias, se repriman el terrorismo y el extremismo armado y se verifiquen elecciones parlamentarias limpias en marzo próximo.

Todo el país reconoce el patriotismo de que dan pruebas el general Prats y sus compañeros de armas, pues a nadie escapa la enorme responsabilidad que ellos asumen ante sus propias conciencias y ante la historia. El pueblo chileno pide que se le dé opción a expresar sin trabas ni adulteraciones su voluntad en las urnas y diseñar así su propio futuro. Si los soldados, con abnegación, se hacen fiadores de la vigencia de la norma democrática y devuelven a los civiles la normalidad institucional que estos últimos han estado a punto de perder para siempre, las Fuerzas Armadas habrán ganado la mejor batalla para el bien de la patria.

Política de paz (10 de diciembre de 1972)

Mientras el Presidente Salvador Allende se encuentra en gira por el extranjero asume como Vicepresidente el general Carlos Prats González, en su calidad de Ministro del Interior (EM, 10 diciembre, pág. 29).

Allende visita México, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Argelia, Unión Soviética, Cuba y Venezuela.

Durante su estada en la Unión Soviética declara que este país es el "hermano mayor" del nuestro (EM, 8 diciembre, pág. 1).

Avanzan los preparativos para las elecciones parlamentarias del 73 y personeros de Gobierno sostienen que para que la oposición se considere triunfadora debe obtener 2/3 del total de votos.

La Semana Política

POLÍTICA DE PAZ

El Presidente Allende realiza una gira con aspectos controvertibles, como lo demuestra el hecho de que haya calificado a la Unión Soviética de hermana mayor de nuestro país, estrecho vínculo de parentesco que viene a aparecer a los 162 años de nuestra vida independiente.

En el ejercicio de su cargo o fuera del país, S.E. revela una imposibilidad profunda de ponerse a la cabeza de todos los chilenos, de interpretar desde el mando supremo a quienes votaron por él y a quienes tenían otras preferencias, a los trabajadores de todos niveles, a los burgueses y a los proletarios, en suma, a todos los que se enorgullecen de la nacionalidad chilena.

Si en Chile proclamó que es Presidente de sólo un grupo de chilenos —no de todos ellos— en la Unión Soviética ha exhibido sin limitaciones su partidismo favorable al bloque de naciones comunistas y en especial a las que están

sometidas a los dictados del Kremlin. Después de haber clamado elocuentemente en las Naciones Unidas contra el imperialismo de los Estados Unidos ejercido a través de las empresas transnacionales, su visita a la Unión Soviética no la considera otro paso en dirección a un imperialismo sustitutivo sino una especie de vuelta al hogar fraterno.

Entre tanto, los representantes de las Fuerzas Armadas en el Gobierno, encabezados por el Vicepresidente general Prats, siguen trabajando por la paz cívica.

Los sectores que imaginaron que los Ministros militares iban a estar en una línea de oposición al Presidente Allende se han equivocado, del mismo modo que se equivocan los que suponen que las Fuerzas Armadas se conforman con el programa comunista de la Unidad Popular. Resulta difícil para un país tan politizado como el nuestro comprender la línea profesional de sus Fuerzas Armadas, que es política en el sentido de que la Seguridad

Nacional no puede prescindir de la gran política, de los requisitos de subsistencia de la nación y de su desarrollo, pero que, al mismo tiempo, no se asocia con las realizaciones contingentes de los bandos que se turnan en el poder. Ahora es precisamente la oportunidad en que el país observe en la práctica cuál es el credo de sus Fuerzas Armadas.

El medio político ha concentrado sus miradas en el Vicepresidente de la República, general de división don Carlos Prats González. La Unidad Popular espera de él algo así como un visto bueno para proseguir su programa colectivista, en tanto que la oposición cifra esperanzas de que este jefe militar contribuya a impedir la desarticulación nacional de que se sienten víctimas la mayor parte de los chilenos.

Ninguno de los dos bandos en que por desgracia se divide el país encontrará apoyo en las Fuerzas Armadas para sus fines particularistas. Los institutos armados destacaron a distinguidos oficiales en el Gobierno para cumplir una función superior de mantenimiento de la nación frente a las discordias civiles que amenazaban segregarla. Este papel de las Fuerzas Armadas, que es consecuencia de su rol esencial en la vida de la República, está a cargo de jefes seleccionados por su habilidad e idoneidad para el ejercicio de funciones políticas extremadamente delicadas. Hasta ahora, puede decirse que la preparación, la rectitud y destreza de los representantes de las Fuerzas Armadas en el Gobierno han asombrado a quienes tenían conceptos obsoletos acerca de esta reserva moral del país.

El Vicepresidente de la República, general Prats, ha observado una conducta circunspecta en el cumplimiento de su delicada labor. Como Jefe del Estado ha presidido una ceremonia de homenaje al Embajador y poeta Pablo Neruda, en que se destacó por el conocimiento de la obra literaria del segundo chileno distinguido con el Premio Nobel. Ha tenido además oportunidades de tomar contacto con dirigentes obreros, a los cuales ha estimulado por lo que su actitud significa de cumplimiento del deber, de dedicación al trabajo y de esfuerzo por la producción nacional.

Se ve que las Fuerzas Armadas afirman lo que la inmensa mayoría de los chilenos anhelan: que haya trabajo, disciplina y horizontes para la ambición nacional. En efecto, el propósito central de Chile consiste en hacer de este país un territorio siempre abierto a las iniciativas emprendedoras de chilenos y extranjeros, al tiempo que una nación segura de sus propias decisiones a causa de su sistema de seguridad y, sobre todo, por su desenvolvimiento económico.

Los gremios tienen motivos para estar descontentos con el Gabinete cívico-militar. Persecuciones a los empleados, interrupción de los pedidos a los camioneros, desviación de los suministros a los comerciantes y, en fin, tentativa de construir un aparato productor y distribuidor al margen de las vapuleadas clases medias, forman un conjunto de obstáculos a la labor pacificadora de las Fuerzas Armadas.

El gran problema de estos institutos es participar de un Gobierno que prescinde arbitrariamente de los

elementos dinámicos de la producción y de la distribución, lo que conduce al país al estancamiento en que se encuentra. Esto es lo que se espera que sea superado en los próximos días.

Deben registrarse como datos favorables la próxima reapertura de la Radio Agricultura de Los Angeles, el reajuste de los precios de la Papepera, la solución de los conflictos en las industrias de Arica y el reingreso de muchos profesionales funcionarios a sus puestos.

Estos logros están lejos de significar una tendencia hacia la verdadera paz social.

Un desarme mucho más profundo, en que participen elementos que impulsan la lucha interna del país, sería necesario para que la imprescindible paz nacional se instaurara.

HACIA LAS DECISIONES

Todo el empeño de las Fuerzas Armadas se encamina hacia la decisión nacional básica: las elecciones parlamentarias de marzo.

También los partidos y los gremios ven en las jornadas de marzo una definición fundamental. La Unidad Popular ha ostentado dentro y fuera del país la representación del pueblo. Se ha considerado la genuina voz de los trabajadores, de las grandes mayorías. En nombre de esta multitud, todavía no expresada electoralmente, el Gobierno de la Unidad Popular ha empleado subterfugios legales de emergencia para la solución de problemas permanentes.

Ha llegado el momento en que la Unidad Popular exprese en el Con-

greso Nacional su verdadero peso. Si los candidatos del Gobierno obtienen menos del 50 por ciento en esas elecciones, se ha producido un veredicto ciudadano al menos en el sentido de que el pueblo chileno no está de acuerdo con el uso de resquicios legales para soslayar el Parlamento.

Las elecciones parlamentarias de marzo son un plebiscito por cuanto la Unidad Popular, que llegó al Poder Ejecutivo con un tercio del apoyo electoral del país, tiene la oportunidad de conseguir ahora que ese tercio se transforme en una verdadera mayoría. Si el Gobierno no obtiene la mitad más uno de los sufragios populares no tiene ya derecho de hablar en nombre del pueblo, pues en estos comicios van a votar todos los chilenos mayores de 18 años, sepan o no leer y escribir. La decisión electoral será, pues, del país mismo, del pueblo todo.

Es cierto que los comunistas están habituados a gobernar con el apoyo de pequeñas minorías, tanto en las organizaciones sociales como en los países que dominan. Pero en el caso del Gobierno de la Unidad Popular los comunistas emplean el lenguaje de la democracia y por consiguiente necesitan una mayoría electoral clara para continuar adelante con su programa. El aprovechamiento de resquicios legales ha podido encontrar excusas en un Gobierno que afirmaba que el actual Congreso, elegido hace cuatro años, no era el genuino intérprete del nuevo estado de cosas en el país, pero si la presente mayoría parlamentaria opositora encuentra su confirmación en el veredicto popular, el Ejecuti-

vo debe aceptar con modestia que él representa un grupo partidario y no la voluntad del pueblo de Chile.

La íntima convicción de los personeros de la Unidad Popular es que no conseguirán limpiamente la mayoría de los sufragios populares para sus candidatos. Deben temerse, pues, las estratagemas tendientes a desfigurar el resultado electoral de marzo o, por último, a tergiversar su significado.

La oposición vigila por eso la regularidad del acto electoral y de la inscripción de la ciudadanía en los respectivos registros. Un factor de tranquilidad en esta materia es la constante preocupación de las Fuerzas Armadas por asegurar la limpieza de los comicios y por adoptar todas las medidas posibles a fin de que la voluntad del pueblo se exprese fiel y libremente en las elecciones de marzo.

Los partidos de la Confederación de la Democracia están siendo objeto de toda clase de intrigas con el objeto de dividirlos, ya sea antes de las elecciones, ya sea con posterioridad a la jornada de marzo. Para el menguado contingente de la Unidad Popular nada le resulta más funesto que la agrupación de los opositores en un solo bloque solidario, pues entonces aparece con nitidez la opción del sí o del no al marxismo, que constituye la sustancia de la consulta electoral de marzo. Por eso la prensa oficialista explotará con empeño el menor signo de divisionismo o de rivalidad entre los candidatos de la Confederación. La trascendencia de las próximas elecciones obliga a postergar y a superar cualquier malentendido interno con el objeto de impedir que el mar-

xismo lleve a Chile a la dictadura con el respaldo de un Parlamento, frustrando para siempre toda posibilidad de resistencia democrática y haciendo de Chile una nueva Cuba, pero esta vez con autorización parlamentaria.

Por difícil que sea la armonía dentro de la oposición, la desavenencia implica nada menos que sacrificar la democracia.

Y eso lo saben los comunistas. Por eso fomentan las discrepancias.

El último recurso de la Unidad Popular es la interpretación tergiversada de las elecciones. Sus voceros exigen a la oposición que llegue a una meta casi imposible en una lucha política. Afirman, en efecto, que si la oposición no logra los dos tercios del Congreso Nacional el Gobierno podrá seguir adelante con su programa. Dicha tesis es una falacia, por cuanto moralmente ningún Gobierno puede pretender transformaciones jurídicas y sociales que se resumen en la virtual socialización del país, sin que la voluntad popular le dé su apoyo categórico. Es cierto que la Unidad Popular puede materialmente seguir con sus resquicios legales, pero si así operara estaría llevando al país a la dictadura, imponiendo a la fuerza la voluntad de una minoría y quebrando seriamente nuestra convivencia democrática.

Los representantes de las Fuerzas Armadas en el Gobierno trabajan en procura de la paz nacional y están poniendo los medios adecuados para que la voluntad del pueblo se exprese genuinamente en marzo. Corresponde a la opinión democrática cooperar a este desenlace con gran fe en el porvenir.

Elecciones contra la dictadura

(14 de enero de 1973)

Se comenta en esta oportunidad el discurso pronunciado por el Ministro de Hacienda Fernando Flores, en el que se anuncia el control de los abastecimientos para los consumidores (EM, 11 enero, pág. 1). En él señala que las industrias que produzcan bienes de consumo masivo deberán celebrar contratos de exclusividad de venta al Estado; que las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) de cada barrio establecerán las cuotas de consumo familiar; que las familias deberán comprar siempre en determinados lugares, donde serán atendidas por aquellos comerciantes que firmen acuerdos con el Gobierno. También se anuncia la creación de centros de abastecimiento rural.

Debido a las críticas que provoca este discurso, el Secretario General de Gobierno desmiente que se vaya a aplicar un racionamiento (EM, 12 enero, pág. 25).

La Semana Política

UNA VIDA CLAUSURADA

El Ministro Flores anunció oficialmente el propósito del Gobierno de establecer el racionamiento. Dijo el Ministro: "Sobre la base de una cuota de productos necesarios por familia, que se establecerán, que estará compuesta por artículos como aceite, azúcar, arroz, café, carne, para alcanzar alrededor de treinta productos, las organizaciones del pueblo a nivel local (JAP, comandos comunales), en las que participen los comerciantes, programarán las necesidades periódicas de productos esenciales y determinarán las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial". En otro lugar expresa: "Las JAP tomarán las medidas necesarias para relacionar de modo estable a las familias con los comerciantes ubicados en el área. Así se trata de

obtener que la clientela de cada comerciante sea todo lo regular que se pueda...". "La JAP definirá, de acuerdo con la canasta popular, las necesidades reales de cada familia. Los comandos comunales y la Secretaría Nacional de Distribución prestarán en estas materias la asistencia técnica y los recursos".

La respuesta de la opinión pública ante el discurso del Ministro no se hizo esperar y adquirió el tono enérgico que las circunstancias imponen. Partidos, gremios, parlamentarios, dirigentes políticos y toda la prensa democrática dieron la voz de alarma.

En una jugada incomprensible, la Secretaría General de Gobierno ha calificado de "sucias maniobras publicitarias" a las informaciones y protestas que se basan en el texto mismo del discurso pronunciado por el Ministro Flores a nombre del

Gobierno. La parte de dicho texto, que reproducimos al comienzo de esta columna, es suficientemente explícita como para que no pueda dudarse de que el oficialismo quiere el racionamiento.

La tarjeta, la libreta o la canasta familiar significan el control político sobre los consumos de víveres y demás artículos indispensables. Con razón, el discurso del Ministro Flores suscitó la imagen de la dictadura.

Pero no se limitó el Ministro de Hacienda al anuncio del racionamiento. Fue más allá: su exposición prueba que los organismos comunistas de base u "organizaciones del pueblo a nivel local", como los llama el señor Flores, configuran una operación revolucionaria de vasto alcance y que se encuentra en marcha desde hace tiempo. Lo único que ha hecho el Gobierno ahora es asignar un papel ostensible a los comandos comunales y a las JAP, precisamente en el control político de los abastecimientos.

La operación subversiva de los comandos comunales y de las JAP es el paso más importante dado por el marxismo en el esfuerzo por aniquilar la democracia chilena.

Cuando el Presidente Allende subió al poder los personeros del régimen solían referirse con frecuencia a la "vía chilena de transición al socialismo". Los comunistas fueron remisos en usar el término, pero el concepto de una marcha al socialismo por la vía democrática estaba en las exposiciones de sus teóricos. El Presidente Allende marcó más que nadie el carácter chileno de su propio camino y habló de un socialismo con sabor a empanadas y vino tinto.

Hubo entre nosotros muchos ingenuos que creyeron en este socialismo a la chilena e imaginaron que la democracia, el pluralismo y el estado de derecho no iban a acabarse en el país así como nunca pensaron que a muy corto andar faltarían también las empanadas y el vino tinto.

El mérito del discurso del Ministro Flores es evidenciar con un impacto inolvidable el hecho de que "la vía chilena" está clausurada, que no sirve para el tránsito y que el marxismo ha tomado el camino habitual de la dictadura.

Esto se sabía por los continuos atropellos a las leyes, por las ocupaciones ilícitas de lugares de trabajo, por los hechos de violencia, por el desconocimiento de los fallos judiciales y dictámenes de la Contraloría y por la forma en que el Presidente de la República desafía las acusaciones constitucionales a sus Ministros. El estado de derecho ha dejado virtualmente de existir en el país y hasta un ministro lo califica de "viejo aparato" al servicio del capitalismo.

La clausura de la vía legal al socialismo, la sepultación del socialismo a la chilena, coincide casi con los primeros días del régimen.

La novedad del discurso del Ministro Flores es que notifica al país que el control político dictatorial sobre la ciudadanía está siendo entregado progresivamente a los Comandos Comunales y a las JAP, es decir, a organismos revolucionarios de base, cuya misión es asumir las tareas de vigilancia que competen a la fuerza pública y las de gobierno y administración que corresponden a las autoridades legítimas del Estado.

El socialismo a la chilena fue arrumbado por la Unidad Popular no sólo porque los comunistas prescinden ya de las leyes y de la Constitución en el plano administrativo y económico, sino también porque se está armando un poder paralelo al del Estado, una especie de remedo de los soviets.

El Presidente Allende no estuvo en lo cierto en su primer Mensaje del 21 de mayo de 1971, cuando afirmó que el camino de Chile hacia el socialismo era una alternativa de la clásica dictadura del proletariado. Los hechos de su Gobierno demuestran que aquella afirmación era falsa. Caminamos hacia la dictadura de los Comandos Provinciales y de las JAP, bajo un legalismo de apariencias y, para colmo, mientras en el plano superior actúan tres Ministros militares. Como ha ocurrido siempre en las revoluciones comunistas, debajo de las estructuras del poder oficial surge la maquinaria del partido que se expresa en organismos sociales y en conflictos aparentemente espontáneos, pero que van llevando el control totalitario sobre la población. Este control ejercido de barrio en barrio y de casa en casa es lo que permite construir las dictaduras comunistas y que no deja otro medio para los relevos en el mando que los súbitos golpes de palacio.

ELECCIONES CONTRA DICTADURA

El Ministro Flores formuló sus fatídicos anuncios porque el Gobierno debía hacer algo para combatir la postración en que lo tiene sumido su fracaso. La escasez angustiosa y la proximidad del ham-

bre son un argumento demasiado poderoso para cualquier gobierno que no se defienda con instrumentos dictatoriales muy drásticos. La Unidad Popular busca ansiosamente dichos instrumentos como manera de rehuir el veredicto de las urnas del domingo 4 de marzo.

La primera táctica ha sido un gran esfuerzo por irritar a los gremios, dejando de cumplirles las promesas, marginando de los trabajos o del acceso a las mercaderías a camioneros, contratistas y comerciantes, y desarrollando ofensivas campañas contra los colegios profesionales. La negativa de tarifas o de precios justos ha estado también entre los objetivos tácticos de la Unidad Popular contra los trabajadores independientes.

Se esperaba que la creación de los gremios más afectados fuera la iniciación de paros y aun de graves enfrentamientos sociales. Allí pudo encontrarse el pretexto para aplicar mano dura a los opositores y para establecer un clima de opresión que impidiera las elecciones.

Afortunadamente, los gremios han dado ejemplo de patriótica serenidad y esperan que el Gobierno rectifique su política suicida por propia iniciativa o como consecuencia de los triunfos democráticos de marzo. Saben los trabajadores gremialistas que cualquier desorden daría pie a la Unidad Popular para impedir las elecciones del 4 de marzo.

La segunda táctica dirigida al mismo objetivo se perfila en el anuncio de racionamiento del Ministro Flores, en las vociferaciones comunistas para empujar a la ciudadanía hacia el control político de los víveres y en la activa preparación

de los organismos revolucionarios de base que son la semilla de la dictadura del proletariado.

Se diría que el brusco descenso de los niveles de existencia de bienes de consumo y tal vez el fracaso de las peticiones de auxilio para aliviar en corto término el desabastecimiento, han decidido a los comunistas a apurar el paso. El esquema de organizaciones revolucionarias que debía funcionar después de las elecciones de marzo y el racionamiento previsto para entonces tuvieron que adelantarse. De este modo el marxismo se ha desenmascarado y se presenta ahora ante los chilenos con su verdadero carácter.

Quienes voten en marzo por la Unidad Popular manifestarán su preferencia por la dictadura comunista. Ni el puñado de radicales oficialistas, ni los API ni algún otro grupo náufrago que quede en el río marxista-leninista pueden tener la menor duda de lo que ocurre. Los comunistas marchan ahora rápidamente a establecer su autoritaria hegemonía, para lo cual se valen de su notable influencia en todos los niveles.

Los que voten en marzo por la Unidad Popular votarán además por el completo fracaso de Chile, pues se está viendo que los incontables resortes de poder adquiridos con voracidad por los comunistas se usan para fines de beligerancia social que acarrearán la ruina del país.

Los comunistas acuden ahora al recurso desesperado de la fuerza, pues no confían ya en evitar el desbande de la clase media y el creciente desánimo de obreros y campesinos.

Desde que el marxismo muestra su verdadero rostro, forzoso es llegar a la conclusión de que el proceso chileno entra a su capítulo decisivo. No caben falsos optimismos ni atenuaciones del drama. La lucha de estos días y la que debe librarse el domingo 4 de marzo exigen el concurso sin reservas de todos los ciudadanos. El combate es ineludiblemente contra la dictadura que está a la vista, contra la vigilancia revolucionaria en los barrios, en las poblaciones y en las viviendas, contra el control político de los víveres y abarrotes, contra el programa del hambre.

En muchas oportunidades un viaje extemporáneo o un día de descanso inoportuno producen fatales abstenciones de los electores. Asimismo la indiferencia de algunos durante la campaña para cooperar al éxito de los candidatos democráticos puede ser causa de que se pierdan valiosos elementos en el próximo Congreso.

El discurso del Ministro de Hacienda, señor Fernando Flores, señala una etapa decisiva en la historia del país. Cierra el capítulo de los equívocos y las verdades a medias para entrar al capítulo de la verdad completa, al punto en que se enfrentan la dictadura con la democracia, el totalitarismo comunista con la libertad y la tendencia proletarizadora y rencorosa con el impulso de la reconstrucción y del desarrollo.

Las elecciones del 4 de marzo deben ser el fin victorioso de la etapa recién abierta con el anuncio de los racionamientos y de la vigilancia revolucionaria de los Comandos Comunales y de la JAP.

Triunfo democrático

(11 de marzo de 1973)

Los resultados de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973 son los siguientes:

Partido Demócrata Cristiano: 19 senadores, 50 diputados

Partido Nacional: 8 senadores, 34 diputados

Partido Socialista: 7 senadores, 28 diputados

Partido Comunista: 9 senadores, 25 diputados

Partido Radical: 2 senadores, 5 diputados

Partido Izquierda Radical: 3 senadores, 1 diputado

Partido Izquierda Cristiana: 1 senador, 1 diputado

Partido Acción Popular Independiente (API): 2 diputados

Partido Movimiento Acción Popular Unitaria (MAPU): 2 diputados.

En total, la Confederación Democrática (CODE) obtuvo el 54,70% y la Unidad Popular el 43,39% de los votos.

La Semana Política

TRIUNFO DEMOCRÁTICO

Al examinar los resultados de las elecciones del último domingo, de acuerdo a las cifras disponibles, uno no sabe si admirarse más de la capacidad del Gobierno para convertir una derrota en victoria aparente, o de la aptitud de los opositores para pasar bruscamente de exaltaciones a depresiones inmotivadas.

Los datos son conocidos: el Presidente Allende fue elegido con la primera mayoría relativa entre tres candidatos y obtuvo algo más del 36 por ciento en septiembre de 1970; en abril de 1971 el Gobierno y la Unidad Popular obtuvieron la mitad de los sufragios en los comicios municipales; en febrero de 1972, en Concepción, el Presidente Allende

estimó imposible ir al plebiscito en ese momento con motivo del proyecto de las tres áreas de la propiedad y señaló que el plebiscito se daría ahora en marzo, en las elecciones parlamentarias recién celebradas; el pasado domingo 4, el bloque de la Unidad Popular bajó del 50 por ciento conseguido en 1971 al 43 por ciento del electorado, en tanto que la oposición subió del 50 por ciento al 56 por ciento; el resultado del domingo significa para los partidos opositores el control del 60 por ciento de los votos en ambas Cámaras.

El Partido Demócrata Cristiano ocupa el indiscutible primer lugar en el electorado. El segundo lugar lo gana el Partido Nacional, relegando al tercer lugar al Partido So-

cialista y al cuarto puesto al Partido Comunista. Los dos grandes partidos democráticos representan más de la mitad del electorado. La Democracia Cristiana por sí sola tiene tantos diputados como socialistas y comunistas juntos.

El triunfo de la oposición es pues concluyente, tanto en número de sufragios como en asientos en el Congreso.

Esta victoria viene a mejorar el título democrático de la oposición, pues en los comienzos de este régimen se había hecho costumbre calificar de mayoría "espuria" a la del Congreso, dando a entender que la verdadera voluntad popular se reflejaba en las elecciones municipales y que los parlamentarios eran una especie de residuo o resto náufrago que apenas se mantenía a flote después de iniciada la revolución chilena.

El triunfo democrático debería robustecer la fe y la confianza de las fuerzas opositoras, pues no hay duda alguna de que el marxismo-leninismo jamás imaginó que después de más de dos años de gobierno iba a encontrar una mayoría opositora vigorosa y unos partidos democráticos en crecimiento que desplazan a los oficialistas.

Muchos opositores generalizaron su propia experiencia del desabastecimiento y de las colas, escucharon a sus compañeros y vecinos y, sobre todo, creyeron ciertas consignas; con todo lo cual se formaron el concepto de que estas elecciones iban a sepultar el régimen marxista en Chile y a darle a la oposición una rápida victoria por knock-out del Gobierno.

La ilusión de ganar los dos tercios del Senado o de conseguir una

cifra mayor del 60 por ciento de los sufragios correspondía a un espejismo. Otro fatal engaño era la confianza mítica en personalidades que le sirvieran de excusa al ciudadano común para no esforzarse por sí mismo y para no dar la lucha cívica en las condiciones impuestas por esta época.

Una vez más se ha dado el caso de que la Unidad Popular, diestramente manejada en este aspecto por el Presidente Allende, explota hábilmente la mitomanía de la oposición, le empuja a concebir desmedidas esperanzas o le exige en forma arbitraria marcas excepcionales para luego sembrar la imagen del fracaso democrático.

La Unidad Popular ha celebrado sus "triunfos" en asambleas públicas y discursos de sus más altos dirigentes. Se ha dado así el caso único de que el bando que obtuvo el 43 por ciento se sienta victorioso y mire como perdedor al que consiguió el 56 por ciento de la votación.

Ha sido tan eficaz la maniobra de la UP que muchos de los periodistas y observadores extranjeros no han entendido los términos de nuestro problema y no han constatado el evidente triunfo democrático de 56 contra el 43 por ciento, dejándose impresionar más por el respaldo al Gobierno que por la clara mayoría opositora.

Quienes habrían esperado triunfos democráticos más espectaculares ignoran que una revolución marxista como la que ha estado desarrollándose en Chile no se detiene con una campaña publicitaria para convencidos ni con las tareas partidistas tradicionales. Fue un exceso de optimismo suponer que el país podía

sacudirse con relativa facilidad de la experiencia marxista y despachar en una votación abrumadora a los equipos de la Unidad Popular.

Pero la democracia obtuvo un claro e indiscutible triunfo. El curso de la revolución, ya amenazado seriamente por el paro gremial de octubre, sufrió en estos comicios un nuevo golpe. El respaldo popular a la oposición y el crecimiento socialista en desmedro de los comunistas son circunstancias que complican en forma severa el desenlace político de las elecciones del último domingo.

Parece más lógico que el esfuerzo para superar al marxismo suponga una larga lucha y un conjunto de batallas perdidas y ganadas hasta llegar a la victoria. En este sentido, el porcentaje que obtuvo la oposición es lo suficientemente claro como para no admitir dudas sobre la victoria democrática, pero, al mismo tiempo, impone la necesidad de que los sectores democráticos se emancipen de los mitos, vivan de la realidad y aprendan a operar sobre ella con más acierto y constancia que hasta ahora.

LA TAREA FUTURA

Para sembrar el derrotismo entre los opositores, la Unidad Popular no ha vacilado en tergiversar una vez más la situación política.

Sus corifeos desde luego aseveran que jamás Gobierno alguno había encontrado un respaldo en las elecciones parlamentarias como el que obtuvo el Presidente Allende el domingo último. Citan al efecto el caso del Presidente Frei que en 1964 obtuvo el 55,7 por ciento de la vo-

tación y comparan ese porcentaje con el logrado por la Democracia Cristiana en las parlamentarias de 1965. Silencian sin embargo que aquel 55,7 por ciento estaba constituido por demócratacristianos, independientes, liberales, conservadores, agrarios y otras fuerzas, en tanto que el 42,3 por ciento de 1965 corresponde al Partido Demócrata Cristiano por sí solo, más su arrastre, cifra que debería compararse con el 22 por ciento que alcanzó en las elecciones municipales de 1963.

No es válida pues la comparación en 1964 y no es verdad que otros gobiernos no hayan logrado respaldo parlamentario mayor que su electorado inicial. Don Pedro Aguirre Cerda, en 1938, obtuvo 50,35 por ciento de los votos, y en 1941 el Frente Popular ganó las elecciones por el 52,25 por ciento, cifra que debe compararse con el 33 por ciento que tenían los partidos de izquierda en 1937. El Presidente Ibáñez, elegido con el 46,78 por ciento de los votos, consiguió al año siguiente llenar la mitad de la Cámara de Diputados con sus partidarios. Los citados son tan sólo ejemplos para que se vea que la situación lograda el domingo por el Gobierno no tiene nada de excepcional.

En estas elecciones el Partido Socialista, la tienda del Presidente, sobrepasó claramente a su aliado comunista, aunque ha quedado ocupando un tercer lugar después del Partido Nacional, pero la línea presidencial no es la de la actual directiva socialista sino la de los comunistas, partidarios de consolidar las transformaciones y tranquilizar a la inquieta clase media antes de dar la embestida final. El predominio so-

cialista constituye un resultado desalentador para la política del Presidente y ha empujado a los comunistas a publicar en su diario unas cifras de consuelo que se empeñan en demostrar que su debilitamiento se debe a que han cedido fuerzas a sus aliados en algunas localidades. En todo caso, tanto los comunistas como los socialistas perdieron fuerzas desde las elecciones municipales de 1971.

Con la crueldad que el marxismo emplea contra sus enemigos, la prensa de la Unidad Popular ha destacado burlescamente la pérdida sufrida por la CODE en las personas de los senadores Julio Duran y Alberto Baltra, así como del diputado Fernando Maturana. Corresponde lamentar muy sinceramente que esas personalidades no vuelvan por ahora al Parlamento, pues su ausencia no sólo perjudica a la oposición, sino a la propia democracia chilena.

Se cuidan sin embargo los marxistas de decir que la oposición refuerza vigorosamente a sus representantes en el Congreso. Las personalidades del ex Presidente Eduardo Frei, de Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez y Andrés Zaldívar son un aporte decisivo a la labor de los senadores Aylwin, Fuentealba, Hamilton, Lorca, Phillips y los demás representantes de la oposición en el Senado. En la Cámara, por su parte, Hermógenes Pérez de Arce, Claudio Orrego, Luciano Vásquez, Carlos Dupré, Maximiano Errázuriz, Silvia Pinto, Eduardo King, Gonzalo Yusef y Juan Luis Ossa, entre otros, son destacados efectivos en los cuales se depositan las esperanzas de la oposición.

El nuevo Parlamento significa una renovación y revalidación de los títulos de la mayoría opositora, pues el pueblo se ha pronunciado a favor de ella no antes sino después del 4 de septiembre de 1970. La mayoría democrática tiene pues derecho a ser oída y a participar como oposición en el desarrollo de los acontecimientos políticos. A su vez corresponde que la Unidad Popular abandone sus gestos de menosprecio para con los partidos mayoritarios y para con sus representantes que han recibido la investidura de manos del pueblo.

Los resultados electorales invitan al realismo político. La desaparición de los partidos chicos y el naufragio del radicalismo han dejado a la Unidad Popular reducida a su esqueleto comunista-socialista. No hay ya democráticos sino tan sólo totalitarios en el oficialismo. El pluralismo era gordura vana que sucumbió a los rigores de la contienda electoral.

Por el lado de la oposición, los resultados no eran lo que esperaban los optimistas, pero son halagadores para una política realista. Dicha política exige fortificar y modernizar a los partidos, impidiendo que ellos también caigan en el culto de la personalidad y sustituyan ese culto al esfuerzo de cada militante y simpaticante por prepararse y trabajar. La política realista implica también coordinar inteligentemente a los sectores democráticos. Las formas concretas que asuma esta coordinación dependerán de las circunstancias, y a este respecto sería deseable que las bases de los partidos tuvieran confianza en una conducción política y no se dejaran llevar por sus propias emociones.

La democracia ha ganado el domingo una batalla importante en una larga guerra. El marxismo es minoritario y muestra en forma inevitable sus divisiones internas, como en el caso de la querella intestina del MAPU, mero reflejo de la contienda entre comunistas y socialistas ultristas. El fracaso económico de la Unidad Popular es evidente. La democracia ganará no sólo la batalla sino la guerra si sus defensores resisten con igual energía el optimis-

mo bobo que el cobarde pesimismo y se disponen a luchar con paciencia para persuadir a todo el pueblo de que el esquema marxista-leninista es una receta que lleva al despotismo, a la miseria y a la supeditación del país por potencias extranjeras. La demagogia socialista logra todavía ocultar a muchos esta realidad, pero frente a una oposición vigilante no conseguirá impedir que los hogares chilenos vean lo que ocurre y reaccionen frente a la mentira organizada.

La marcha totalitaria

(18 de marzo de 1973)

El Presidente Salvador Allende dirige una carta al senador Gumucio, Presidente de la Unidad Popular, a fin de proponer la creación de un "Partido de la Unidad Popular" para desarrollar la acción futura del Gobierno (EM, 17 marzo, pág. 1).

El Presidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, señala que el partido puede desarrollar acciones comunes con la oposición y algunas de colaboración limitada con el Gobierno (EM, 16 marzo, pág. 1).

El partido MAPU se divide en dos fracciones: una encabezada por Jaime Gazmuri y la otra por Oscar Garretón (EM, 12 marzo, pág. 21).

La Semana Política

PARTIDO ÚNICO OFICIAL

A partir de los resultados del domingo 4, gobierno y oposición están preocupados de determinar si el debate político seguirá a dos bandas, o tres o más, es decir si los bloques que se enfrentaron en la elección parlamentaria van a mantener o no su cohesión interna.

El Presidente Allende, en carta dirigida al senador Rafael Agustín Gumucio, presidente de turno de la Unidad Popular, ha abordado directamente este problema.

A juicio del Jefe del Estado, las elecciones revelan una inmensa confianza en la Unidad Popular y ello obliga a sacar conclusiones inaplazables. En concreto, es preciso que el "Partido de la Unidad Popular" salga de su "estado embrionario" y se convierta en un instrumento de la revolución.

Aunque S. E. se anticipa a excluir expresamente el Partido Único, en el hecho lo que propone no es más que un partido único oficialista, pues

"se trata de articular a los diferentes partidos en un solo organismo que, respetando su autonomía, los integre y complemente, mejorando su accionar". Y agrega el señor Allende que "la función del Partido de la UP debería ser la de dirigir la acción conjunta del Gobierno y de las masas".

El objetivo de La Moneda es claro. En primer lugar, los dos grandes partidos marxistas han fagocitado a los pequeños y literalmente disuelto a los que representaban a las capas sociales y a los valores despectivamente llamados "pequeños burgueses". En segundo lugar, se trata de precaver nuevas divisiones, como la reciente del MAPU, y evitar así que la pugna entre socialistas y comunistas se traduzca en una pérdida de apoyos para el Gobierno. El Presidente Allende, atendiendo sin duda ofrecimientos unitarios del Partido Comunista, plantea ahora este partido único encaminado a definir cada vez con más claridad el carácter marxista-leninista de la revolución

chilena y su progresiva transformación en la dictadura del proletariado.

Expertos los comunistas en la promoción y gobierno de asambleas y congresos, nada tiene de extraño que esta galvanización de la Unidad Popular que se pretende a través del partido único surja de la proposición de un bullado congreso de masas.

Como es habitual, todos saben ya el fin que se persigue, las metas programáticas y la estructura de los acuerdos del eventual congreso, pero se dejará discutir largamente a muchos delegados y la maquinaria de publicidad comunista se echará a andar con toda su potencia.

Está previsto por el Presidente que el congreso de la UP sea un "auténtico congreso de masas" y que tenga la representación no del conjunto de la ciudadanía sino de "los que luchan por el socialismo". Será pues un congreso de masas *ad hoc*, manejado para conseguir la organización y la línea política ya resuelta en La Moneda.

El Jefe del Estado dicta además los temas o "grandes cuestiones del momento" que deberá abordar el congreso. Ellos son naturalmente "consolidar la base del Gobierno", "rescatar a los sectores populares bajo la influencia política e ideológica de la burguesía", "coordinar la acción del Gobierno con las organizaciones populares" y "desarrollar las instituciones del Poder Popular".

Confianza el Presidente Allende en que los partidos democráticos no puedan coordinar una estrategia que asocie a la mayoría que triunfó el 4 de marzo y temiendo, por otra parte, que se sigan abriendo grietas en la Unidad Popular, ha resuelto pa-

sar a otra etapa de la revolución marxista-leninista.

En la primera etapa, en que los radicales cenistas tenían algún papel que jugar, se habló del camino chileno, de la legalidad y del pluralismo. En la etapa del Partido Único se agudiza el movimiento envolvente del comunismo y el rígido cuño totalitario entra en acción disfrazado de "auténtico congreso de masas".

En la primera etapa revolucionaria los "resquicios legales" eran en último término un cierto homenaje a la autoridad de la ley. En la etapa del Partido Único se abandona siquiera la ilusión de Estado de derecho, pues uno de los grandes objetivos es "desarrollar las instituciones del Poder Popular". Esto significa el abandono de la libertad democrática, apoyada en la Constitución y regulada en leyes que aprueba el Congreso, para sustituirla por la nueva autoridad del Poder Popular, no generada en la ley ni en los Poderes Constitucionales y resuelta a imponer su dictadura frente y aun contra el Estado.

Antes de las elecciones se había advertido que el propósito del Gobierno era pasar del respaldo jurídico, a que le da derecho su título constitucional, al voluble respaldo de las masas o al apoyo siempre condicionado de los jerarcas comunistas. La Asamblea que proclamó a los candidatos de la Unidad Popular en el Estado Nacional marcó el término de la vía democrática hacia el socialismo. El Partido Único viene a demostrar que "la base" del Gobierno tenderá a ser cada vez más la de las "instituciones del Poder Popular". Cordones industriales, con-

sejos campesinos, comandos comunales y otras organizaciones formadas al margen de la ley y muchas veces con carácter francamente sedicioso están reemplazando a los mecanismos jurídicos del Estado.

Se comprende que el Partido Único Oficial ha de ser en los primeros momentos una transacción entre las aspiraciones y estrategias encontradas de comunistas y socialistas. Los comunistas ganan mucho, sin embargo, por el solo hecho de conseguir esta nueva organización, aunque programáticamente deban avanzar más allá en la destrucción de la República que lo que desearían en esta etapa. En el largo término la conducción del Partido Único de la Revolución Chilena o Partido de la Unidad Popular se radicará en quienes estén mejor organizados, posean la cabeza más fría y sean más constantes en el trabajo.

LA MARCHA TOTALITARIA

El llamado del Presidente Allende cierra ostensiblemente el paso a quienes soñaron con algún acuerdo que trascendiera a la Unidad Popular. "El congreso del Partido de la Unidad Popular, dice S. E., promovido simultáneamente desde la dirección política y desde la base, debe constituirse en un factor de movilización, unificación y concreción de los objetivos económicos, políticos e ideológicos de la coyuntura actual. Debe ser un vehículo más de la unificación del Gobierno Popular, de los partidos de la UP y de las organizaciones de masas unidos en un solo programa, bajo una misma dirección y en una común acción revolucionaria". Será pues un partido

monolítico en lo interno y una maquinaria agresiva frente a los que se queden fuera del congreso de la UP por no representar masas "auténticas" o a quienes no "luchan por el socialismo".

La oposición democrática se encuentra pues con una marcha totalitaria, con una reafirmación del "Poder Popular" y con una reiteración de la voluntad de establecer la dictadura colectivista de masas bajo la égida del Partido Único, a espaldas del Parlamento.

No hay lugar pues para engañarse e imaginar que hay disposición oficial para un verdadero diálogo democrático. Es posible que los comunistas den explicaciones privadas o públicas y se interprete el Partido Único en forma puramente electoral o parlamentaria. Pero lo cierto es que se trata de un Partido Único no democrático, fundado en las "instituciones del Poder Popular", y —lo que es más grave— de un organismo revolucionario que está previsto en las llamadas leyes del socialismo, como paso en el tránsito hacia la dictadura colectivista.

Recién efectuadas las elecciones, se produjo un movimiento ciudadano tendiente a consolidar de inmediato a la CODE, pero con mejor acuerdo los partidos prefirieron esperar la reacción de la propia Unidad Popular.

Efectivamente, antes de concebir una determinada política opositora lo sensato era aguardar si el Gobierno persistiría en su línea de conducta o introduciría rectificaciones que permitieran abrigar esperanzas de colaboración al menos parcial con las iniciativas oficiales.

La carta del Presidente Allende viene a aportar una claridad que hacía falta. Los opositores no pueden esperar tregua del oficialismo. La Unidad Popular se consolida en un bloque marxista dogmático e intransigente. Ese espíritu dogmático revestirá publicitariamente al congreso de la UP de una autoridad usurpada a los poderes constitucionales, y así como el "programa de la UP" —conjunto de intenciones no cumplidas o desfiguradas con el tiempo— ha pasado a ser una verdadera Carta Magna para el oficialismo, así el congreso a que ha citado S. E. tenderá a ser otro hito en el camino de las distorsiones de la verdad histórica y política que está recorriendo el país. Tales distorsiones son necesarias para que la revolución totalitaria se expanda. Por eso se fraguan sin tregua y sin escrúpulo en el intento de efectuar un gran lavado cerebral a todos los chilenos.

El presidente de la Democracia Cristiana, senador Renán Fuentealba, se mostró dispuesto a unir los esfuerzos de su partido con otras colectividades opositoras pero no descartó la posibilidad de colaboraciones limitadas con el Gobierno, aunque sin participar en él.

La iniciativa del Partido Único de la UP y los rasgos que le ha asignado S.E. a esta creación de La Moneda oscurecen considerablemente aquellos intentos de escapar a la bipolaridad que ha introducido el marxismo en la política chilena. La carta presidencial es una confirmación de que la lucha a dos bandas y las vallas al diálogo son la resultante del pensamiento oficial. Nada es pues más inauténtico que la posición comunista que presentó a ese

partido durante la campaña electoral como una congregación pacifista y como una garantía contra la guerra civil. Es posible, y sobre todo es profundamente deseable, que no haya un enfrentamiento dramático entre los chilenos, pero si ese suceso es evitado el mérito de la restauración de la convivencia nacional no estará ciertamente en los comunistas ni el Partido Único de la Unidad Popular, los cuales exhiben su criterio divisionista, discriminatorio y de lucha social.

El Partido Único de la UP encuentra por lo menos dos interrogantes para su fácil realización.

La querella interna del MAPU ha traído a primer plano las exigencias de la ultraizquierda que opera en diversos partidos y, entre ellos, en el Socialista. ¿Estarán los críticos de la conducción de la Unidad Popular dispuestos a someterse a la férula de los actuales dirigentes del oficialismo? ¿Podrá el extremismo resignarse a servir de base de apoyo al Gobierno y a aceptar las inevitables dilaciones, riesgos y frustraciones que comporta la labor gubernativa en esta etapa revolucionaria? En buenas cuentas, ¿cabrán en el partido único los extremistas del MIR, de la IC, del MAPU, del PR y del PS?

La otra interrogante seria es lo que harán las Fuerzas Armadas en un capítulo de la revolución marxista chilena que se singulariza por la brutal franqueza de sus postulados colectivistas, clasistas y de dictadura anónima del proletariado. Es evidente que los militares desempeñan un rol vital en esta época y que puede ser muy positiva su labor para impulsar transformaciones profundas

y justicieras de nuestra sociedad. El problema para los uniformados es determinar si una colaboración o una actitud neutral frente al comunismo está dentro de las posibilidades de una actuación positiva y patriótica de las Fuerzas Armadas. En otros países una actitud semejante ha significado la sujeción a la dictadura comunista y la desintegración de las

instituciones militares. No se ve por qué el caso chileno sea una excepción en la materia.

En todo caso, la oposición democrática (partidos, gremios y fuerzas independientes) y las instituciones armadas tienen algo que decir frente al Partido Unico y a la nueva configuración del poder que adoptan el Gobierno y la UP.

Un mensaje beligerante

(27 de mayo de 1973)

En la oportunidad se analiza el mensaje anual que lee el Presidente de la República ante el Congreso Pleno el día 21 de mayo, al abrir el período ordinario de sesiones legislativas (EM, 22 mayo, pág. 1). En esta oportunidad no se hicieron presentes en el recinto los parlamentarios del Partido Nacional y algunos de la Democracia Cristiana.

Aparte de este tema, un hecho importante se produce en Rancagua: Trabajadores y estudiantes que participaban en una marcha de protesta fueron baleados desde la sede del Partido Socialista, resultando 3 mineros y 3 estudiantes heridos. El jefe militar de la zona, aplicando la ley de Control de Armas, allana la sede y detiene a 3 dirigentes del partido, junto con incautar armas (EM, 24 mayo, pág. 1). A raíz de este hecho, el Ministro Clodomiro Almeyda, en su calidad de Vicepresidente de la República, se dirige al país por cadena nacional de emisoras (EM, 25 mayo, pág. 12).

La Semana Política

UN MENSAJE BELIGERANTE

El Mensaje presidencial leído el 21 de mayo se inicia con la consigna de origen comunista: "por la democracia y la revolución, contra la guerra civil", y termina con el grito de guerra popularizado por el che Guevara: "¡Venceremos!".

La Constitución Política dispone que "al inaugurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nación".

Si el Presidente Allende hubiera querido vulnerar expresamente esa norma constitucional y transformar su Mensaje en una arenga revolucionaria no habría encontrado mejor principio y fin de ella que los que hemos transcrito más arriba. Con la consigna antiguerra civil, el Mensaje se incorpora a la voz de

orden comunista y con el "venceremos" se hace eco de los castrismos que anidan en la UP.

Según el Mensaje, más que a los problemas económicos "coyunturales" el Gobierno atribuye importancia a la amenaza que pesa sobre nuestra democracia. La quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capacidad colectiva para soluciones que soslayan la violencia. Aumentaría la resistencia, cuanto más avanza la realización de las medidas revolucionarias.

Siguiendo la línea del primer Mensaje, S.E. cree que debe cumplir su programa marxista leninista —aun contra la mayoría del país— y que, si hay resistencia, "nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo". En otras palabras,

los poderes constitucionales y la ciudadanía en general tienen que aceptar la voluntad de S.E. o, mejor dicho, el programa comunista, pues de lo contrario "nuestro pueblo" adoptaría "obligatoriamente" soluciones de fuerza.

Con una lógica difícil de comprender sostiene que los que se apoderan de "un pedazo de tierra" no amenazan la paz, pero que en cambio sí la amenazan "aquellos que no toman nada porque lo tienen todo" pero que están obsesionados en crear la guerra civil.

Causa todavía mayor sorpresa comprobar la forma en que el Presidente ofende a los otros dos poderes constitucionales confundiendo los con los "verdaderos propulsores de la violencia".

Culpa al Parlamento de atacar a las autoridades administrativas y manifiesta que las acusaciones constitucionales se fundan en que dichas autoridades "interpretan ciertas normas legales según criterios distintos a los usados para mantener el régimen capitalista".

En velada alusión al Poder Judicial, dice el Mensaje que "reprochan a las autoridades no poner la fuerza pública al servicio irrestricto de los intereses capitalistas y en contra de los trabajadores". Así se refiere el Jefe de un Estado democrático a los reiterados oficios en que la Excm. Corte Suprema hace presente al Gobierno que las sentencias judiciales están siendo burladas por los Intendentes y por la fuerza pública que debe cumplirlas.

El Mensaje es la prueba más elocuente de que el Gobierno de la Unidad Popular se ha desorbitado, en el sentido literal de este adjetivo;

se ha salido de su órbita y entrado en las órbitas de los demás poderes públicos. Se trata de un Gobierno que legisla con decretos de insistencia y que falla los pleitos por el solo hecho de hacer caso omiso de las sentencias válidamente dictadas en los procesos respectivos.

Como si no advirtiera la acción concientizadora y la preparación al enfrentamiento que desarrolla la Unidad Popular; como si ignorara la forma en que las autoridades toleran y hasta incitan la quiebra del estado de derecho; como si no comprobara el aflojamiento de la disciplina y de los casi irrecuperables hábitos de trabajo y de respeto a la ley. S.E. interpreta el gran desorden en que está sumergido el país como "el enfrentamiento diario entre conservación y revolución". Al oírlo, parecería que Chile rompe las tinieblas de un pasado inicuo y estéril para avanzar hacia el progreso, cuando los habitantes del país comprobaban a diario la destrucción de la economía, de la moral pública, de la seguridad y del porvenir nacionales.

Toda la filosofía del Mensaje podría tal vez resumirse en una sentencia amenazante: "o nos dejan tomar todo el poder político, económico y social, o ustedes se harán responsables de una guerra civil". El diálogo, que menciona de paso el Presidente, no tiene sentido para la Unidad Popular sino en cuanto se transforma en una cesión de posiciones por parte de los adversarios del Gobierno.

CONDICIONES DEL CAOS

Este régimen, que no gobierna sino que des gobierna, trata de le-

vantar el Poder Paralelo o mal llamado Poder Popular. El Mensaje señala en forma precisa las condiciones que determinan la presente situación revolucionaria: "la jerarquía, la autoridad y el orden burgués han perdido su vigencia ante los trabajadores, quienes se esfuerzan por crear, dentro del régimen institucional del Estado y su normativa legal, un orden y una disciplina que repose socialmente en ellos mismos", dice S.E. Y añade: "Comités de Dirección del Area Social, Consejos Comunales Campesinos, Consejos de Salud, Consejos Mineros, Juntas de Abastecimientos y Precios, Cordones Industriales, Comandos Comunales, etc., son otras tantas manifestaciones de esta realidad surgida después de 1970".

Mientras el Gobierno se ha dedicado a invadir atribuciones de los otros dos poderes constitucionales y a fabricarse un poder ad hoc a expensas de la ciudadanía, la situación económica no permite optimismos según S.E.

"No hemos podido crear una dirección económica adecuada"; "nos ha atrapado la maraña burocrática"; no se pueden captar "los excedentes de la burguesía"; la política distributiva ha ido más allá de las posibilidades reales de la economía. Tales son algunas de las confesiones del Mensaje.

"No oculto lo grave de la situación económica" exclama tardíamente S.E., pues se trata de una gravedad inocultable, que se intentó negar por mucho tiempo y dio motivo para que recibieran injurias los que la advertían.

El Presidente no fija requisitos fáciles para salir de la quiebra: exige

nada menos que primen la responsabilidad y un superior sentido nacional. ¿Cómo puede exigir esto el régimen de la UP después de haber comprometido en una aventura las energías del país?

El Mensaje prevé horas duras para la seguridad de los chilenos, y estima que los problemas inmediatos son la inflación, el desabastecimiento y la crisis de la locomoción colectiva.

Se ve entonces que la misma destrucción institucional y ética tiene por paralelo la destrucción de la seguridad nacional y las posibilidades económicas más elementales.

Muy caro cuesta el Poder Popular que imagina S.E. Cuesta la crisis institucional, la pérdida de la jerarquía, la autoridad y el orden que el Presidente denomina "burgueses"; la amenaza para la seguridad nacional, el aniquilamiento de la moneda, el hambre y la ausencia de locomoción para la población.

En este cuadro de caos y de insatisfacción ciudadana —que está muy lejos por cierto de constituir una lucha entre conservación y revolución— sobrevienen las huelgas de empleados y obreros así como las protestas por el grave desabastecimiento. Como las autoridades dilatan la solución de los conflictos o sencillamente lo obtaculizan, sobrevienen distintos tipos de enfrentamientos que son reprimidos con gran dureza. El resultado es que los desórdenes aumentan y que la exasperación pública ante la ineficiencia y arbitrariedad administrativas genera estallidos de violencia cada vez más graves.

Los dirigentes de la Unidad Popular previeron sin duda las conse-

cuencias del profundo deterioro de las normas de convivencia y la crisis económica generalizada. Para salir con alguna explicación frente al descontento creciente de sus propios partidarios, la Unidad Popular encabezada por los comunistas imaginó la consigna de que está promoviendo una guerra civil con elementos internos y externos.

El Vicepresidente de la República, señor Clodomiro Almeyda, marcó su breve paso por el mando supremo con un discurso en que hace suya la consigna de la guerra civil. "Enfrentamos hoy una difícil situación externa provocada, en lo fundamental, por quienes pretenden desconocer la nacionalización del cobre como un acto soberano y legítimo ejecutado por el pueblo de Chile. Internamente los propósitos subversivos de una minoría dañada por nuestra acción en sus menguados intereses económicos, están ya en conocimiento de todos los trabajadores".

Estas palabras son pronunciadas al día siguiente de que trabajadores y estudiantes habían sido baleados por militantes socialistas, y en el momento de anunciar la reanudación de faenas, tan resistida en otros tiempos por la colectividad política del señor Vicepresidente.

La resistencia popular que provocan los desaciertos y la prepotencia de las autoridades se traducen en focos de conflictos en O'Higgins, en Valparaíso, en Linares, en Nuble y en Santiago. Las manifestaciones, contramanifestaciones, huelgas, usurpaciones de predios y choques entre grupos adversos son un triste efecto de la anarquía a que nos conduce la Unidad Popular. No son ni

pueden ser una guerra civil, pero los comunistas quieren interpretar las reacciones legítimas del sentimiento democrático como un intento antipatriótico y fratricida.

Aparte de escudar sus fallas en la amenaza de guerra civil, la Unidad Popular ha encontrado un medio de imponerse a la fuerza y de ahondar al mismo tiempo las divisiones entre los chilenos. Utilizando la obediencia y la disciplina de las Fuerzas Armadas, el Gobierno acude a ellas a través del discutible sistema de las zonas en estado de emergencia, a fin de establecer un virtual estado de sitio no votado por el Congreso y sometido a normas imprecisas. Con este sistema el Ejecutivo ordena a las fuerzas militares que salgan a imponer el orden, pese a que existe evidencia general de que los verdaderos causantes del desorden y provocadores de los enfrentamientos se encuentran en las filas del propio Gobierno cuando no invisten alguna alta autoridad, como Ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores. Los acontecimientos de Rancagua son ilustrativos al respecto. Las acusaciones constitucionales a los ministros del Trabajo y de Minería deben demostrar por los órganos jurisdiccionales correspondientes quién está contra la ley en el conflicto del cobre. Si llegara a comprobarse que la infracción legal proviene del Gobierno, a nadie llamará la atención que los mineros, estudiantes y habitantes todos de Rancagua, incurran en desórdenes ulteriores.

Pero a la inquietud reinante las tensiones aflojarían si le fuera posible al Presidente Allende introducir modificaciones profundas no sólo

en su política inmediata sino en sus propósitos finales. Estas modificaciones son las que introduciría cualquier gobernante democrático cuando ve el desastre de su política y cuando se cerciora de que la mayoría ciudadana no coincide con la meta que él señala.

La insistencia del señor Allende

y de los comunistas en su diagnóstico y en sus recetas es la verdadera causa de lo que ocurre. El Gobierno pide a la oposición que se incline ante su programa, pero valdría la pena de que el Ejecutivo se percatara de que las resistencias que despierta corresponden en gran parte al sentido común nacional.

"Soldado amigo... el pueblo está contigo"

(1 de julio de 1973)

El 29 de junio se produce una rebelión militar en el Regimiento Blindado N° 2 de Santiago. Tanques de dicho Regimiento llegan hasta el palacio de La Moneda, produciéndose un enfrentamiento con tropas de ejército que, al mando personal del Comandante en Jefe, general Carlos Prats González, ponen fin al movimiento, resultando 22 muertos, entre militares y civiles. Superado el incidente, el Gobierno llama a sus partidarios a un acto público en la Plaza de la Constitución.

El 25 de junio la Corte Suprema dirige una carta al Presidente Salvador Allende, en contestación a otra enviada por éste (EM, 26 junio, pág. 1). En ella reitera que el Gobierno no puede negar la fuerza pública cuando la solicitan los Tribunales, responde a las críticas sobre la administración de justicia, se refiere a los ataques de la prensa adicta al Gobierno, y en general señala que el Presidente ha sido informado erróneamente por sus asesores sobre el alcance de la aplicación de las leyes.

La Semana Política

"SOLDADO AMIGO... AL PUEBLO ESTA CONTIGO"

El comentario sobre los sucesos militares de la semana está sujeto a censura, conforme a lo dispuesto por el general Mario Sepúlveda Squella, jefe de la Zona de Emergencia.

Es discutible la constitucionalidad de la ley que otorga al jefe militar sin estado de sitio o de asamblea la atribución de censurar la prensa, pero esa ley existe y está vigente. La autoridad militar no hace más que cumplirla, porque, al revés de otras autoridades, la militar no se atribuye poderes jurisdiccionales ni invade las atribuciones privativas del Poder Judicial, limitándose a cumplir el precepto correspondiente.

Esta columna se ocupará tan sólo de las consecuencias políticas de los acontecimientos del viernes.

El viernes 29 de junio de 1973 quedaron demostrados dos hechos fundamentales: el primero de ellos es que la unidad y la disciplina interna de las Fuerzas Armadas les permite sofocar cualquier sublevación, y que sus mandos son capaces de restaurar en pocas horas la cohesión debilitada; el segundo hecho fundamental es que las Fuerzas Armadas son hoy día el poder más efectivo que queda en el país, tanto por su espíritu como por su fuerza.

Al sentirse el ruido de las primeras detonaciones, el desbande o el desaparecimiento de los grupos civiles demostró a las claras que la población tenía por primera vez la imagen clara de la eficacia del poder militar en la calle. El "poder popular" vino a lanzar sus primeros gritos cuando las fuerzas que diri-

gían los tres Comandantes en Jefe dominaron la situación.

La ciudadanía democrática debe sentir, pues, una gran confianza en las posibilidades de resurgimiento del país, en la medida en que las Fuerzas Armadas conserven su espíritu, su unidad y su eficacia.

El primer convencido ¿y alarmado? del peso que tienen las Fuerzas Armadas en nuestra historia de hoy es el Presidente Allende, convencimiento que comparten con no disimulada inquietud los comunistas y los demás grupos marxistas leninistas que los siguen.

A tal convencimiento obedecen las consignas de halago servil que los comunistas propagan entre su gente, como la de "soldado amigo, el pueblo está contigo". Consigna cuyo propósito evidente es socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas y establecer diferencias entre soldados "amigos" o "leales" y soldados "enemigos" o "rebeldes". Para los marxistas el interés por ganarse a los soldados y cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas tiene hoy la primera prioridad. Los comunistas han penetrado en los partidos políticos democráticos, en iglesias y comunidades religiosas, en sociedades culturales y filosóficas, en medios informativos y otros centros de influencia, pero su grave preocupación es que el más decisivo grupo de poder del país —las Fuerzas Armadas— permanece contaminado.

El Presidente Allende, por su parte, no escatima los elogios a las Fuerzas Armadas y a sus jefes. Su experiencia política le demuestra que el verdadero apoyo de su Gobierno reside en la lealtad de los militares,

pues ni los minoritarios partidos marxistas ni las bandas de malhechores del "poder popular" constituyen una base para resistir el desastre económico, social y político del "experimento" socialista en Chile.

Hábilmente, el Gobierno ha tratado de impresionar con la idea de que las Fuerzas Armadas "leales" y el "pueblo" sofocaron la insubordinación de algunos militares, pero la ciudadanía sabe que los únicos protagonistas de los sucesos del viernes fueron los hombres de las Fuerzas Armadas, que ellos dominaron su situación interna e impusieron el orden. Grupos de activistas salieron a aplaudir a las tropas una vez que el tableteo de las armas cesó. Más tarde, el señor Allende logró su propósito de que se reunieran sus partidarios en la Plaza de la Constitución, pero en su discurso no pudo menos que demostrar su reconocimiento más ilimitado hacia las instituciones armadas.

"Soldado amigo", gritan los comunistas, y les siguen los socialistas y demás grupos de la UP. Pero se olvidan demasiado pronto de que el Presidente Allende invitó al pueblo en los primeros momentos a salir a las calles a defender a la revolución portando toda clase de armas. Las autoridades militares han quedado, pues, notificadas de que la primera reacción oficial no fue acudir al sistema defensivo institucional, sino a la lucha callejera y a la toma de los lugares de trabajo. Quedó también flotando la duda acerca de si existen arsenales de que pueda echar mano la CUT y que no estén bajo el control de las Fuerzas Armadas.

Todos los elogios del discurso presidencial del viernes por la tarde a los altos jefes de las Fuerzas Armadas y las instituciones como tales parecieron destinados a disipar la mala impresión que produjeron los llamados del señor Allende en la mañana del mismo día.

OPOSICIÓN Y SEDICIÓN

Los acontecimientos del viernes están siendo aprovechados por el Gobierno para encontrar elementos represivos que le permitan hacer frente a las manifestaciones de repudio ciudadano contra los atropellos a la Constitución y a las leyes por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo. Ese repudio ciudadano, expresado en acusaciones constitucionales, dictámenes jurídicos, declaraciones de organismos y críticas periodísticas, obedece a los desaciertos e irregularidades de la UP, pero no tiene relación alguna con lo ocurrido en la mañana del viernes.

Con ardides diversos, el oficialismo ha logrado atenuar en la ciudadanía los efectos que debiera producir normalmente el hecho de que el Poder Ejecutivo no promulgue una reforma constitucional aprobada por el Congreso. ¿Son complotadores o sediciosos los que exigen que el Presidente de la República cumpla con el texto de la Constitución en esta materia?

También ha logrado el Presidente Allende que se adviertan los efectos en un nuevo y grave ejercicio ilegítimo de su poder. En efecto, la dura réplica de la Corte Suprema al oficio de S.E., sobre los motivos por los cuales las autoridades admi-

nistrativas han menospreciado los fallos judiciales, fue devuelta sin respuesta a dicha Corte.

El Presidente Allende trató como carta privada la manifestación oficial de un Poder Público en materias de su competencia. ¿Puede el Presidente de la República devolver sin respuesta al Congreso un proyecto de ley que no le agrada? ¿Es posible que el Presidente ordene devolver un fallo al tribunal que lo dictó? ¿Acaso es lícito que devuelva un dictamen de la Contraloría General de la República?

El señor Allende ha inferido un extremo agravio al Poder Judicial, y ello obedece a una causa profunda. S.E. cree en efecto que la revolución que encabeza lo coloca en un sitial muy superior a los Poderes Legislativo y Judicial. Se da así el caso paradójico de que el señor Allende está sujeto a las presiones y hasta a las reprimendas públicas de los partidos marxistas, pero cree, en cambio, que el Parlamento y el Poder Judicial no son sus iguales, sino sus subalternos.

Las palabras severas y dignas de la Corte Suprema sobre la independencia de los jueces constituyen una elevada lección para el país. El acto irrespetuoso de devolver el oficio que las contiene merece destacarse como una reacción ciega y completamente pasional.

Aprovechando la confusión del viernes en la mañana, el Director de Investigaciones, señor Alfredo Joignant, sin duda con orden del Subsecretario, señor Daniel Vergara, y del Ministro del Interior, señor Gerardo Espinoza, decretó la clausura ilegal de los diarios de la Empresa "El Mercurio".

La medida, presentada como de seguridad, era otro paso en la persecución de "El Mercurio", al cual no le perdona el Gobierno su denuncia serena pero firme de los atropellos a la Constitución y a las leyes que se han venido cometiendo en el país a fin de acomodar la convivencia chilena al marco de la dictadura comunista.

Nuestra casa periodística fue allanada, su personal desalojado y suspendido el trabajo de los tres diarios, de lo que resultó la clausura de "La Segunda" del viernes y severas interrupciones en la labor de este mismo diario.

La audaz e ilegal toma de "El Mercurio" se ejecutó completamente a espaldas de la autoridad militar y cuando el general Sepúlveda se impuso de ella ordenó que se levantara en el acto.

De este acto delictuoso debe responder el Gobierno, a menos que su propósito sea continuar exhibiendo la larga fila de abusos de poder,

confiado en que esos mismos abusos lo hagan invulnerable a las críticas y rompan los límites que tiene su mandato.

Las acusaciones constitucionales se multiplican porque también aumentan las infracciones a la Constitución y a las leyes. Pero el Gobierno quiere aprovechar la insubordinación de un regimiento para atribuir a maniobras conspirativas las acusaciones parlamentarias, las justas observaciones de la Corte Suprema y la crítica de la prensa independiente.

El mensaje en que el Ejecutivo pide el estado de sitio aprovechándose de una situación completamente dominada, muestra el propósito de confundir la oposición lícita con la sedición, y de lograr ahora nuevas herramientas legales para aplastar toda discrepancia contra una política que tiene sumido al país en la desunión, en la inquietud y en la destrucción de su potencial económico.

¿Quién manda?

(12 de agosto de 1973)

Se comenta el ingreso al gabinete ministerial de los Comandantes en Jefe del Ejército, Marina, Aviación y Carabineros, al que se refiere el Presidente Salvador Allende en un discurso antes de su juramento como ministros (EM, 10 agosto, pág. 1).

Días antes, el Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, había enviado una carta a Allende, en la que se solicita un Gabinete con participación de las Fuerzas Armadas, restablecimiento del Estado de Derecho, y poner fin a las "tomas" ilegales y a los grupos armados paramilitares (EM, 3 agosto, pág. 8). Dicha proposición fue rechazada poniéndose fin al diálogo DC-Gobierno, iniciado a requerimiento del Episcopado Nacional (EM, 4 agosto, pág. 1).

Asumen los cargos de Comandantes en Jefe Subrogantes el general Augusto Pinochet en el Ejército; el vicealmirante José Toribio Merino en la Armada, y en la Aviación el general del aire Gustavo Leigh (EM, 10 agosto, pág. 17).

La Semana Política

GOBIERNO CON MILITARES

Fracasado el diálogo con la Democracia Cristiana y en un clima de creciente inquietud, el Presidente Allende tomó —como en otras ocasiones— un camino imprevisto: llamó al Gabinete a los Comandantes en Jefe del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, más el General Director de Carabineros.

La fórmula surgió a mediodía del jueves 9. El jueves inmediatamente anterior —el día 2—, también a mediodía, el señor Allende rechazaba la sugerencia demócratacristiana de que ingresaran las Fuerzas Armadas al Gobierno, sosteniendo que los problemas políticos deben resolverse por los políticos y que era inconveniente introducir nuevos

cambios en el Ministerio cuando hacía poco se había formado el que encabezaba el señor Carlos Briones.

La prensa extranjera interpreta el suceso como una cierta contención del programa revolucionario, presumiendo que la designación de los altos jefes uniformados en Carteras ministeriales significa la presencia orgánica de las Fuerzas Armadas en el Gobierno y que dichos Ministros han tomado previamente las medidas para asegurar que su acción no se convierta en mero respaldo a la política marxista de la Unidad Popular.

En Chile, el Gabinete fue recibido con indisimulada resistencia por parte del sector extremista de la UP, en tanto que los comunistas adoptaron una actitud cautelosa, y los

socialistas fueron más reticentes todavía. Sin duda los partidos mayores prefieren dejar marchar el Gabinete, en la esperanza de que él contribuye al aplastamiento de la oposición gremial —transportistas, profesionales, comerciantes, etc.— y a debilitar los operativos de búsqueda de armas, pero en todo caso la fórmula militar no deja de inquietarlos.

Los demócratacristianos habían planteado al Presidente Allende la participación institucional de las Fuerzas Armadas en el Gobierno "con poderes suficientes, en mandos superiores y medios, para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones de S.E.", como base para restablecer la convivencia de los chilenos y cumplir las medidas mínimas de restablecimiento de la legalidad sugeridas por el señor Aylwin en el diálogo con el Presidente. La fórmula ministerial tampoco satisfizo, pues, al principal partido opositor, mientras que los nacionales y radicales socialdemócratas hicieron también presente su insatisfacción.

La disciplina de las Fuerzas Armadas —sólo puesta en peligro por la propaganda marxista y los focos subversivos ya descubiertos— no deja traslucir el juicio que merece internamente a las instituciones un aporte personal de sus Comandantes en Jefe al Gobierno de la Unidad Popular, sin que haya información plena sobre el nivel de compromiso y de autoridad efectiva que esto representa.

Los documentos emitidos por los diversos partidos políticos reflejan las actitudes que hemos reseñado. La concentración convocada por la

CUT y que se verificó horas después del juramento de los Ministros, fue considerada numéricamente débil, poco entusiasta y dominada por los grupos más extremistas y agresivos. Resulta difícil compaginar el nuevo Gabinete con este mitin de combate al control de armas, de exaltación del "poder popular", de llamados a quebrar la disciplina interna de los cuerpos armados, en que desapareció por completo el lema que se voceaba hace mes y medio, y que decía "soldado amigo, el pueblo está contigo".

El Presidente Allende pronunció un vibrante discurso antes del juramento ministerial. Dijo que éste era el Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a luchar contra la subversión e imponer el orden político y el orden económico. Puso especial énfasis en la acción y en la propaganda fascistas, pero no leyó ni mencionó la abundante propaganda ultraizquierdista, y sólo mencionó de paso una de las tentativas subversivas de la extrema izquierda.

Salió del Ministerio del Interior el señor Carlos Briones —más amigo personal del señor Allende que socialista activo— y el partido que preside el senador Altamirano conservó tres Carteras vitales: Interior, con don Orlando Letelier; Relaciones Exteriores, con don Clodomiro Almeyda, y Agricultura, con don Jaime Tohá.

Los comunistas se quedaron en el Ministerio de Economía, con don José Cademartori; en Justicia, con don Sergio Insunza, y en Trabajo, con don Jorge Godoy. Este partido dirige, pues, la CORFO y el área social, determina gran parte de las decisiones que debe adoptar el Mi-

nisterio de Hacienda, interviene en los conflictos laborales, actúa en los nombramientos judiciales y en las modificaciones legislativas de mayor importancia.

El Partido Radical obtuvo un Ministerio, el de Educación, y además la Secretaría General de Gobierno, en tanto que el MAPU del señor Gazmuri logró Vivienda, desplazando al señor Luis Matte Valdés, independiente. En Tierras y Colonización fue designado el General Director de Carabineros don José María Sepúlveda.

Como se sabe, el Comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, asumió en Defensa Nacional; el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, tomó el Ministerio de Hacienda, y el Comandante en Jefe de la FACH quedó en Obras Públicas y Transportes. Por diversas razones ésas Carteras plantean a sus titulares muy difíciles problemas derivados de la crisis moral y económica que afecta al país.

El señor Allende declaró en su discurso que ésta era la última oportunidad para evitar el enfrentamiento y la guerra civil, pero ni las medidas enunciadas, ni el equipo ministerial permiten deducir ánimo alguno de pacificación y de rectificación, al menos por el momento, pues la actuación individual de los uniformados no basta para llegar a la convicción de que el nuevo Gabinete sea la última oportunidad de salvar la paz y la seguridad nacionales.

¿QUIEN MANDA?

La serena declaración democratacristiana acerca del nuevo Gabi-

nete vuelve a mostrar que ese partido, a través de su presidente, senador Patricio Aylwin, está enfocando el punto esencial de la crisis que vivimos. Todo el esfuerzo del senador Aylwin, en el fenecido diálogo con La Moneda, se concentró en tratar de convencer al Presidente Allende de que es menester una autoridad que mande efectivamente, que sea obedecida y que por tanto se encuentre en condiciones de hacer justicia para todos y de cumplir las promesas que formule.

La razón por la cual la Democracia Cristiana sugirió en sus conversaciones con el Jefe del Estado la formación de un "Ministerio con participación institucional de las Fuerzas Armadas con poderes suficientes en mandos superiores y medios, para asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones de S.E. dentro del marco de la Constitución y las leyes, aplicadas a todos por parejo", fue precisamente porque hay evidencia de que el poder efectivo se ha desplazado desde la estructura institucional al llamado "poder popular" —en el seno del Ejecutivo— desde los mandos superiores a los mandos medios y bajos.

"No se restablecerán la "seguridad" ni la confianza entre los chilenos ni se logrará el "orden político" ni el "orden económico" —dice la declaración democratacristiana contestando directamente al discurso presidencial pronunciado antes del juramento de los nuevos Ministros— si las directivas políticas siguen mandando más que las autoridades, si las declaraciones del Presidente y las órdenes de sus Ministros siguen siendo desobedecidas

por funcionarios subalternos; si servicios tan importantes como los de Gobierno Interior e Investigaciones siguen en manos sectarias que inspiran justificada desconfianza; si los intentos sediciosos, las acciones delictuosas y los atentados terroristas que la mayoría del país condena no se investigan y sancionan por parejo, con objetividad y justicia, vengan de donde vengan; si se sigue discriminando en la distribución de alimentos y demás bienes esenciales, persiguiendo a trabajadores por razones partidistas e intentando destruir sus organizaciones; si no se respetan las atribuciones del Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia y la Contraloría; si se continúa impulsando un "poder de hecho" que rompe el poder institucional, y si el Gobierno en su conjunto, no sujeta su conducta a la estricta observancia de la Constitución y de la ley".

Lo que le dice la Democracia Cristiana al Presidente es que no basta con apellidar Gabinete de "seguridad nacional" al que juró el jueves ni referirse a que representa la "última oportunidad", para que se cumplan los propósitos de asegurar el orden político, el orden económico, la soberanía, la libertad y la democracia. Para todo ello es previo que se reconozca la quiebra profunda de la institucionalidad y que se constituya una autoridad capaz de mandar efectiva y legítimamente. Tal era el objeto de proponer la participación institucional de las Fuerzas Armadas en el Gobierno, el constituir las en garantía de una autoridad legítima y eficaz.

El Presidente ha seguido hasta ahora otra ruta: ha designado Ministros a los Comandantes en Jefe en conjunto con el General Director de Carabineros, pero ha mantenido a los "duros" del marxismo en las otras Carteras y en todos los puntos claves de la Administración y del sector público en general.

La acción del Subsecretario de Transportes, señor Jaime Faivovich, para requisar ilegalmente camiones particulares, asistido por Carabineros y por elementos de choque del Cordón Cerrillos, ilustra al país sobre el gran problema actual: ¿Quién manda en Chile?.

La declaración del Consejo de Gabinete, que prescinde de las promesas del Gobierno al gremio de transportistas y se limita a emplazar amenazantemente a los camioneros, el mismo día en que el señor Faivovich con sus secuaces del Cordón Cerrillos reprime con extraordinaria violencia a quienes cuidaban los vehículos estacionados en El Monte, no parece un buen síntoma. Y hasta se ha dicho que los Ministros militares habrían sido sorprendidos con esa declaración.

Todo el país desea que los uniformados tengan éxito en establecer una autoridad legítima y eficaz que dé seguridad nacional, paz interna, libertad y justicia, pero para todo ello requieren funcionarios subalternos leales y justos. El alto prestigio de los jefes militares no puede emplearse para consumir la destrucción institucional o para reprimir a los gremios que buscan trato equitativo y tranquilidad en su trabajo.

Profundidad de la crisis

(19 de agosto de 1973)

El general del aire César Ruiz renuncia a su cargo de Ministro de Obras Públicas y Transporte y al de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (EM, 19 agosto, pág. 29). Asume el cargo ministerial el general Magliocchetti.

El panorama del país a esta fecha, en que numerosos gremios se encuentran paralizados protestando en contra del Gobierno de Allende, es el siguiente: Violenta represión a mujeres (EM, 13 agosto, pág. 1); el MIR pide la democratización de las Fuerzas Armadas (EM, 13 agosto, pág. 15); en entrevista a El Mercurio el ex Presidente Eduardo Frei señala que "el país no vive de consignas cuando su estructura se deshace" (EM, 14 agosto, pág. 8); hay veintisiete interventores militares en la huelga del transporte terrestre (EM, 15 agosto, pág. 1); la inflación en 12 meses alcanza al 323% (EM, 18 agosto, pág. 1); se prorrogan en forma indefinida las vacaciones de invierno (EM, 18 agosto, pág. 29).

La Semana Política

OBEDIENCIA MILITAR Y NO POLÍTICA

Con la participación de altos jefes uniformados en el Ministerio, el Presidente Allende se proponía contener la avalancha de paros que genera la progresiva indignación gremial y atajar, al mismo tiempo, la virulencia del ala extremista del marxismo que compromete la estabilidad de su Gobierno.

Si a estos dos objetivos pudo añadirse el de la remoción de los mandos castrenses más disconformes con la línea comunista y castrista de la Unidad Popular —remoción que se conseguiría al provocar definiciones políticas dentro de las filas—, este objetivo sería una mera conjetura.

Como en octubre pasado, el extremismo marxista y el propio comunismo se dedicaron a amarrar las manos de los Ministros uniformados y a hacer imposible cualquier solución ecuánime de la grave crisis gremial.

En vez de permitir la acción de los Ministros, se puso en marcha el mecanismo de los Consejos de Gabinete, Consejos de Ministros y Comités Operativos Centrales, dando la impresión de que esos cuerpos colegiados asumían la autoridad efectiva.

Los gremios del transporte han clamado para que la decisión de su conflicto se entregue a quien corresponda, es decir, al Ministro del ramo, pero los "Comités", y en el

hecho el Presidente Allende, se preocupan más de obtener dividendos políticos de la crisis que contribuir a solucionarla.

En este difícil cuadro se produjo la renuncia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea a su cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes. La respuesta del señor Allende fue solicitarle la renuncia al mando de la FACH.

La actitud del jefe del Estado tiene mucha trascendencia porque trasluce con la mayor nitidez que el señor Allende confunde la obediencia militar con la obediencia política, confusión que tiene lugar en todos los regímenes marxistas.

Según el criterio presidencial, y de acuerdo al precedente que ha sentado, cualquier militar debe aceptar cualquier Ministerio y permanecer allí mientras S.E. lo determine, a menos que se resigne a abandonar su carrera.

Como, por otra parte, las tareas administrativas se confunden con el mero proselitismo político en el régimen de la Unidad Popular, resulta claro que los uniformados van siendo sometidos a ejecutar una política partidista y no a apoyar un gobierno del Estado.

En los regímenes comunistas no hay verdaderos ejércitos profesionales, sino efectivos castrenses adoctrinados en la ortodoxia del régimen y vigilados de cerca sobre su posición política. No es ese el caso de los sistemas democráticos, y mucho menos el de Chile, en que la política ha estado ausente por largos años de los cuarteles.

Ha sido gravísimo que el MIR exhiba ostensiblemente su penetra-

ción en las Fuerzas Armadas, hecho que anunció Miguel Enríquez en los funerales de Luciano Cruz, en agosto de 1971, y que pareció entonces una bravata. Ahora los graves hechos de Valparaíso y Talcahuano que afectan a la Armada vienen a demostrar hasta qué punto la política marxista se ha infiltrado en los cuerpos de la Defensa.

Pero tal vez más grave que esos hechos, controlables por medio de la disciplina militar, es la intromisión de la política en esas instituciones por iniciativa del Presidente Allende, ya que esto y nada más significa la petición de entrega del mando de la FACH al jefe superior que no está de acuerdo en seguir como Ministro en un ramo que no puede atender con las facultades necesarias.

La confusión, pues, de la obediencia (o, mejor, sumisión) política al Gobierno con la obediencia militar es el grave problema de esta hora, sobre todo cuando la obediencia política implica someterse a una estrategia de desintegración nacional.

Es objetable la posición de aquellos políticos que pretenden hacer descansar sobre los militares toda la solución de un gravísimo conflicto nacional, cuyas causas se remontan a muchos años atrás, pero nada es más amenazante para el orden institucional que la confusión que viene estableciendo el régimen entre la obediencia militar y el servicio a una política de conquista de todo el poder. Más grave es todavía que S.E. pretenda tener Ministros en cargos que son políticos y que no puedan discrepar por ser militares.

PROFUNDIDAD DE LA CRISIS

La solución del conflicto gremial del transporte y de sus secuelas no se ha conseguido con el hecho de que Ministros uniformados participen en el Gabinete. La intemperancia del subsecretario de transportes señor Faivovich y el esfuerzo de muchas voluntades extremistas por transformar los problemas gremiales en causas de enfrentamiento político han endurecido la posición de los gremios.

En especial, el paro de los transportistas es gravísimo para la población y sus efectos a corto y a largo plazo son extremadamente duros. El corte de la circulación de personas y mercaderías en el territorio tiene un impacto decisivo en la economía general. Pero a los efectos económicos se añaden las consecuencias sociales del conflicto. Este surge de una realidad socio-económica insostenible por los afectados y son las bases, las agrupaciones locales, los más modestos camioneros, los que impulsan la línea dura para exigir que salga el señor Faivovich de la Subsecretaría de Transportes y que el Gobierno cumpla los 14 puntos a que los gremios lo consideran comprometido.

La situación inmoviliza por completo a varias provincias y amenaza con transformarse en uno de los peores momentos de la historia nacional. Desde luego, tal vez en ningún otro había estado en juego tan hondamente la propia unidad del país, ni se había comprometido hasta tal punto la posibilidad de subsistencia física de sus habitantes.

Si el Presidente Allende quería

llegar con sus Ministros militares a conseguir una nueva postergación de las aspiraciones de los gremios, la renuncia del general Ruiz hizo imposible la táctica dilatoria.

Por otra parte, si el Jefe del Estado quería frenar el extremismo de sus propias huestes, tampoco parece conseguirlo desde que la agresividad y la insolencia contra las Fuerzas Armadas dan la tónica de que la ultraizquierda está apresurada por llegar al enfrentamiento.

Siempre es difícil conocer el punto en que nuestro país llega a definiciones. Lo ocurrido con los sucesivos ultimátum y con otros episodios de la política demuestra precisamente que la tendencia general es flexible, pero todo indicaría que la fatiga de los gremios, la exasperación de las provincias y el desconcierto de los políticos, factores que se suman a la inflación record y al caos económico, hacen pensar que la crisis nacional ha descendido a otros niveles de profundidad.

Se hace necesario que la ciudadanía examine con ánimo sereno la realidad de los hechos, que no se haga eco de rumores ni flaquee en sus convicciones y, finalmente, que confíe en que será posible encontrar la fórmula que resuelva con justicia los conflictos de los gremios y que ponga en marcha la producción del país.

En todo caso, en el análisis de la situación no puede olvidarse que, desde octubre de 1972 hasta la fecha y salvo en períodos en que la preocupación por las elecciones soslayó el problema, elementos extremistas han empleado los resortes administrativos para provocar a los

gremios y para empujarlos a actitudes de rebeldía. Los acontecimientos que ocurren en los hospitales, las tomas de industrias, los desmanes verbales de los líderes extremistas, el incumplimiento de los fallos judiciales o la tardanza en cumplirlos, la obstinación en dejar a los transportistas sin vehículos, sin repuestos y sin tarifas, la política discriminatoria de los mecanismos de distribución estatal y la persecución a los comerciantes, el menosprecio y la beligerancia contra los técnicos y profesionales, y tantos otros hechos semejantes, hacen presumir que, con la voluntad presidencial o por encima de ella, existe el propósito político de deshacer la libertad gremial y de imponer una dictadura marxista. Conflictos muchas veces fáciles de resolver se encrespan, se dilatan y terminan en rompimiento.

Cuando la Democracia Cristiana pidió la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al Gobierno, con cargos en el Gabinete y en mandos medios y subalternos, el Presidente se negó por completo a dicha fórmula. A cambio de ella quiso dar apariencia militar al Gabinete, que hace crisis en los momentos de cerrar este comentario.

En la responsabilidad de lo que ocurre no hay que buscar a personeros de segundo plano, por altamente colocados que ellos estén. Es el propio Presidente de la República quien tiene poderes y condiciones para superar la situación, es decir,

para contener un experimento marxista que el país no desea y que lo está llevando a su virtual disolución. Si el señor Presidente no puede evitar la aventura extremista, a nadie más que a él habrá que señalar como responsable de los sufrimientos actuales y futuros que experimente la población como consecuencia del caos. Todo el aparato publicitario se encargará de culpar a los gremios de las angustias de las dueñas de casa y de quien sabe qué otros graves daños de la convivencia chilena, pero la verdad es que no ha habido esfuerzo que no se realice para impedir que se haga imposible la paz, y siempre surge el "descontrolado" de turno que agrava los conflictos y hace de chivo emisario frente a la indignación pública. Es el momento de recordar que, detrás de esos "descontrolados", hay un Gobierno que no puede seguir haciendo suya la pretensión marxista-leninista de conquistar todo el poder.

La esencia de la democracia es un poder participado. La pretensión marxista de tomar para los suyos todas las palancas del mando encuentra resistencia hasta en los trabajadores independientes más modestos. El Presidente Allende gobierna una democracia que ha tenido siempre orgullo de sí misma y sería indispensable que escuchara al verdadero pueblo, sin contentarse con atender a cortesanos disfrazados de revolucionarios y distinguiendo además la obediencia militar con la militancia política.

Acuerdo histórico (26 de agosto de 1973)

La Cámara de Diputados, por 81 votos a favor y 47 en contra, adopta un acuerdo en que se señala que el Gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución (EM, 23 agosto, págs. 1-10).

Allende responde al acuerdo de la Cámara afirmando que sólo puede ser destituido mediante una acusación constitucional (EM, 25 agosto, pág. 1). Luego de una manifestación en la que participaron esposas de oficiales del Ejército frente a su domicilio, renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército el general Carlos Prats González (EM, 25 agosto, pág. 34). Asume posteriormente el cargo el general Augusto Pinochet Ugarte.

La Semana Política

ACUERDO HISTÓRICO

El acuerdo que adoptó la Cámara de Diputados en dos dramáticas sesiones del miércoles 22 de agosto merece con justicia el calificativo de histórico.

En el documento se establece: "Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política, que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él —esto es, el señor Allende— solemnemente se comprometió a respetar".

Añade el acuerdo: "Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lo-

grar de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.

"Para lograr ese fin —continúa el documento— el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la Nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho".

En otras palabras, la Cámara de Diputados, es decir, la rama legislativa competente para fiscalizar al Gobierno y formular observaciones

al Presidente, afirma: primero, que el señor Allende ha violado las condiciones bajo las cuales el Congreso Pleno lo eligió Presidente de la República en 1970; segundo, que el Gobierno lucha por instaurar un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que nuestra Constitución establece; y, tercero, que el régimen ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho, a través del atropello permanente y sistemático de la Constitución y de las leyes.

Cada una de estas afirmaciones es demostrada minuciosamente, para concluir en la necesidad de poner pronto término a los gravísimos hechos —señalados en el acuerdo— y que entrañan el quebrantamiento institucional que aflige al país.

La energía de las aseveraciones va acompañada con la solidez de sus fundamentos y con la serenidad de sus palabras.

El proyecto de acuerdo fue planteado por la totalidad de los partidos democráticos y contó con los votos de todos los diputados de esas colectividades, exceptuando sólo el reducido número de los que físicamente no pudieron concurrir por enfermedad o dificultades de transporte. Las representaciones parlamentarias demostraron su fuerte cohesión interna y la oposición exhibió su completa solidaridad.

El documento es la prueba más contundente de que la democracia chilena no acepta ni aceptará el marxismo-leninismo. La incompatibilidad entre la una y el otro se afirma por el Parlamento y, dentro de él, por la Cámara de Diputados,

que es competente para formular tan grave declaración.

La Moneda movió sus mejores influencias políticas para evitar el acuerdo o, al menos, para restarle votos. La UP y, en especial, los comunistas, emplearon todos los recursos reglamentarios y psicológicos para eludir el pronunciamiento de la Cámara. Incluso, en un acto de grave irresponsabilidad, pidieron sesión secreta y en ella sus representantes habrían hecho afirmaciones sobre supuestas amenazas externas que trascendieron al exterior, y que fueron luego desmentidas por la Cancillería.

La democracia triunfó, felizmente, en todos esos obstáculos.

El efecto político más inmediato de la declaración fue la renuncia del general Prats a sus cargos de Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército, si bien es cierto que dicho general fundamenta su renuncia más bien en asuntos internos de su institución.

En el extranjero, los medios informativos atribuyen gran trascendencia al acuerdo parlamentario y lo señalan como un revés serio para el marxismo-leninismo en Chile.

Lo más significativo es que, después de las sólidas razones del Parlamento, el Presidente Allende no podrá seguir empleando el deber de obediencia militar para exigir a las Fuerzas Armadas que colaboren al cumplimiento de su programa político marxista. Y, más aún, como lo expresa el diario francés "Le Figaro", y lo decía claramente el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro a fines de mayo, la violación abierta de la Constitución desligaría a las instituciones armadas del propio

deber de obediencia. De esto último surge la necesidad imperiosa en que se encuentra el Gobierno de enmen-
dar rumbos y de someterse al cau-
ce constitucional, como lo sugiere
el Parlamento en el acuerdo comen-
tado.

RESPUESTA PRESIDENCIAL

Los afanes que impone al señor Allende el desfondamiento moral y material del régimen pueden explicar la pobreza de su respuesta al Parlamento. No ha tenido el tiempo suficiente para meditar y redactar esa contestación, y quien lo hizo demuestra poca fe en la causa jurídica que sustenta, aunque suple el desánimo con las habituales y gastadas consignas.

En los momentos en que la Armada Nacional emite un comunicado bastante explícito sobre el carácter de la intentona subversiva marxista que tiene ya bajo control y se necesita sesión secreta para analizar con el Ministro de Hacienda situaciones que no se ventilan a la luz del día para evitar mayores daños al país, había derecho a esperar otra reacción del Presidente Allende frente al acuerdo del Parlamento. A esto se añade que los incumplimientos del régimen con diversos gremios más los crecientes incentivos a la indisciplina prolongan paralizaciones de actividades que son sangrías mortales para el país, lo cual también parecía aconsejar una rectificación de rumbos.

No hay en la respuesta presidencial una sola palabra que permita suponer el propósito de volver a la Constitución y a las leyes. No refuta ninguna de las graves acusaciones

específicas que el Parlamento le formula. Tampoco se hace cargo de que es esa inconstitucionalidad sistemática del régimen, además de la confusión ya señalada entre obediencia militar y sumisión política a un programa marxista, lo que arrastra a la crisis. No es, entonces, el Parlamento sino el propio Gobierno el que se niega a retirar las condiciones que impiden el regreso a la institucionalidad.

La respuesta del señor Allende se parapeta detrás del quorum de dos tercios del Senado que se requeriría para su destitución, y que las fuerzas democráticas no lograron en marzo último. El problema está mal planteado. Lo que el Congreso le ha dicho al Presidente es algo todavía más serio que formular una acusación constitucional en su contra. Le ha expresado que hay un quebrantamiento profundo y sistemático de las instituciones fundamentales, generado en el propósito de sustituir nuestra democracia por el totalitarismo marxista. A este quebrantamiento institucional, demostrado en forma irredargüible y corroborado por los hechos que todos los días experimenta cada chileno, debió dirigirse la respuesta del señor Allende. Es de toda evidencia que ese quebrantamiento no se salva porque la mayoría democrática tenga algo menos de los dos tercios del Senado.

La respuesta presidencial niega la facultad fiscalizadora del Congreso, atribuyéndole —con ironía— el propósito de constituirse en "poder paralelo" y "total". Acudiendo a un juego de palabras, expresa que las observaciones de la Cámara deben dirigirse al Presidente y no a los

Ministros, cuando las prácticas parlamentarias y el sentido común evidencian que las comunicaciones a los Secretarios lo son al Presidente y que lo que éste recibe puede ser enviado en original o en copia a los Secretarios de su despacho.

En fin, lo sustancial de la respuesta presidencial es el propósito inflexible de no enmendar rumbos, de "desarrollar la democracia y el Estado de Derecho", lo que debe entenderse como que el único intérprete, legislador y ejecutor de la democracia —entendido en lenguaje marxista— es y será el Gobierno que el señor Allende se honra en presidir.

Para seguir tenazmente con su esquema, en medio de la hiperinflación, de la anarquía laboral, de las inocultables tentativas insurreccionales, de la violencia en las personas y bienes y de los indisimulables escándalos administrativos, después que dos Poderes del Estado le representan la crisis de la institucionalidad, el señor Allende no hace más que terminar sus palabras de respuesta al Parlamento diciendo: "Para esta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile".

La población sufre las tremendas consecuencias de los paros, de la

inflación y de la falta de producción, pero no puede menos que comprender que la inflexibilidad marxista, en su afán de instalar en Chile un régimen calcado del extranjero, es la única causa del enorme "costo social" que el país paga en la lucha por defender sus libertades.

Los mejores esfuerzos por razonar y por apaciguar se estrellan con esta voluntad de inspiración internacional, que sujeta a los pueblos a su esquema esclavizados. En Chile, este aspecto ideológico se suma a la pavorosa incapacidad de ciertos funcionarios, a las luchas internas en el bando gobernante y al hecho casi inexplicable de que la agilidad política del Presidente Allende es solo de "muñeca", pues su mente y su personalidad se mantienen en los mismos tópicos, en iguales procedimientos y en los mismos fines del primer día que subió al poder. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados es representarle, con arreglo a sus propios atributos constitucionales, que no basta ya la "muñeca" y que es preciso una rectificación profunda de todo el esquema político y social, pues este esquema ha mostrado en la práctica ser incompatible con nuestra democracia y ruinoso para la nación.

Alternativas presidenciales

(9 de septiembre de 1973)

El primero de septiembre renuncia a su cargo el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero Cornejo, y su renuncia es rechazada (EM, 1 septiembre, pág. 1).

En el artículo se hace referencia a un análisis jurídico del profesor Jorge Ovalle sobre la posible declaración de inhabilidad del Presidente (EM, 7 septiembre, pág. 2).

Destaca entre los documentos publicados en estos días el comentario editorial del Director del Canal Trece de Televisión de la Universidad Católica, presbítero Raúl Hasbún, publicado el 6 de septiembre (pág. 17).

La Semana Política

PRESIÓN EN LA BASE SOCIAL

Existe un amplio consenso respecto de la inconstitucionalidad e ilegalidad del Gobierno. Y hay virtual unanimidad acerca de que el país está inevitablemente condenado a la destrucción si continúa aplicándose la política de tránsito hacia el socialismo que representa el Presidente Allende.

La ruptura del orden jurídico es evidente, y así lo dejó establecido con toda claridad el histórico acuerdo parlamentario de 22 de agosto, adoptado por la Cámara de Diputados en su calidad de rama fiscalizadora del Congreso Nacional.

La desarticulación social y económica es también evidente. Cada actividad productora, cada gremio, cada hogar, cada institución básica, experimentan directa y dolorosamente las consecuencias de la política de destrucción.

El Gobierno había encontrado excusas para su fracaso en las presiones del imperialismo y en las

maniobras de la sedición interna. Dichas explicaciones no tienen eco en la masa.

En lo que se refiere al exterior, es sabido que el país logró créditos de los Estados Unidos y de casi todos los países de Europa Occidental, además de obtener prórrogas para las deudas pendientes. Los problemas financieros internacionales del Gobierno han surgido de las dificultades para pagar las deudas antes que de iniciativas políticas imperialistas. Es cierto que no prosperó en el ambiente financiero capitalista la idea de la Unidad Popular de nacionalizar empresas sin pagar indemnización a sus legítimos dueños, empleando para el efecto uno de los tantos resquicios legales imaginados en estos tres años, pero los marxistas chilenos no pueden exigir a los capitalistas extranjeros que se resignen a sus resquicios legales.

En lo que se refiere a la inquietud interna, es indispensable consignar que los Partidos Comunista y

Socialista, así como los aliados menores de éstos, han llevado adelante desde el 4 de noviembre de 1970 una estrategia de provocaciones y persecuciones que no pudieron aminsonar con la demagogia de los primeros meses del régimen y cuya vertiginosa marcha nos conduce al estado presente.

El país ha sustituido virtualmente su actividad administrativa y productora por el proselitismo político. Los efectos de la politiquería anarquizante no podían hacerse esperar. Después de los despojos, del incumplimiento de los compromisos con los gremios, de las persecuciones, han sobrevenido la hiperinflación y los comienzos del hambre.

La base social de la democracia chilena, las mujeres, las juntas de vecinos, los gremios, han lanzado sucesivas voces de advertencia, pero la rigurosa aplicación del esquema marxista y el apetito de poder total y exclusivo no cedieron a razones ni a declaraciones. Los sectores democráticos debieron, pues, manifestarse con mayor decisión. Las mujeres dieron el ejemplo en el famoso desfile de las cacerolas de diciembre de 1971, lo que motivó el diagnóstico de Fidel Castro —entonces de prolongada visita en nuestro país— en el sentido de que entre nosotros había surgido el "fascismo".

Los comunistas llaman fascismo a todo movimiento popular que les ponga resistencia seria y profunda. A los aliados y tontos útiles los llaman "progresistas", y a la derecha tradicional la bautizan de oligárquica y reaccionaria. Cuando los comunistas hablan de fascismo es que

han encontrado a su adversario verdadero, al pueblo mismo que se levanta en contra de la guerra de clases y del exterminio de la nación.

La segunda manifestación de resistencia fue el paro gremial de octubre de 1972, originado en la burla del oficialismo a los derechos de las profesiones y de los gremios. Allí surgieron los camioneros, comerciantes, profesionales y técnicos a la cabeza de un movimiento gremial en que descollaron los dirigentes Cumsille, Martínez y Vilarín.

El tercer movimiento gremial de envergadura es el iniciado por la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones, que preside León Vilarín, al que se agregan los llamados Comandos Multigremiales —esto es, la acción coordinadora de gremios de empresarios, empleados, obreros y profesionales de cada provincia— y al que, finalmente, se suman casi todas las actividades del país, como puede comprobarlo quien visite nuestro territorio en estos días.

La UP ha empleado los términos más despectivos para referirse a este movimiento de la base social, que está constituido por los gremios a nivel regional y nacional. A su juicio, se trataría de la acción sediciosa de grupos fascistas y reaccionarios orientada a provocar la guerra civil. La verdad es que se trata de la reacción espontánea de un pueblo frente al fracaso más estrepitoso que haya tenido un Gobierno, en lo económico, en lo social y en lo político. Es sobre todo la reacción espontánea de un pueblo libre ante el peligro de su propia destrucción.

Para contener el movimiento el Gobierno ha puesto en práctica una doble estrategia. La primera de ellas

es la de tratar de comprometer políticamente a las Fuerzas Armadas con el programa marxista de la UP. El intento ha fracasado visiblemente y las instituciones de la Defensa prueban con hechos que no están al servicio de un interés partidista, sino del interés permanente del Estado.

La segunda estrategia buscada por el Gobierno ha sido el intento de dividir a la Democracia Cristiana a base de propuestas de arreglos dilatorios o de rectificaciones sólo aparentes. A través de mediadores y subterfugios, la UP ha tratado de que la Democracia Cristiana olvide el asesinato de Pérez Zujovic, las injurias y persecuciones contra sus militantes y el incumplimiento sucesivo de garantías y promesas, ante el temor de que una oposición dura precipite la crisis y la guerra civil. Afortunadamente para el país, la Democracia Cristiana está comprendiendo que no hay salida transaccional para salvar una institucionalidad quebrantada profundamente y para levantar una economía desquiciada.

ALTERNATIVAS PRESIDENCIALES

La situación del Presidente Allende como gobernante es de una gravedad extrema.

Sin duda él ha querido patrióticamente abrir a Chile un camino de progreso, de dignidad y de bienestar. Ha fracasado en el empeño. Todos saben que el país cae en la anarquía, en el retroceso, en la subordinación al extranjero y en las más duras privaciones. El propio señor Allende, por mal que lo informen sus asesores, debe haber visto las multitudes que se manifiestan frus-

tradas e indignadas con los resultados de su Administración. Como político de larga experiencia, él sabe de los sacrificios que las huelgas representan y entiende que no se para todo un país para seguir el capricho de unos pocos.

Quebrantada la institucionalidad, como lo demuestran el histórico acuerdo parlamentario de 22 de agosto; las declaraciones insistentes de la Corte Suprema en lo que a los atributos de este Poder se refieren, y los dictámenes de la Contraloría General de la República, ha surgido en la juventud universitaria y se ha extendido a los gremios un amplio movimiento que tiene por objeto pedir respetuosamente la renuncia del Presidente de la República, a fin de que las Fuerzas Armadas tomen la responsabilidad de conducir al país al imperio de la ley y de la paz.

El señor Allende ha dicho que no habrá golpe ni guerra civil. Los gremios le han señalado un camino práctico que, sin lesionar la dignidad personal del Presidente, permite reconstituir la institucionalidad chilena mediante la abdicación de quien aparece como responsable del desastre.

Apenas se insinuó la petición de renuncia, el señor Allende se anticipó a decir que no vacilaría en aceptarla si se lo pidieran los trabajadores, los campesinos, los profesionales y los técnicos. Si esto era lo que S.E. pedía, ahí tiene al país paralizado por conflictos que desembocan en último término en la solicitud de renuncia del Presidente.

Entretanto, la llamada presión en la base social está demandando, a través de las mujeres gremialistas, que el Parlamento declare la inhabi-

lidad del Presidente para el ejercicio del mando. El profesor señor Jorge Ovalle ha demostrado en un interesante análisis jurídico, publicado en nuestro diario el día viernes: "1°.- Que corresponde al Congreso Nacional, por medio de un acuerdo, formular la declaración de inhabilidad; 2°.- Que las causales en que se funde dicha declaración pueden ser de orden moral o de orden físico; 3°.- Que la declaración puede formularse con, sin o contra la voluntad del Presidente; 4°.- Que el Presidente puede encontrarse en posesión de su cargo; 5°.- Que la declaración no supone la aplicación de una sanción, pues sólo importa la comprobación de un defecto o falta de aptitud del gobernante que le impide (absoluta o adecuadamente) el ejercicio de su cargo".

El senador Bulnes, del Partido Nacional, declaró a las mujeres gremialistas que su partido considera "que éste es el momento para que el Congreso Nacional declare la inhabilidad del Presidente de la República". Por su parte, el senador Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, señaló a las damas gremialistas que "en este momento no creemos que la solución más conveniente y más eficaz para los intereses de Chile sea la medida que ustedes proponen", frase que no significa rechazo en principio de la tesis de la inhabilidad. La Social Democracia no se ha pronunciado específicamente sobre el punto, pero el trabajo del profesor Ovalle es un índice de la posición que puede adoptar.

Las mujeres gremialistas añadie-

ron que si su petición al Congreso no fuese atendida "nos veremos en la necesidad de golpear las puertas de los cuarteles".

El Presidente Allende tiene en sus manos la alternativa de la renuncia que le piden los gremios en un paro generalizado desde Arica a Magallanes. Puede esperar la decisión del Congreso acerca de su presunta inhabilidad para el ejercicio del mando. Pero en caso alguno le será posible dilatar sin gravísimo daño material y moral para la nación la salida de esta honda crisis. Dicha crisis no se resolverá, por cierto, sin el concurso responsable y decidido de las Fuerzas Armadas, depositarias únicas de la tradición y de la institucionalidad cuando el orden jurídico y económico experimenta un quebrantamiento radical e irremediable. Sólo de ese concurso patriótico para el encauzamiento del país puede esperarse un desenlace favorable a la pugna entre la minoría marxista y la voluntad mayoritaria expresada en los gremios y organizaciones sociales de base.

Los gremios han planteado el problema con cruda franqueza. Algunos partidos democráticos lo entienden de la misma manera. El futuro depende de las decisiones de S.E. y de las Fuerzas Armadas. No coopera a la superación de la dificultad la beligerancia que la Unidad Popular manifiesta contra las Fuerzas Armadas, y que las hiere en su dignidad y atributos institucionales. Este es un nuevo factor que impone al señor Allende la necesidad de ofrecer una salida generosa en resguardo del bien común del país.

La grave necesidad no espera (10 de septiembre de 1973)

Apartándonos de "La Semana Política", incluimos el editorial de El Mercurio del 10 de septiembre, escrito por el mismo comentarista, donde se analiza la situación del momento.

La grave necesidad no espera

Yerran gravemente los que suponen que la paralización del país es el resultado de maniobras o caprichos de unos pocos. Los políticos de izquierda, los dirigentes sindicales, todo aquel que haya trabajado en contacto directo con la masa no ignoran el enorme sacrificio y el dolor que imponen las huelgas. Por otra parte, los médicos, los economistas, los ingenieros y los hombres de empresa entienden muy bien las consecuencias que trae aparejadas el abandono de las actividades profesionales, técnicas y productivas del país. El largo y profundo paro nacional no es por tanto consecuencia de decisiones arbitrarias sino la manifestación más elocuente de repudio que Gobierno alguno haya recibido en nuestra historia. Nadie sería capaz de provocarlo desde arriba y las entidades que en él participan no están actuando por intereses limitados sino ante una necesidad grave.

Dicha necesidad importa un viraje que impida el hundimiento de Chile como nación organizada, independiente y libre.

A fin de postergar la atención de esta necesidad urgente se puso en marcha un intento de diálogo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana. Las conversaciones fracasaron porque la Unidad Popular había

ido ya demasiado lejos en sus posiciones y porque el Presidente no admitía que una entrada institucional de las Fuerzas Armadas en el Gobierno sirviera para garantizar la constitucionalidad.

Fracasado el diálogo y establecido en el acuerdo parlamentario del 22 de agosto que la institucionalidad se encuentra quebrantada, tomó más fuerza el paro gremialista iniciado por los camioneros, mientras muchos sectores empezaron a pedir la renuncia del Presidente de la República como una salida al conflicto nacional.

Por su parte, algunos juristas han sugerido que es posible que el Congreso declare la inhabilidad del Presidente para el ejercicio del mando, salida sin duda ingrata para el conflicto, pero cuyo valor constitucional es sólido y que sólo se pondría en práctica en el caso en que el Presidente no accediera a abrir una solución con su renuncia.

Pero el problema nacional escapa velozmente del plano jurídico al más humilde y urgente de la subsistencia. Con una inflación que llega al 323 por ciento en doce meses y con falta de harina y de toda clase de artículos esenciales, no cabe dilatar más el remedio a los males que aquejan al país.

Después que el Presidente Allende perdió la oportunidad de consultar al pueblo a propósito del proyecto de las tres áreas y luego que el Parlamento elegido durante la actual Administración ha formulado el grave juicio del 22 de agosto, es indudable que las insinuaciones de pedir ahora el voto de las bases resulta extemporáneo. Ya la base social está dando con desesperación su veredicto a través de reiterados paros, a los que se ha visto empujada por la propia Unidad Popular y que en estos días agudizan en términos dramáticos la pobreza y

las dificultades en que Chile se debate.

El Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría, en sus respectivas esferas de su competencia, han emitido pronunciamientos acerca de la crisis de la institucionalidad. La experiencia directa de la población es elocuente e infalible respecto del estado de angustia y de urgente necesidad en que se encuentra el pueblo.

Los altos niveles políticos y demás responsables de la conducción del país no pueden buscar ya nuevas instancias o nuevas consultas. La grave necesidad no espera.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

El poder social (31 de enero de 1971).....	289
Los comunistas y el Presidente (7 de marzo de 1971).....	294
Batalla de la información (18 de abril de 1971).....	298
Odios importados (20 de junio de 1971)	302
Marxismo disgregador (15 de agosto de 1971).....	307
Doble militancia (10 de octubre de 1971).....	313
Resguardo de la libertad (24 de octubre de 1971).....	318
Control popular (7 de noviembre de 1971)	323
El valor de la democracia (19 de diciembre de 1971)	327
Año tenso y dramático (2 de enero de 1972).....	332
La UP pierde otra batalla (23 de enero de 1972)	336
Poder comunista en el gabinete (30 de enero de 1972)	341
Pactos electorales (20 de febrero de 1972)	345
Poder y mayorías (19 de marzo de 1972)	350
Marchó la democracia (16 de abril de 1972)	354
El grave desquiciamiento (21 de mayo de 1972).....	359
Funcionamiento del sistema institucional (9 de julio de 1972)	364
La doctrina del Ejército (24 de septiembre de 1972)	369
Triunfo gremial (5 de noviembre de 1972)	373
Política de paz (10 de diciembre de 1972).....	378
Elecciones contra la dictadura (14 de enero de 1973).....	382
Triunfo democrático (11 de marzo de 1973).....	386
La marcha totalitaria (18 de marzo de 1973).....	391
Un mensaje beligerante (27 de mayo de 1973).....	396
"Soldado amigo... el pueblo está contigo" (1 de julio de 1973).....	401
¿Quién manda? (12 de agosto de 1973)	405
Profundidad de la crisis (19 de agosto de 1973)	409
Acuerdo histórico (26 de agosto de 1973)	413
Alternativas presidenciales (9 de septiembre de 1973)	417
La grave necesidad no espera (10 de septiembre de 1973).....	421